

COLOMBIA REPORTE NACIONAL VOLUNTARIO 2024



Gobierno del
Cambio



Director general

Alexánder López Maya

Secretario general (E)

Jorge Antonio Cuenca

Subdirector general Inversiones, Seguimiento y Evaluación

Alan Guillermo Asprilla Reyes

Director Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

David Santamaría Tobar

Equipo de Coordinación y redacción

Jairo Núñez Méndez

Secretaría Técnica Comisión ODS

Nathalia Calderón Gómez

Andrés Felipe Zapata Torres

Valentina Botero Sánchez

Sistema de Naciones Unidas

Coordinadora Residente de las Naciones Unidas

Mireia Villar Forner

Economista Coordinadora de Desarrollo

Natalie Gómez Arteaga

Comisión de Alto Nivel ODS

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Relaciones Exteriores

Diseño y diagramación

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

El Bando Creativo

© Departamento Nacional de Planeación

Julio de 2024

www.dnp.gov.co

Calle 26 # 13-19

Agradecimientos

Agradecemos a todas las entidades del sector público, organizaciones del sector privado, instituciones académicas y agencias de cooperación que contribuyeron de manera invaluable a la elaboración de este Reporte Nacional Voluntario (RNV). Sus aportes se materializaron en insumos para el desarrollo de contenidos, así como la participación activa en talleres, fundamentales para la elaboración del documento.

Expresamos nuestro especial agradecimiento a la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, por su valioso apoyo en la coordinación del documento, y al proyecto Global de Apoyo a los Procesos de Revisión e Implementación de los ODS (SDG-RI), parte de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI), fomentado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección de los Consumidores (BMUV), implementado por la GIZ, por el apoyo metodológico y logístico en la realización de talleres para la construcción participativa del RNV.

Agradecemos a todas las entidades del sector público, organizaciones del sector privado, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación que contribuyeron de manera invaluable a la elaboración de este Reporte Nacional Voluntario (RNV).

Secretaría Técnica de ODS

Departamento Nacional de Planeación



Naciones Unidas



Programa Mundial de Alimentos



Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura



Fondo de Población de las Naciones Unidas



Implementado por:



Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Fomentado por:



Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección de los Consumidores



Contenido

Colombia ante el reto de los ODS: una mirada sobre el hambre y la seguridad alimentaria

Introducción.....	8
Evolución de los Reportes Nacionales Voluntarios presentados por Colombia.....	10
Fortalecimiento estadístico y la Agenda 2030.....	11
1. Colombia frente a América Latina y el Caribe.....	18
Comparativo de la situación en Colombia frente a países de la región con contextos similares.....	20
2. ODS, ¿cómo vamos?	21
2.1 Estado de avance en la implementación de los ODS.....	21
2.2 Sinergias entre la Garantía del Derecho Humano a la Alimentación y los ODS 1, 13, 16 y 17.....	29
3. Diagnóstico sobre el hambre en Colombia	33
3.1 La situación actual de la inseguridad alimentaria en Colombia	34
3.2 Dimensión territorial.....	36
3.3 El ciclo de vida y las consecuencias del hambre en la niñez sobre las otras etapas.....	41
3.4 Dimensión étnica: indígenas, afrodescendientes.....	42
3.5 Grupos vulnerables	47
3.6 La pandemia de COVID-19.....	51





4. Retos para superar el hambre en el país.....	54
4.1 Trampas de pobreza	56
4.2 Seguridad alimentaria.....	60
4.3 Factores asociados a la (in)seguridad alimentaria	64
4.4 Sistemas agroalimentarios: retos de gobernanza.....	72
4.5 Retos en transparencia y lucha contra la corrupción	75
4.6 Retos de financiación	79
4.7 Capacidad de las entidades territoriales para enfrentar los retos.....	80
4.8 Participación social y comunitaria.....	82
4.9 ¿Cómo enfrenta la política pública estos retos?	86
5. Recomendaciones	92
5.1 Buenas prácticas y lecciones aprendidas del sector privado.....	94
5.2 Prácticas innovadoras y emergentes	95
5.3 Problemas estructurales para resolver previamente	97
5.4 Recomendaciones generales	99
5.5 Recomendaciones vanguardistas para la lucha contra el hambre	107
Anexos.....	109
Referencias	142



LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Evolución Reportes Nacionales Voluntarios

Figura 2. Barómetro de indicadores globales a escala nacional según metas de ODS 2023

Figura 3. Tendencias de los ODS en América Latina y el Caribe

Figura 4. Avances de los ODS en Colombia con relación a la Agenda 2030 – Año 2023

Figura 5. Prevalencia de la inseguridad alimentaria

Figura 6. Factores clave en la sostenibilidad de sistemas agroalimentarios

Figura 7. Niveles de inseguridad alimentaria por grupos de población

Figura 8. Incidencia de la pobreza en Colombia (%)

Figura 9. Aspectos claves de la seguridad alimentaria en Colombia

Figura 10. Modelo de ecuaciones estructurales sobre la inseguridad alimentaria

Figura 11. Estimación SEM sobre la inseguridad alimentaria

Figura 12. Proyecto Fortalecimiento de capacidades productivas en familias wayuu de los corregimientos de Nazareth y Siapana (municipio de Uribe)



Siglas y acrónimos

Adres	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ACM	Asociación Colombiana de Minería
Andeg	Asociación Nacional de Empresas Generadoras
Andesco	Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones
ANDI	Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ARL	Administradoras de Riesgos Laborales
BDUA	Base de Datos Única de Afiliados
BECO	Balance Energético Colombiano
BPND	Bases del PND 2022-2026
CCONG	Confederación Colombiana de ONG
CCE	Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
CIPI	Comisión Intersectorial para la Primera Infancia
Conpes	Consejo Nacional de Política Económica y Social
DAFP	Departamento Administrativo de la Función Pública
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DD. HH.	Derechos humanos
DESA	División de Población de Naciones Unidas (por su sigla en inglés)
ISA	Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes

DNP	Departamento Nacional de Planeación
DPS	Departamento para la Protección Social
ECV	Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE)
ECSC	Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (DANE)
EEVV	Estadísticas Vitales (DANE)
ENA	Encuesta Nacional Agrícola (DANE)
ENDS	Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Profamilia)
ENIG	Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (DANE)
Ensin	Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ICBF)
ENUD	Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (DANE)
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONU)
Fenalco	Federación Nacional de Comerciantes
Furag	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión
GEIH	Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE)
GIZ	Cooperación Alemana para el Desarrollo
GRI	Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative, por su sigla en inglés)



Colombia ante el reto de los ODS:

una mirada sobre el hambre y la seguridad alimentaria

Introducción



Desde la adopción de la Agenda 2030 en 2015, el país ha activado un marco institucional para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Colombia se ha destacado internacionalmente por ser uno de los países promotores de las agendas encaminadas al desarrollo sostenible. Desde el año 2000, con la firma de la Declaración del Milenio, el país reafirmaba el propósito de contribuir a un mundo más pacífico y justo. Años más tarde, la activación de la Agenda 2030 surge como una oportunidad para generar transformaciones y dar impulso político a temas de interés a escala internacional, nacional y local, que permitan mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, especialmente de los más vulnerables, siendo, además, una estrategia para generar mejores condiciones de vida en todos los niveles.

Desde la adopción de la Agenda 2030 en 2015, el país ha activado un marco institucional para la implementación de los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), poniendo en marcha diversas estrategias con el fin de evaluar y hacer seguimiento a los avances en la ejecución de la Agenda y sus ODS. El cuarto Reporte Nacional Voluntario que presenta Colombia no solo reconoce los avances generales obtenidos en las líneas de implementación de la Agenda 2030, sino que profundiza en una reflexión especial en la lucha contra el hambre, con la participación de diferentes sectores, identificando acciones que permitan convocar a todos los actores para el desarrollo de acciones que no dejen a nadie atrás, garantizando el acceso y la disponibilidad de alimentos a lo largo del territorio nacional.

El reporte, además, está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo que plantea el derecho humano a la alimentación como un tema central

para lograr que el país sea una potencia mundial para la vida¹. Este derecho va más allá del objetivo de desarrollo sostenible de lucha contra el hambre, ya que involucra no solo el acceso a la alimentación, sino también que sea adecuada, saludable y permita mejorar el bienestar de las personas y el desarrollo o ampliación de sus capacidades. La transformación del derecho humano a la alimentación busca incidir en la soberanía y seguridad alimentaria de la población de manera cíclica y con una respuesta institucional multisectorial. De esta forma, las acciones están encaminadas a mejorar la disponibilidad, el acceso y la adecuación de los alimentos.

Este informe se propone ir un paso más allá, identificando los retos y haciendo un llamado a todos los actores para garantizar el derecho humano a la alimentación en Colombia, a través de una construcción colectiva con representantes de la

sociedad civil, el sector público, la academia y la cooperación internacional²; así como un énfasis en La Guajira, uno de los departamentos que mayores desafíos enfrentan.

El documento, dividido en cinco partes, aborda desde un panorama general y comparativo de Colombia hasta aspectos específicos y desafíos clave en la lucha contra el hambre. Inicialmente, se presenta de manera breve la evolución frente a los Reportes Nacionales Voluntarios presentados por Colombia, así como los esfuerzos en materia de fortalecimiento estadístico que el país ha realizado. Seguidamente, se hace un comparativo de la situación en Colombia frente a países de la región con contextos similares y el estado de avance en la implementación de los ODS.

La tercera parte presenta un diagnóstico sobre el hambre en Colombia, enfocándose en su dimensión territorial, consecuencias a lo largo del ciclo

de vida, y la particular vulnerabilidad de ciertos grupos, como las poblaciones indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto armado y migrantes. Se discute cómo la pandemia de COVID-19 exacerbó la situación. Además, se examinan las “trampas de pobreza” y se evalúa la efectividad de las políticas públicas en abordar estos retos. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2022 se menciona como una herramienta importante para proporcionar datos sobre la inseguridad alimentaria en Colombia, revelando que el 28% de los hogares sufren de esta condición.

La cuarta parte se adentra en retos cruciales, como las inversiones en capital humano y la importancia de estas para superar la inseguridad alimentaria, a pesar de los desafíos que implica priorizar inversiones a largo plazo en contextos de necesidades inmediatas. Se analiza la interrelación entre hambre, pobreza, desigualdad

1. Ver anexo 1. Indicadores de la transformación Derecho Humano a la Alimentación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

2. Ver anexo 2. Construcción participativa del Reporte Nacional Voluntario 2024. El DNP, en ejercicio de la Secretaría Técnica de ODS, organizó cuatro espacios de socialización y diálogo con actores no gubernamentales, con el objetivo de recoger aportes del sector privado, organismos internacionales, entes territoriales, sociedad civil y academia para la elaboración del RNV-2024.

y exclusión social, destacando cómo la desigualdad perpetúa las trampas de pobreza. También se abordan los efectos de la inestabilidad y los conflictos en la seguridad alimentaria, y se discute la situación actual de la producción y abastecimiento de alimentos, el acceso a estos y la adecuación de la alimentación en función de los requerimientos nutricionales.

Finalmente, el documento enfatiza la debilidad en la gobernanza de las políticas públicas relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional,

resaltando la necesidad de una arquitectura institucional más robusta y de un desarrollo legal más integral. Concluye con recomendaciones de políticas públicas dirigidas a abordar estas problemáticas de manera efectiva, subrayando la necesidad de un enfoque que considere la multidimensionalidad de los factores que influyen en la seguridad alimentaria en Colombia.

Evolución de los Reportes Nacionales Voluntarios presentados por Colombia

A lo largo de los años, Colombia ha pasado de un enfoque general en la implementación de los ODS a una estrategia más específica y detallada en la lucha contra el hambre y la desnutrición infantil, con acciones concretas y resultados medibles en la recuperación nutricional de los niños. Adicionalmente, en un primer momento, el enfoque del país estaba centrado en posicionar la Agenda 2030 y todos sus objetivos en el marco nacional. Años después se ha hecho evidente la necesidad de precisar las acciones con respecto a cada una de las metas, además de las prioridades del Gobierno nacional para lograr avances notorios. En este reporte, el objetivo es brindar recomendaciones claras y concretas desde los distintos actores del desarrollo que permitan dar impulso a una de las problemáticas más estructurales y persistentes en la historia del país: la lucha contra el hambre.



Figura 1. Evolución Reportes Nacionales Voluntarios

	2016	2018	2021	2024
Integración ODS con el plan Nacional de Desarrollo	✓	✓	✓	✓
Enfoque en ODS específico	✗	✗	✗	✓
Mensajes claves sobre superación de la pobreza	✓	✓	✓	✓
Se reconoce la Agenda 2030 como una plataforma para mejorar la calidad de vida de la población	✓	✓	✓	✓
Se resalta el enfoque multidimensional para abordar los desafíos de la Agenda 2030	✓	✓	✗	✓
Se reconoce la seguridad Alimentaria como prioridad para el país	✓	✓	✗	✓
Participación multiactor	✗	✓	✓	✓
Comparación internacional o regional	✗	✗	✗	✓
Reporta procesos y ciclos teniendo en cuenta el anterior VRN	✗	✗	✓	✓
Identifica grupos vulnerables	✓	✓	✓	✓
Información sobre avances, estancamientos y retrocesos en la implementación de la Agenda 2030	✓	✓	✓	✓

Fuente: Secretaría Técnica ODS, DNP 2024

Fortalecimiento estadístico y la Agenda 2030

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su rol de Oficina Nacional de Estadística, y coordinador y regulador del Sistema Estadístico Nacional (SEN) de Colombia, es la entidad líder en la producción y fortalecimiento estadístico para los indicadores de los ODS. Siguiendo el principio de que lo que no se mide no se puede mejorar (Kelvin, s.f.), y en consonancia con el compromiso país de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, y con el Plan Estadístico Nacional 2024-2027, así como las líneas estratégicas del Plan de Acción de Ciudad del Cabo, Colombia ha implementado una estrategia



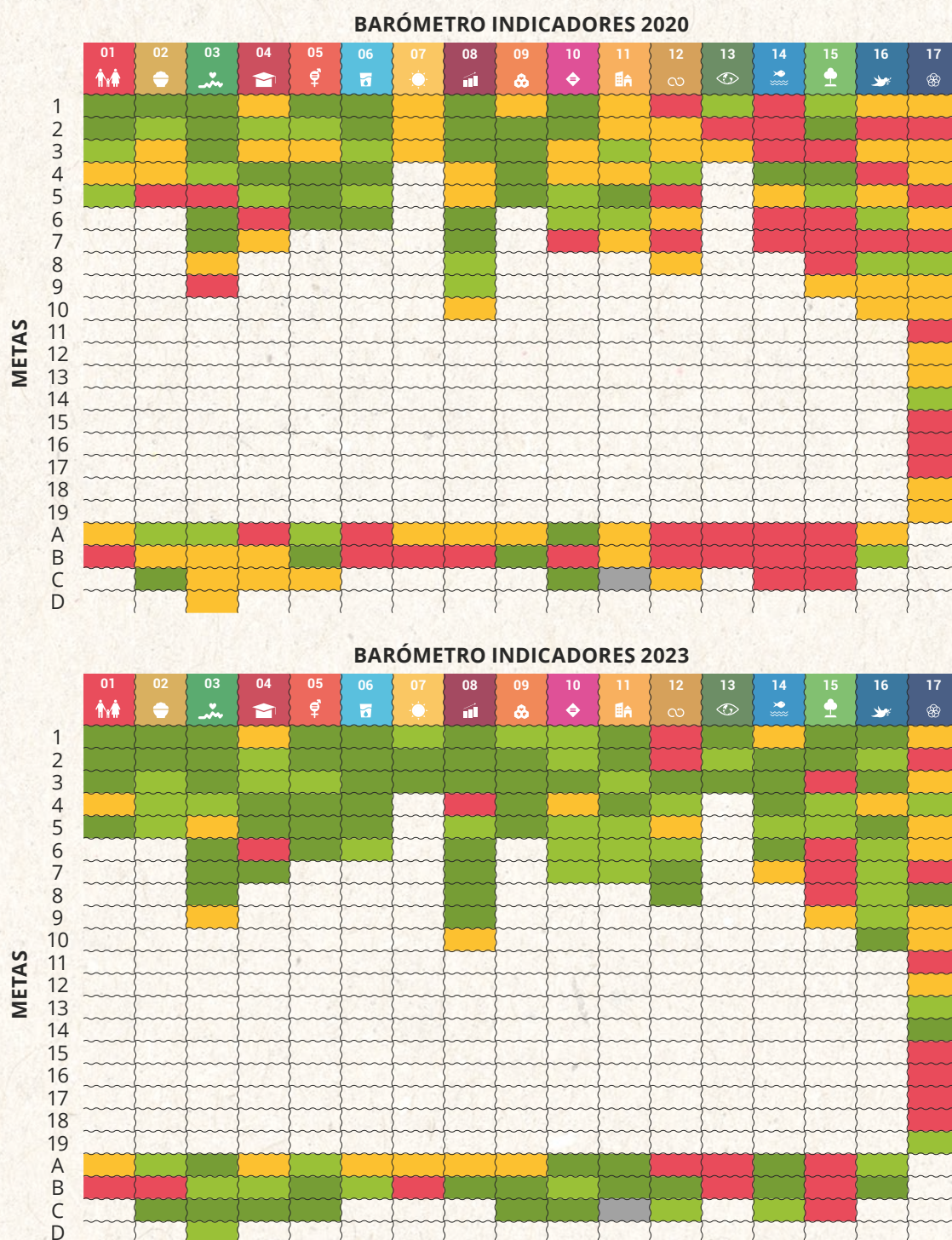
de fortalecimiento estadístico, que busca disminuir las brechas para la producción, la difusión y el uso de información estadística con enfoque territorial. Alineado a esta estrategia, y bajo el Marco de Cooperación 2020-2023, el DANE y las agencias del Sistema de Naciones Unidas, a través del Grupo Interagencial de los ODS, han venido trabajando en la medición de los indicadores de los ODS, con las desagregaciones sugeridas en los metadatos, utilizando fuentes tradicionales y no tradicionales.

Como se había mencionado en el Reporte Nacional Voluntario de 2021, el país tiene una herramienta para medir el avance en la producción de información, conocida como Barómetro³. Esta herramienta clasifica los indicadores en cuatro

categorías: A, el indicador se produce; B, el indicador no se produce y es posible producirlo con las fuentes de información existentes; C, se tiene alguna información, pero es necesario mejorarla o complementarla para producir el indicador; y D, no se tiene información para producir el indicador. En el periodo comprendido entre 2020 y 2023, se evidencia una aceleración en la medición de las metas ODS. Por ejemplo, la categoría A pasó de 37 a 77 metas; la categoría B, de 23 a 43; la categoría C, de 59 a 24, y la categoría D, de 45 a 24 metas. La disminución en las categorías C y D es consistente con la estrategia de fortalecimiento estadístico, en donde la mayoría de indicadores deben estar en la categoría A.

3. Para más información sobre el Barómetro, se sugiere consultar la *Guía para medición y reporte de indicadores globales*, disponible en <https://www.dane.gov.co/files/sen/lineamientos/Guia-medicion-reporte-indicadores-ODS.pdf>

Figura 2. Barómetro de indicadores globales a escala nacional según metas de ODS 2023



Fuente: Barómetros 2020 y 2023, DANE



Los avances logrados entre 2020 y 2023 han permitido la inclusión de 39 nuevos indicadores en el marco de seguimiento nacional, aumentando la batería de indicadores nacionales a 200. Estas mediciones se han conseguido por el uso no solo de fuentes tradicionales, como encuestas y registros administrativos, sino también de estadísticas experimentales, como redes sociales, técnicas de procesamiento de lenguaje natural y estimaciones en áreas pequeñas (SAE, por sus siglas en inglés).

Si bien se han alcanzado avances significativos a escala nacional,

aún persisten retos importantes a escala territorial. De los 147 indicadores nacionales con pertinencia territorial, tan solo el 35% tienen información disponible a escala municipal, según los resultados más recientes de 2023, lo cual muestra un avance de 13 puntos porcentuales frente a 2021. Este desafío subraya la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades estadísticas a escala local, para asegurar una cobertura completa y precisa de los datos necesarios para el monitoreo y apropiación de los ODS a escala territorial.

“

De los 147 indicadores nacionales con pertinencia territorial, tan solo el 35% tienen información disponible a escala municipal, según los resultados más recientes de 2023



Territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia

La territorialización de los ODS en Colombia ha sido una prioridad para reducir las brechas de información y asegurar el cumplimiento de los ODS a escala local. A continuación, se presentan los principales avances y estrategias implementadas:

1.



Guía sobre disponibilidad de información territorial: Su objetivo es contribuir a mejorar la disponibilidad de datos a escala territorial, con el fin de facilitar a las entidades locales la alineación de sus metas con los ODS y el acceso a recursos necesarios para su cumplimiento. [Consultar la guía]

2.



Medición de la línea base y reducción de brechas: En 2021 se identificó una brecha del 78% a escala municipal y del 65% a escala departamental en la disponibilidad de información. Gracias a un esfuerzo concertado, estas brechas se redujeron significativamente en 2023, alcanzando el 65% a escala municipal y el 44% a escala departamental.

3.



Estrategias innovadoras para 2026: El objetivo es seguir disminuyendo estas brechas para 2026, mediante estrategias innovadoras, como el uso de datos generados por la ciudadanía, para obtener información más precisa y oportuna.

4.



Inclusión de los ODS en los Planes de Desarrollo Territorial: Los ODS se han integrado en los Planes de Desarrollo Territorial, con el apoyo del Kit de Planeación Territorial (KPT), armonizando los objetivos nacionales con las metas locales.

Esta inclusión ha permitido a las entidades territoriales alinear sus planes de desarrollo con los ODS, aprovechando las elecciones territoriales para implementar estas estrategias.

5.



Nuevas tecnologías y fuentes de información: Se han utilizado nuevas tecnologías y diversas fuentes de información para mejorar la disponibilidad de datos, facilitando el seguimiento y la implementación de los ODS en todas las regiones del país.

6.



Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): Los PDET han sido cruciales para cerrar brechas de desarrollo en zonas vulnerables. Al articular los indicadores de seguimiento de los PDET con los ODS nacionales, se ha acelerado el cumplimiento de los objetivos, especialmente en áreas que requieren atención prioritaria.

Estos esfuerzos reflejan el compromiso de Colombia con la Agenda 2030 y destacan la importancia de la territorialización de los ODS para asegurar un desarrollo sostenible e inclusivo en todas las regiones del país.



En el periodo 2020-2023 se desarrollaron 27 notas estadísticas, 10 infografías y 6 documentos de conmemoraciones, reportes y análisis.

Un ejercicio para destacar es la medición del indicador 2.1.2 *Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población, según la escala de experiencia de inseguridad alimentaria*, el cual fue medido por primera vez en 2023 desde 2015, usando la Encuesta Nacional de Calidad Vida⁴. Si bien el país contaba con un indicador proxy calculado a través de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin), solo contaba con información para 2015, lo cual hacía que la información no estuviera reflejando la situación actual de Colombia y que no fuera comparable a escala internacional. Ahora, gracias a este nuevo cálculo, el país contará con información anual. Asimismo, este indicador cuenta con información a escala municipal, datos calculados por medio de los ejercicios de SAE.

Otro ejercicio que vale la pena destacar es el Visor de Discriminación del ODS 16⁵, que presenta los resultados obtenidos mediante cuatro fuentes de información: redes sociales, métodos de recolección como aplicaciones web, información

tradicional como la Encuesta de Cultura Política y algunos datos complementarios sobre la llamada Discriminación Estructural. La información disponible puede variar de ejercicio en ejercicio, pero permite tener un panorama más amplio sobre la situación del país en relación con este asunto, con niveles de desagregación que van desde la orientación sexual y discapacidad hasta la condición de migrante (para el ejercicio de la AppDiversa).

Adicionalmente, se destaca la implementación de una estrategia de difusión desarrollada por el DANE y el SNU, que tiene como fin mejorar y facilitar el uso de los datos y generar pedagogía sobre la Agenda 2030. En el periodo 2020-2023 se desarrollaron 27 notas estadísticas, 10 infografías y 6 documentos de conmemoraciones, reportes y análisis. Por otro lado, para asegurar disponibilidad, acceso y transparencia en la información, el país cuenta con dos plataformas complementarias. La primera corresponde a la Plataforma Nacional⁶, administrada por el

4. La información se encuentra disponible para consulta en: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/FIES/bol-FIES-2022.pdf> <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/NotaEstadistica-FIES-DANE-FAO.pdf> <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/estadisticas-experimentales#sociedad-5>

5. Para acceder al visor de discriminación: https://sitios.dane.gov.co/ODS_discriminacion/index.html

6. Para acceder a la plataforma ODS nacional: www.ods.dnp.gov.co



Departamento Nacional de Planeación (DNP) en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión ODS. Esta plataforma contiene la información de los avances realizados en el país para alcanzar la Agenda 2030 (reportes anuales, VNR, plataforma multiactor, entre otros). La segunda plataforma es administrada por el DANE y contiene toda la información relacionada con el fortalecimiento estadístico, el seguimiento y monitoreo de los indicadores de los ODS, así como la estrategia de difusión de la Agenda 2030⁷. En esta plataforma se pueden encontrar las publicaciones de avances y seguimiento en la medición de nuevos indicadores, ejercicios de medición de indicadores, publicaciones sobre indicadores ODS y un *dashboard* en el que se pueden observar los datos de Colombia para los indicadores nacionales.

A estos esfuerzos se suma el compromiso adquirido por el país en la Cumbre ODS 2023, al integrarse

a la Iniciativa de Alto Impacto “Poder de los Datos: Desbloqueando el Dividendo de los Datos para los ODS”, mediante el lanzamiento de la NDP: Datos Diferenciales para el Cambio, que posiciona la agenda de datos de Colombia como una agenda de desarrollo. Reconociendo la transversalidad de estos esfuerzos, la NDP establece un marco para fomentar la integración de la información estadística y geoespacial, así como para mejorar los mecanismos de reporte y seguimiento de los ODS a escala nacional y territorial. Estas acciones son esenciales para avanzar en la medición de los ODS y fomentar diálogos basados en evidencia.

Finalmente, los avances en el fortalecimiento estadístico, incluidos los relacionados con los ODS, serán presentados en el marco de la quinta edición del Foro Mundial de Datos que se llevará a cabo en Colombia, en la ciudad de Medellín, entre el 12 y el 14 de noviembre del presente año⁸.

7. Para acceder a la plataforma del DANE: <https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods>

8. Para mayor información sobre el Foro Mundial de Datos, consultar: <https://www.dane.gov.co/index.php/acerca-del-dane/informacion-institucional/brief-quinta-edicion-del-foro-mundial-de-datos-de-las-naciones-unidas>

1. Colombia frente a América Latina y el Caribe



La región tiene un cumplimiento promedio de la agenda del

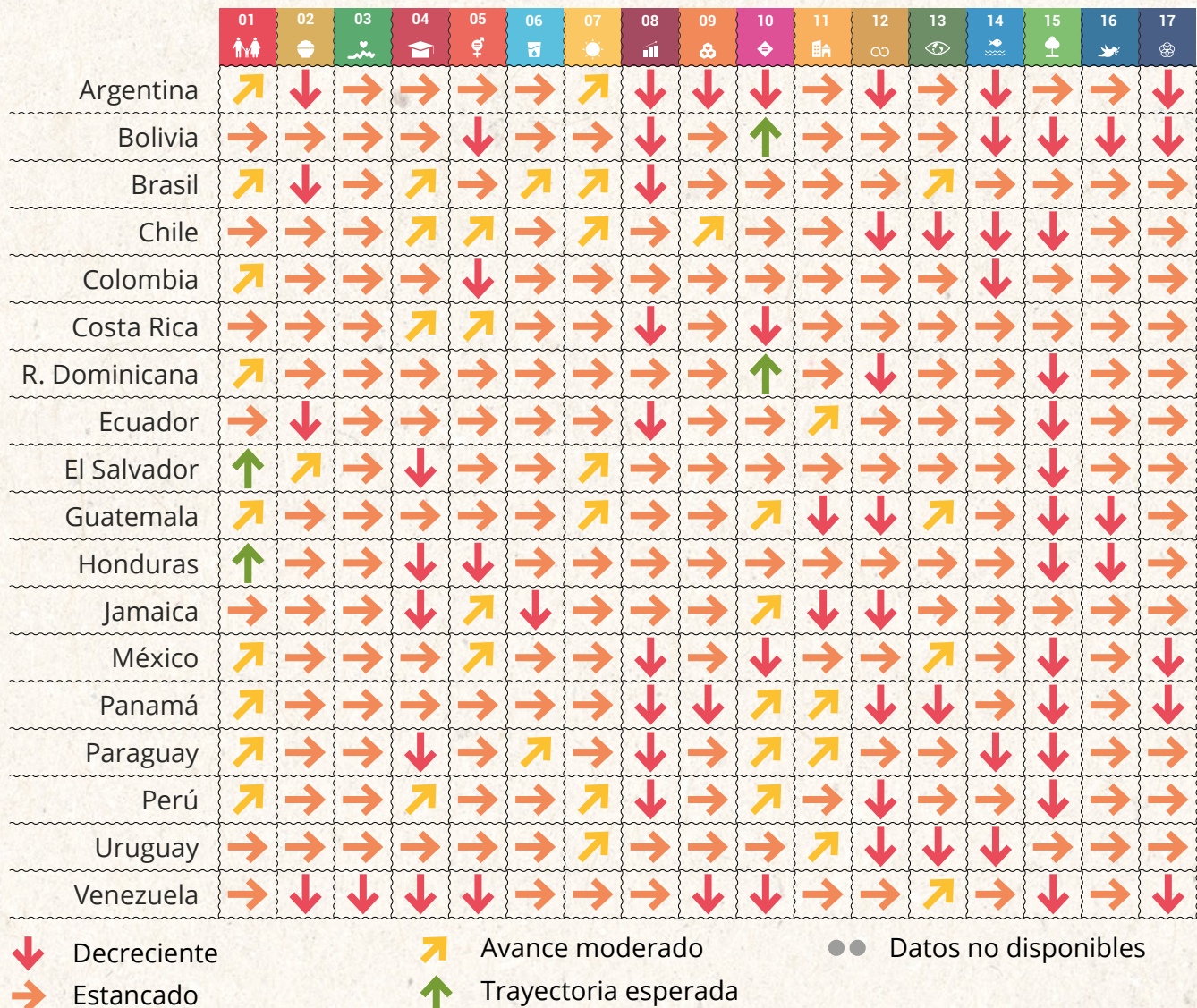
58,6%

Según el Índice ODS para América Latina y el Caribe, publicado por el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS) de la Universidad de los Andes (2023), la región tiene un cumplimiento promedio de la agenda del 58,6%. Este indicador refleja grandes desafíos para alcanzar los 17 ODS antes de 2030, especialmente el ODS 10 Reducción de

Desigualdades, el ODS 2 Hambre Cero y el ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura. Chile, Brasil y Costa Rica lideran en cumplimiento, con un promedio general superior al 65% a 2022. Chile destaca en el ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento, con 83% de cumplimiento, Brasil en el ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante, con 88%, y Costa Rica en el ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, con 89% (CODS, 2023).

9. El último informe del CODS se puede consultar aquí.

Figura 3. Tendencias de los ODS en América Latina y el Caribe





Colombia enfrenta un reto significativo, ubicándose en el noveno lugar entre 18 países, con un promedio de cumplimiento del

60%

La figura 3 refleja que la mayoría de los países de la región están experimentando un avance moderado o están estancados en el logro de la mayoría de los ODS. Esto indica que los países de América Latina y el Caribe no están avanzando al

ritmo esperado para cumplir con lo establecido en la Agenda 2030. Además, como se puede apreciar, cada país muestra al menos un objetivo que se está alejando o deteriorando en relación con la meta (CODS, 2023).

Comparativo de la situación en Colombia frente a países de la región con contextos similares

Colombia enfrenta un reto significativo, ubicándose en el noveno lugar entre 18 países, con un promedio de cumplimiento del 60%¹⁰. El ODS 12, según esta medición, registra el cumplimiento más alto (80%), mientras que el ODS 10 presenta el más bajo (25%). Al analizar datos históricos, se evalúa la velocidad del progreso regional hacia las metas y se determina si se logrará cumplir con la Agenda 2030 en el futuro (CODS, 2023).

A seis años de 2030, Colombia presenta una situación diversa en el cumplimiento de los ODS.

Por ejemplo, en el ODS 13 Acción Climática, Colombia se ubica en el puesto 13, mientras que el ODS 10 enfrenta un rezago considerable y un alto riesgo de incumplimiento, pues se ubica en el último puesto. De los 17 ODS, 11 han avanzado desde el inicio de la Agenda en 2015, aunque persisten desafíos importantes que podrían dificultar el logro de las metas para 2030. Por último, los ODS 8, 14, 15 y 16 muestran un avance por debajo de lo esperado, lo cual representa un riesgo medio de incumplimiento (CODS, 2023).

10. El CODS emplea la metodología establecida por el Informe de Desarrollo Sostenible de la ONU, la cual puede ser consultada aquí. Esta metodología facilita la comparación del progreso de los ODS en América Latina y el Caribe.

2. ODS, ¿cómo vamos?

2.1 Estado de avance en la implementación de los ODS

En el seguimiento de los ODS¹¹ en Colombia, resulta esencial comprender el panorama general de los avances desde el último Reporte Nacional Voluntario (2021). Hasta 2023, el avance global hacia la Agenda 2030 se sitúa en promedio en el 58%. Para un análisis más detallado, agrupamos los ODS en cuatro categorías, según su progreso hacia la meta 2030, siguiendo la metodología del DNP¹²:

(i) Aquellos que van por buen camino: 18%

(ii) Los que muestran un rezago moderado: 47%

(iii) Los que presentan un rezago significativo: 23%

(iv) Los que evidencian estancamiento o alejamiento con respecto a la meta: 6%

Paralelamente, se ilustra el comportamiento de los 150 indicadores analizados (excluidos aquellos que no reportan datos), los cuales están distribuidos en los 17 ODS, y fueron agrupados según la categorización mencionada¹³.



Hasta 2023,
el avance global hacia la
Agenda 2030 se sitúa en
promedio en el

58%

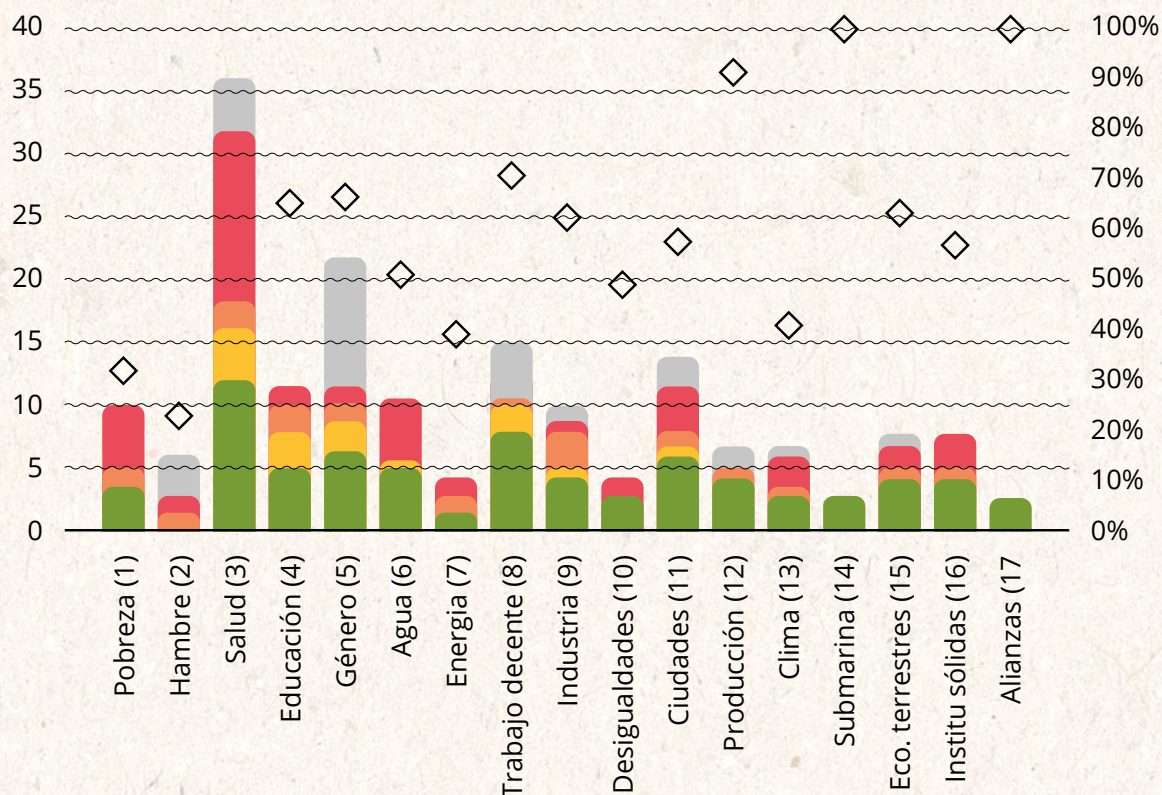
11. Ver Anexo 3. Avance en los indicadores del sistema de seguimiento nacional a los ODS.

12. La metodología usada para calcular el avance de los ODS con respecto a la meta 2030, es la definida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el seguimiento de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo (PND) titulada Guía para la construcción y análisis de indicadores, la cual se puede consultar aquí.

13. Se cuenta con una batería de 178 indicadores, de los cuales, 150 cuentan con información posterior a la línea base (LB), que en su mayoría (90%) tienen una LB de 2015. Los indicadores son reportados al DANE por 23 entidades públicas de orden nacional, y no todos los indicadores tienen información disponible hasta 2023. En realidad, aproximadamente, el 9% de los 150 indicadores analizados cuentan con datos para este año, mientras que para el periodo 2016-2022, el promedio de información disponible fue del 75%. Para conocer las series de tiempo y la disponibilidad de información de cada uno de los indicadores por ODS, consultar aquí.



Figura 4. Avances de los ODS Colombia con relación a la Agenda 2030 – Año 2023



Fuente: Elaboración DSEPP-DNP, 2024 (DANE, 2024).

ODS que van por buen camino

Los ODS 12, 14 y 17 sobresalen por su progreso significativo hacia las metas establecidas para 2030, superando el 75% de avance hasta la fecha. En particular, los avances en los ODS 14 Vida Submarina, y 17 Alianzas para lograr los Objetivos, son notables. Por ejemplo, en el ODS 14, el porcentaje de estaciones de monitoreo de aguas marinas supera la meta establecida del 30% para 2021 en 43%, gracias a los esfuerzos del Invemar y al incremento presupuestario (DANE,

2024; Invemar, 2024). Además, en 2022, Colombia aumentó su área de aguas marinas protegidas a más de 30 millones de hectáreas, 17 millones más de lo pactado para 2030, mostrando un compromiso con la conservación marina (Caicedo, 2022; DANE, 2024).

En el ODS 17, Colombia ha logrado avances significativos, como las exportaciones totales que en 2023 representan el 17,8% del PIB, superando ligeramente la meta (DANE, 2024).

“

En el ODS 17, Colombia ha logrado avances significativos, como las exportaciones totales que en 2023 representan el 17,8% del PIB.

El número de personas que usan Internet también ha mejorado, alcanzando el 72,8% para 2022 (DANE, 2024). Sin embargo, Colombia enfrenta desafíos, como su posición en el *ranking* de exportaciones (142 de 191 países) y la cobertura de Internet, solo el 60,5%, destacándose la necesidad de mejorar la productividad y la conectividad, especialmente en áreas rurales (Datosmacro.com, 2023; Trujillo, 2023).

En cuanto al ODS 12, Producción y Consumo Responsable, Colombia avanza hacia una matriz productiva que considera el bienestar ecológico y social. Se promueven prácticas sostenibles en el sector privado, como la reutilización de plásticos y técnicas regenerativas en la ganadería y la agricultura, para mitigar el cambio climático y la inseguridad alimentaria (Duque-Escobar, 2024). Las empresas demandan cada vez más prácticas sostenibles a sus proveedores, lo cual refleja una creciente importancia del consumidor en estas iniciativas (Moreno, 2021).

ODS en camino: Avanzando para no dejar a nadie atrás

En cuanto a los ODS 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15 y 16, Colombia enfrenta rezagos moderados en varios indicadores clave, lo que implica un avance entre el 50% y el 75% hacia la meta para 2030. La pandemia agravó aún más este rezago, especialmente en el ODS 4, centrado en la Educación de Calidad (De Zubiría, 2022)¹⁴. Según datos del DANE, la tasa de matriculación oficial con acceso a Internet cayó del 70% al 57% entre 2018 y 2021, y la cobertura en educación superior apenas aumentó del 49,4% al 53,9% entre 2015 y 2021, proyectando un alcance del 60% para 2030, 20 puntos porcentuales por debajo de la meta.

En el ámbito de la atención a la Primera Infancia, esencial para el desarrollo infantil, se observa una disminución en su uso, especialmente afectado por la pandemia. Aunque en 2020 se registró una reducción del 11% en la utilización de estos servicios, con solo 24 de cada 100 niños accediendo a ellos, entre 2010 y 2019, el promedio fue de 35 niños por cada 100, lo que representa un desafío significativo para alcanzar la meta de 2030, que es de 50 niños por cada 100 (DANE, 2024).

14. Los cuatro indicadores relacionados con las pruebas Saber 5° y 9° no se analizan en esta sección, a pesar de mostrar un comportamiento positivo con respecto a la meta 2030, ya que los datos más recientes disponibles son de 2017. Además, en 2022, la metodología de recolección experimentó varios ajustes, que incluyen: (i) cambios en el diseño muestral y la representatividad a escala departamental, zonal y sectorial, (ii) modificaciones en la estructura de la prueba, (iii) ajustes en el modelo y la calificación, (iv) cambios en la escala de puntuación, y (v) definición de una nueva línea base. Se espera que los resultados de la aplicación de la nueva metodología estén disponibles a partir del segundo semestre de 2024 (Icfes, 2024).

En relación con los indicadores de género del ODS 5, Colombia ha avanzado gradualmente¹⁵. Por ejemplo, la cantidad de mujeres en cargos directivos estatales alcanzó el 48,6% en 2023, acercándose a la meta del 50% para 2030 (DANE, 2024). La inclusión del enfoque de género en las contrataciones públicas y privadas ha contribuido a cerrar brechas (Bece-rra, 2023; Ley 2069 de 2020). Además, la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años ha disminuido, especialmente entre 2018 y 2020, pasando de 60 a 54 por cada 1.000. La meta es reducir esta tasa a 46 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años (DANE, 2024).

El ODS 6, centrado en Agua Lim- pia y Saneamiento, muestra un

rezago moderado, con indicadores clave alejándose de la meta para 2030. Según el indicador, el acceso a agua potable disminuyó del 93,5% al 90,3% entre 2020 y 2021, siendo las zonas rurales las más afectadas (DANE, 2024). La tasa de población con acceso a métodos de sanea- miento adecuados también disminuyó, del 93,4% al 88,6% en el mismo periodo (DANE, 2024).¹⁶ Por otro lado, los indicadores que muestran un comportamiento positivo están relacionados con el tratamiento seguro de aguas residuales urba- nas e industriales, los puntos de monitoreo que indican un Índice de Calidad del Agua (ICA) bueno o aceptable, y los indicadores relacionados con la formulación e implementación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca) (DANE, 2024).

En cuanto al ODS 8, centrado en el Crecimiento Económico y el Trabajo Decente, muestra rezagos moderados en varios indicadores. La participa- ción de la economía forestal en el PIB se mantuvo cerca del 0,7% entre 2016 y 2021, evidenciando la necesidad de una coordinación institucional

15. Aquellos indicadores que se podrían agrupar en (i) brecha de género y desigualdades sociales, (ii) violencia de género y (iii) salud sexual y reproductiva, que en total reúnen 12 indicadores de 22 disponibles en el sistema de seguimiento nacional a los ODS, no se consideraron en este segmento porque no tienen información posterior a 2015. Esto se debe a que algunos de estos indicadores tienen una periodicidad quinquenal, y las entidades que reportan dichos indicadores no han proporcionado información actualizada desde 2015 (DANE, 2024).

16. En cabeceras municipales, los métodos de saneamiento adecuados incluyen el alcantarillado. En zonas rura- les, se consideran adecuados los inodoros conectados a pozos sépticos y letrinas. Los métodos no adecuados son retretes y eliminación de excretas en la bajamar (DANE, 2016).





La participación de la economía forestal en el PIB se mantuvo cerca del 0,7% entre 2016 y 2021, evidenciando la necesidad de una coordinación institucional más sólida para aprovechar de manera sostenible los recursos forestales

más sólida para aprovechar de manera sostenible los recursos forestales (Conpes, 2021). Además, la pandemia impactó negativamente en el turismo, reduciendo el valor agregado turístico y afectando el empleo en este sector (DANE, 2024; Fontur, 2022). Según la Agencia Colombiana de Viajes y Turismo (Anato), el sector enfrenta grandes desafíos y aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia (Infobae, 2023).

El ODS 9, que aborda Industria, Innovación e Infraestructura,

muestra rezagos moderados en cinco indicadores clave. La inversión en I+D con respecto al PIB ha promediado solo el 0,3% entre 2016 y 2020, lo cual indica la necesidad de intensificar los esfuerzos en esta área (Acosta, 2022; DANE, 2024). Asimismo, según datos del DANE (2024), la tasa de solicitudes de patentes ha disminuido de 10,9 por cada millón de habitantes en 2016 a 8,2 en 2021, alejándose de la meta establecida que es 30 por cada millón de habitantes. Con relación al transporte público, la pandemia redujo el avance de los viajes diarios del 80% en 2019, con respecto a la meta de 6,9 millones de viajes, al 40% en 2020 (DANE, 2024).

Los indicadores de los ODS 11 y 15 muestran avances notables, superando el 57% con relación a la meta 2030. En el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, destacan los indicadores relacionados con la calidad del aire y la gestión de residuos sólidos urbanos. Además, las ciudades capitales están integrando criterios de cambio climático en sus planes de desarrollo, lo que impulsa aún más el progreso (Solano-P., 2023).

Por otro lado, en el ODS 15, centrado en los ecosistemas terrestres, se observan avances positivos en aproximadamente dos tercios de los indicadores. Colombia cuenta con el 52,1% de su territorio cubierto por

bosques naturales, lo que la posiciona como líder regional (Ideam, 2023). Sin embargo, la lucha contra la deforestación en el país enfrenta desafíos significativos, especialmente desde la firma del Acuerdo de Paz. Este incremento se debe al vacío de poder dejado por las FARC en zonas de gran biodiversidad. Este vacío ha promovido disputas territoriales entre diversos grupos armados, y a su vez ha propiciado la expansión de la frontera agrícola, la cual facilita no solo las actividades ilícitas, sino también la apropiación de tierras con fines de especulación y ganadería. Estas acciones son impulsadas por propietarios de tierras y colonos que buscan obtener ganancias significativas en terrenos baldíos (Álvarez, 2020; López León *et al.*, 2019; Prem *et al.*, 2020; Zapata, 2019)



Finalmente, el ODS 16, centrado en paz, justicia e instituciones sólidas, muestra avances en la indemnización a víctimas del conflicto armado y una menor violencia interpersonal desde la pandemia, según datos del DANE para 2022 (DANE, 2024; El Espectador, 2023; Infobae, 2022). Sin embargo, se observa un repunte en la tasa de hurtos

en las principales ciudades entre 2021 y 2022, pues aumentó 21,3% (González, 2023). En cuanto al fortalecimiento institucional, el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (Furag) ha sido una herramienta fundamental para promover la transparencia y fortalecer las administraciones públicas de las entidades territoriales, especialmente en los municipios más vulnerables afectados por el conflicto armado. Para 2021, la cantidad de sujetos incluidos en el Furag, que progresan en la implementación de la Ley 1712 de 2014, se encontraba en 83% de avance (DANE, 2024), 11,7 puntos porcentuales por dejado de la meta.

ODS que están estancados

Los ODS 1, 3, 7, 10 y 13 presentan un rezago significativo o estancamiento en relación con la línea base, lo que significa que su avance se sitúa entre el 25% y el 50%. El ODS 1, Fin de la Pobreza, ha mostrado un deterioro progresivo en los indicadores asociados a la pobreza monetaria, agravado por la pandemia del COVID-19 a partir de 2020. La pobreza monetaria extrema, que había disminuido un promedio del 5% entre 2015 y 2018, aumentó 70% en los años posteriores respecto a la línea base del 9,1% en 2015 y la meta 2030 del 4% (DANE, 2024). Aunque ha disminuido lentamente después de la pandemia, la incidencia aún es alta, situándose en 13,8% en 2022, es decir, 4,7 puntos porcentuales por encima de la línea base y 9,8 puntos porcentuales por encima de la meta para 2030. La pobreza monetaria, que había

disminuido 4% entre 2016 y 2018, aumentó 13% en promedio desde 2019 hasta 2022 (DANE, 2024). Según el DANE, este indicador alcanzó el 42,5% en 2020 y se redujo al 36,6% en 2022, una disminución de 5,9 puntos porcentuales, acercándose a la línea base de 36,1% de 2015, pero aún muy lejos de la meta del 18,7% para 2030. Además, el porcentaje de población viviendo por debajo del umbral internacional de pobreza extrema aumentó del 5,1% en 2018 al 9,4% en 2020, lo cual representa un crecimiento del 97,4% respecto a la línea base de 2015, que fue de 5,6% y la meta 2030 que es del 1,7%.

Estas mismas tendencias se reflejan en el ODS 10, relacionado con las desigualdades. El indicador que mide la tasa de crecimiento de los ingresos per cápita en el 40% de los hogares más pobres en Colombia, en 2020 experimentó una contracción superior al 100% con respecto a la meta de 2030 (3,5%), pues pasó de un cre-





cimiento de 2,61% en 2017 a un decrecimiento de 19,3% en 2020. Además, el coeficiente de Gini en Colombia aumentó de 0,51 en 2016 a 0,56 en 2022 (DANE, 2024).

Los indicadores de cobertura de energía eléctrica y el porcentaje de capacidad instalada correspondiente a fuentes renovables, incluidos en el ODS 7, muestran un rezago significativo en relación con la meta para 2030. En cuanto al primero, desde la línea base en 2015, que fue del 97%, ha habido escasos avances, e incluso se observa un ligero descenso de 0,2 puntos porcentuales para 2019 (DANE, 2024). En relación con el segundo indicador, capacidad instalada correspondiente a fuentes renovables, Colombia ha experimentado más bien una tendencia al estancamiento con respecto a la línea base, pues ha permanecido alrededor del 70% entre 2015 y 2020 (DANE, 2023).

Los indicadores relacionados con las muertes por eventos recurrentes, abordados en los ODS 1 y 13, Acción por el Clima, como inundaciones, avenidas torrenciales y remoción en masa (se excluyen los eventos atípicos) (DANE y DNP, 2018), muestran un alejamiento de la meta para 2030. El número de fallecimientos por estas causas aumentó de 89 en 2015 a 152 en 2022, mientras que la tasa de personas afectadas creció de 990 a 1.096 en el mismo periodo, lo que indica un incremento en la incidencia y gravedad de estos eventos recurrentes (DANE, 2024). Entre 2011 y 2019, Colombia destinó en promedio el 1,2% del Presupuesto General de la Nación (PGN) a la gestión del riesgo de desastres, del cual, el 92% se enfocó en la atención a desastres, dejando solo un pequeño porcentaje para la prevención (Ayala-García y Ospino-Ramo,

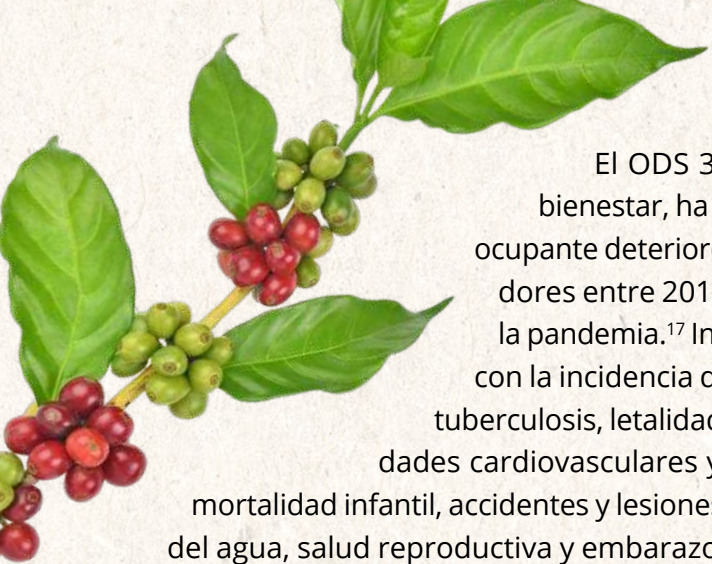
2023). Este desequilibrio en la asignación de recursos entre atención y prevención puede aumentar la vulnerabilidad y exposición del país ante el cambio climático. Por lo tanto, es crucial priorizar las inversiones en medidas preventivas para mitigar los impactos adversos de los desastres naturales y fortalecer la resiliencia de las comunidades colombianas.



Entre 2011 y 2019,
Colombia destinó en
promedio el

1,2%

del PGN) a la gestión del
riesgo de desastres.



El ODS 3, enfocado en salud y bienestar, ha experimentado un preocupante deterioro del 41% de sus indicadores entre 2015 y 2022, agravado por la pandemia.¹⁷ Indicadores relacionados con la incidencia de enfermedades como tuberculosis, letalidad por dengue, enfermedades cardiovasculares y diabetes, así como la mortalidad infantil, accidentes y lesiones, salud pública, calidad del agua, salud reproductiva y embarazo adolescente, se están alejando de la meta para 2030. A pesar de algunos avances en

áreas como atención prenatal, salud infantil, vacunación, malaria, consumo de sustancias, seguridad social y calidad del aire, es imperativo intensificar los esfuerzos para abordar los desafíos restantes y asegurar un acceso equitativo a servicios de salud de calidad para toda la población.

ODS que se están quedando atrás

El ODS que muestra un deterioro o alejamiento de la meta es el 2, Hambre Cero, pues su avance es inferior al 25%. Ciertamente, Colombia enfrenta desafíos importantes para alcanzar la meta establecida. Por ejemplo, la tasa de desnutrición en menores de 5 años por cada 100.000 habitantes ha mostrado una tendencia preocupante entre 2016 y 2020. En promedio, esta tasa ha sido de 8,5 niños por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años, lo que representa un aumento de 1,7 niños con respecto a la línea base definida en 2015, y 3,5 niños más que la meta para 2030 (DANE, 2024). Esta situación se refleja en el elevado porcentaje de hogares con prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave, que alcanza el 26,1% a escala nacional

para 2023. Además, según la Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES) 2023 del DANE, los hogares con niños menores de 5 años son los más afectados por esta condición de vulnerabilidad, con una tasa del 32,8% a escala nacional, lo que repercute en las siguientes etapas del ciclo de vida (DANE, 2023).

17. Los indicadores vinculados a la salud sexual y reproductiva, como el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años o de 15 a 49 años (unidas y no unidas) que han tenido actividad sexual reciente y utilizan métodos anticonceptivos modernos, no han sido considerados en este análisis debido a la falta de datos actualizados; el último reporte disponible es de 2015 (DANE, 2024).

2.2. Sinergias entre la garantía del Derecho Humano a la Alimentación y los ODS 1, 7, 13, 15, 16 y 17

El principal reto: Que en Colombia nadie se muera de hambre

Los desafíos evidenciados en el ODS 2 Hambre Cero, y la necesidad de no dejar a nadie atrás en la garantía del derecho humano a la alimentación, exigen una comprensión holística de su impacto en el cumplimiento de otros ODS. Existe una clara interconexión entre las metas de los ODS, de modo que el cumplimiento o atraso en una de ellas afecta de manera directa o indirecta el cumplimiento del resto. A lo largo de este reporte se destaca el impacto positivo que el cumplimiento de las metas del ODS 2 tiene en las demás metas de la Agenda 2030.

La elaboración de este reporte se fundamenta en la importancia de evidenciar todos los factores que afectan positiva y negativamente el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030, tomando como ejemplo el ODS 2 Hambre Cero y los retos particulares que presenta para Colombia. Se reconoce la relación intrínseca entre todas las metas de la Agenda 2030, y se entiende que el esfuerzo en el cumplimiento de una de ellas tendrá un efecto positivo en el cumplimiento de toda la

Agenda. Descuidar el avance en una sola meta trae consecuencias negativas para toda la Agenda.

Por tanto, es fundamental que las acciones y recomendaciones aplicadas por los Estados, para el fortalecimiento y avance de la Agenda 2030, consideren las lecciones aprendidas sobre las sinergias entre los ODS y cómo el esfuerzo en uno de ellos impacta directa o indirectamente en toda la agenda. Este reporte evidencia cómo los esfuerzos para eliminar el hambre en la población generan indirectamente mejores condiciones de paz y seguridad, reducen significativamente las condiciones de pobreza y mejoran la calidad de vida de las personas. Además, la seguridad alimentaria contribuye a la reducción de las afectaciones climáticas derivadas del mal uso de los recursos naturales para la obtención de alimentos por parte de la población.

Por esta razón, para comprender el ciclo virtuoso que impulsa la garantía del derecho humano



“

Existe una clara interconexión entre las metas de los ODS, de modo que el cumplimiento o atraso en una de ellas afecta de manera directa o indirecta el cumplimiento del resto.



En Colombia,
alrededor del

66 %

del territorio forma parte de Zonas No Interconectadas (ZNI), lo que presenta importantes desafíos en áreas remotas para aumentar de manera sostenible la producción agrícola.



a la alimentación y su contribución a otros ODS, así como la retroalimentación positiva entre ellos, es necesario considerar las interacciones, tanto positivas como negativas, entre los ODS. Según el Consejo Internacional de Ciencia (ICSU), el ODS 2 está interconectado con todos los demás ODS (Mollier *et al.*, 2017).¹⁸ En esta sección nos centraremos en su relación con los ODS 1, 7, 13, 15, 16 y 17.

En primer lugar, reducir la inseguridad alimentaria puede contribuir a la erradicación de la pobreza. Por ejemplo, si se enfocan esfuerzos en el crecimiento agrícola, se puede estimular tanto el empleo rural como el urbano, lo que permite combatir la pobreza y la inseguridad alimentaria, de manera directa e indirecta. Sin embargo, como señala el ICSU, el crecimiento agrícola no siempre conduce a una reducción positiva de la pobreza. En casos en los que la agricultura se centra en grandes explotaciones con un uso intensivo de capital, los efectos en la reducción de la pobreza pueden ser limitados. Además, políticas de liberalización de mercados o de control de precios que no consideran los efectos en las poblaciones más vulnerables pueden tener consecuencias adversas en sus ingresos, au-

mentando los índices de pobreza (Mollier *et al.*, 2017).

En cuanto al ODS 7, el acceso a la energía permite el uso de maquinaria, productos químicos agrícolas e irrigación, y promueve el desarrollo de infraestructura para el almacenamiento y la comercialización de productos. Sin embargo, en Colombia, alrededor del 66% del territorio forma parte de Zonas No Interconectadas (ZNI), lo que presenta importantes desafíos en áreas remotas para aumentar de manera sostenible la producción agrícola. En estas ZNI, la energía se produce principalmente a través de plantas de generación a diésel, que, aunque son de bajo costo por kW/h y tienen un mantenimiento sencillo, enfrentan problemas de transporte en zonas remotas, lo que genera costos adicionales y dificulta la producción agrícola (Caldas, 2020).

Además, estas plantas contribuyen a la contaminación ambiental y acústica, lo que destaca la necesidad de integrar la producción agrícola y el suministro de energía con políticas de cambio climático y precios de combustibles fósiles (Caldas, 2020). Para abordar estos desafíos, la producción de metano a nivel agropecua-

18. Para explorar la interconexión y los desafíos que enfrenta el ODS 2, con respecto al resto de los ODS, haga clic en el siguiente [enlace](#).



rio podría ser una solución que promueva tanto el crecimiento de la producción agrícola como el cumplimiento de las metas de energías renovables, a través de cultivos agroforestales o para biocombustibles (Mollier *et al.*, 2017).

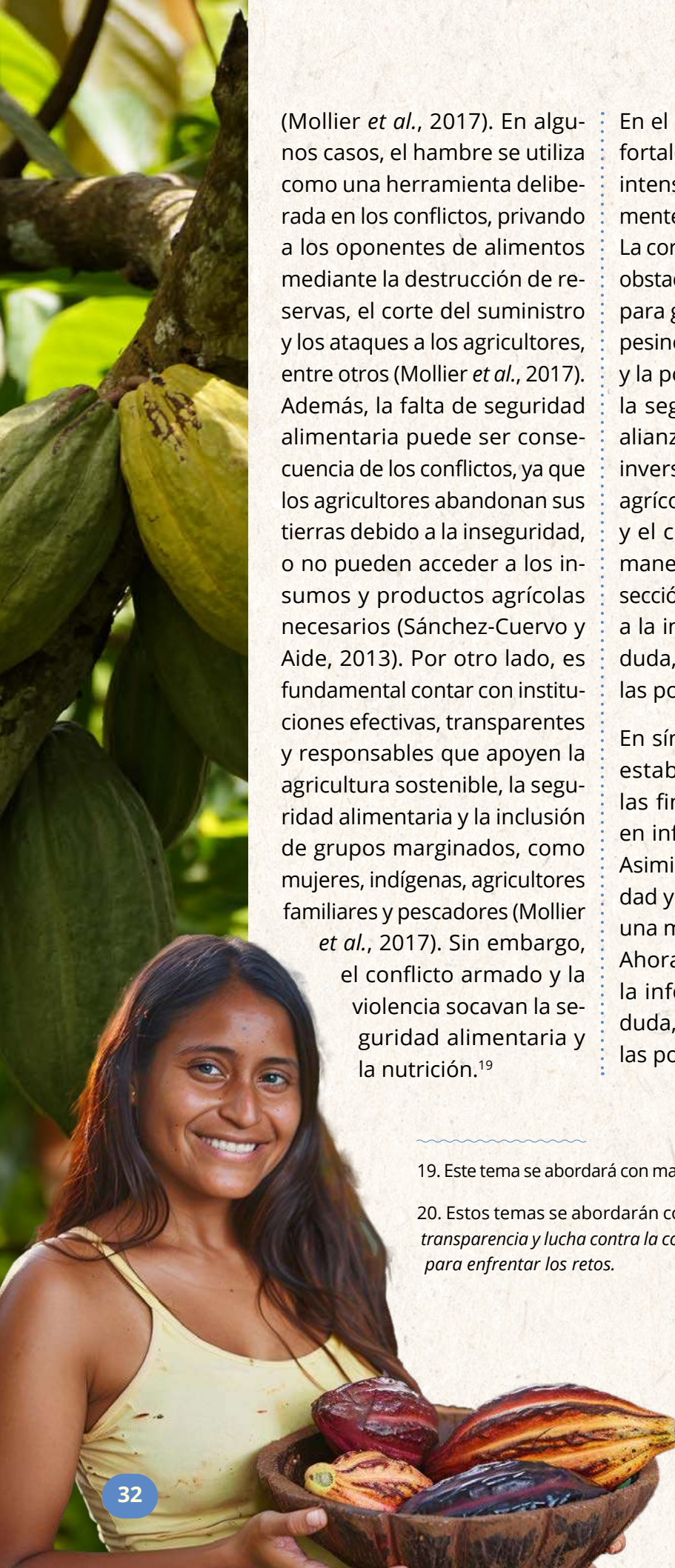
En relación con el cambio climático, la seguridad alimentaria en países como Colombia podría enfrentar desafíos aún mayores. El aumento de las temperaturas, los cambios en los patrones de precipitación y la intensificación de fenómenos climáticos extremos están impactando significativamente la producción agrícola, lo que dificulta el logro de las metas del ODS 2 (Mollier *et al.*, 2017). Por ello, es crucial diseñar instrumentos de política pública y destinar recursos económicos que permitan a las comunidades mitigar y adaptarse a estos cambios climáticos, con el fin de minimizar sus efectos adversos.

Además, resulta imperativo promover prácticas agrícolas sostenibles, especialmente en el contexto colombiano, donde el aumento de la deforestación después del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC ha sido

alarmante (Prem *et al.*, 2020). Factores como la disputa territorial, la debilidad de la capacidad estatal a escala local, el acaparamiento de tierras y la transformación del uso del suelo para actividades agropecuarias, como la ganadería, han contribuido a este problema (Acemoglu *et al.*, 2015; Chadid *et al.*, 2015; Conpes, 2021). Por lo tanto, es fundamental implementar políticas que controlen la expansión de la frontera agrícola en los bosques, fomentando prácticas de gestión forestal comunitaria y ofreciendo incentivos económicos para desalentar sistemas ganaderos no sostenibles que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero (Hayes y Persha, 2010).

Por otra parte, para lograr una integración armónica entre los ODS, es necesario contar con instituciones fuertes y promover la paz y la justicia. El hambre y la inseguridad alimentaria pueden generar inestabilidad política, conflictos y guerras



A woman with long dark hair, wearing a yellow tank top, is smiling and holding a large wooden bowl filled with cacao pods. The background shows a cacao tree with green leaves and pods hanging from the branches.

(Mollier *et al.*, 2017). En algunos casos, el hambre se utiliza como una herramienta deliberada en los conflictos, privando a los oponentes de alimentos mediante la destrucción de reservas, el corte del suministro y los ataques a los agricultores, entre otros (Mollier *et al.*, 2017). Además, la falta de seguridad alimentaria puede ser consecuencia de los conflictos, ya que los agricultores abandonan sus tierras debido a la inseguridad, o no pueden acceder a los insumos y productos agrícolas necesarios (Sánchez-Cuervo y Aide, 2013). Por otro lado, es fundamental contar con instituciones efectivas, transparentes y responsables que apoyen la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la inclusión de grupos marginados, como mujeres, indígenas, agricultores familiares y pescadores (Mollier *et al.*, 2017). Sin embargo, el conflicto armado y la violencia socavan la seguridad alimentaria y la nutrición.¹⁹

En el caso de Colombia, a pesar de que se han fortalecido las instituciones y se ha reducido la intensidad del conflicto, las regiones históricamente afectadas aún enfrentan vulnerabilidades. La corrupción y la falta de transparencia también obstaculizan el acceso a recursos y oportunidades para grupos marginados, como mujeres y campesinos, perpetuando la inseguridad alimentaria y la pobreza (Acemoglu *et al.*, 2015). De ahí que la seguridad alimentaria requiera establecer alianzas que fortalezcan las finanzas, como la inversión en infraestructura para el desarrollo agrícola. Además, la tecnología, la capacitación y el comercio pueden ayudar a enfrentar de manera más resiliente el cambio climático (ver sección 3.1). La coherencia institucional, el acceso a la información y la rendición de cuentas, sin duda, fortalecerán la seguridad alimentaria de las poblaciones (Mollier *et al.*, 2017).²⁰

En síntesis, la seguridad alimentaria requiere establecer alianzas que permitan fortalecer las finanzas, como por ejemplo, la inversión en infraestructura para el desarrollo agrícola. Asimismo, la tecnología, la creación de capacidad y el comercio pueden ayudar a afrontar de una manera más resiliente el cambio climático. Ahora, la coherencia institucional, el acceso a la información y la rendición de cuentas, sin duda, fortalecerán la seguridad alimentaria de las poblaciones.

19. Este tema se abordará con mayor profundidad en la sección 3.5 Grupos vulnerables.

20. Estos temas se abordarán con mayor profundidad en las secciones 4.5 Retos en transparencia y lucha contra la corrupción y 4.7 Capacidad de las entidades territoriales para enfrentar los retos.

3. Diagnóstico sobre el hambre en Colombia



Introducción

Colombia enfrenta una realidad compleja y multifacética en su lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria. Este capítulo explora las diversas dimensiones de esta problemática, mediante el análisis de cómo los factores territoriales, étnicos, demográficos y coyunturales influyen en la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales y regiones del país.

En primer lugar, se examina la situación actual de inseguridad alimentaria en Colombia. Posteriormente, se revisa la dimensión territorial, destacando la marcada heterogeneidad de los desafíos asociados al hambre a lo largo del territorio colombiano. Las disparidades en las condiciones socioeconómicas de los hogares y la variabilidad en la capacidad de producción de alimentos resultan en que ciertas áreas enfrentan retos significativamente mayores que otras. Factores como la infraestructura, el acceso a mercados, el clima y la tenencia de la tierra influyen en la eficacia de los sistemas agroalimentarios locales, lo cual resalta la necesidad de adoptar enfoques multisectoriales y participativos que involucren a los gobiernos locales, comunidades, sector privado y organizaciones no gubernamentales.

A continuación, se aborda el impacto del hambre en el ciclo de vida, con un enfoque especial en las consecuencias de la malnutrición en la niñez sobre las otras etapas. La interacción temprana entre nutrición y desarrollo es fundamental para trazar trayectorias de vida saludables, y la privación nutricional en etapas críticas puede influir

en la salud, el aprendizaje y las oportunidades socioeconómicas futuras. Asimismo, se enfatiza la importancia de adoptar un enfoque integral que aborde las necesidades nutricionales y de desarrollo en todas las etapas de la vida.

También se explora la dimensión étnica, por medio del análisis de la situación de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Se destaca el caso de La Guajira, donde los índices de pobreza, desnutrición y mortalidad infantil exceden significativamente el promedio nacional, lo cual ilustra los desafíos que enfrentan estas comunidades. Asimismo, se examinan las disparidades históricas que ha enfrentado la población afrodescendiente, incluidas la discriminación racial, la pobreza económica y las limitaciones en el capital humano y social, que contribuyen a una mayor prevalencia de condiciones laborales precarias y niveles de pobreza más elevados.

Además, se abordan los desafíos específicos que enfrentan grupos vulnerables, como las víctimas del conflicto armado y los migrantes. Los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional de Verificación reflejan las condiciones de hambre y pobreza que sufren las víctimas de desplazamiento forzado, y resaltan la necesidad de intervenciones focalizadas. De igual manera, se analiza la crítica situación de seguridad alimentaria entre migrantes y comunidades de acogida, subrayando la necesidad de estrategias que promuevan su integración socioeconómica.



Por último, se examina el impacto de la cuarentena ocasionada por la pandemia de COVID-19 en la problemática del hambre, utilizando estadísticas de pobreza, como proxy, ante la falta de series temporales específicas sobre seguridad alimentaria. Los datos evidencian un fuerte repunte tanto en la pobreza total como en la extrema durante la cuarentena, ya que se revirtieron los progresos socioeconómicos de Colombia a los niveles de una década atrás. Esta regresión implica un incremento en la inseguridad alimentaria y el hambre, lo cual impacta desproporcio-

nadamente a los estratos más vulnerables de la sociedad.

En resumen, este capítulo ofrece una mirada integral a las diversas dimensiones del hambre en Colombia, resaltando la complejidad y la interrelación de factores territoriales, étnicos, demográficos y coyunturales. Su análisis es fundamental para diseñar políticas públicas y estrategias de intervención efectivas que aborden las raíces estructurales de la inseguridad alimentaria y promuevan el desarrollo sostenible e inclusivo en todo el territorio nacional.

3.1 La situación actual de la inseguridad alimentaria en Colombia

En 2022, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) incorporó por primera vez la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), marcando un hito en la recopilación de datos sobre seguridad alimentaria en Colombia. El objetivo de esta inclusión fue proporcionar la información necesaria para el seguimiento de la “Prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la población”, correspondiente al ODS 2, Hambre Cero (DANE, 2023). La ECV, al abordar múltiples dimensiones del bienestar y contar con una muestra robusta de hogares,

ofrece amplias posibilidades de desagregación de datos, lo que enriquece el análisis y la comprensión de la inseguridad alimentaria en el país, facilitando así la formulación de políticas públicas más efectivas y dirigidas. Para el momento en que se culminó este informe, el DANE publicó los datos para 2023, en el que se evidencia una caída en la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave de 28,1% a 26,1%.

Estas estimaciones del DANE evalúan el acceso a los alimentos considerando tanto la cantidad como la calidad, mediante

ocho preguntas que permiten cuantificar la severidad de la inseguridad alimentaria. Los resultados para 2023 indican que el 26% de los hogares colombianos sufrieron de inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que implica que dichos hogares tuvieron que reducir la calidad y cantidad de su alimentación debido a restricciones económicas. De manera más alarmante, el 4,8% de los hogares reportaron inseguridad alimentaria grave en 2023, lo cual refleja situaciones extremas en las que al menos un miembro del hogar pasó un día entero sin comer en el último año (el valor en 2023 era de 4,9%).

El estudio de 2022 también revela disparidades significativas entre las áreas rurales y las urbanas, mostrando índices más elevados de inseguridad alimentaria en las primeras. Los departamentos más afectados (Figura 5), incluidos La Guajira (50%), Sucre (45%), Vichada (40%), Magdalena (39%), Guaviare (37%) y Atlántico (36%), registraron que más del 40% de sus hogares experimentaron niveles moderados o graves de inseguridad alimentaria.

Además, el informe analiza variables demográficas y socioeconómicas como el tamaño y composición del hogar, las

condiciones habitacionales y el acceso a programas de ayuda gubernamentales. Los hallazgos sugieren que los hogares con una sola cabeza de familia (22%), aquellos de mayor tamaño (36% para aquellos con más de 5 personas), con niños o personas con discapacidad (37%), y los que enfrentan un déficit habitacional (39%) presentan una mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.

Asimismo, se examina la prevalencia de inseguridad alimentaria en función de características específicas del jefe del hogar (jefatura femenina 29%), tales como género, edad, nivel educativo (43% para quienes no tienen ningún nivel), afiliación a servicios de salud (41% para quienes no tienen aseguramiento), identidad étnica (39% indígena y 38% afrodescendiente), situación migratoria (42% para migrantes venezolanos) y percepción personal de pobreza (42% para quienes se autorreportan como pobres). Los datos muestran que los hogares liderados por mujeres y aquellos cuyos jefes poseen una educación limitada o se autoidentifican como pobres, enfrentan una mayor incidencia de inseguridad alimentaria.

Los departamentos más afectados por la de inseguridad alimentaria

La Guajira

50%

Sucre

45%

Vichada

40%

Magdalena

39%

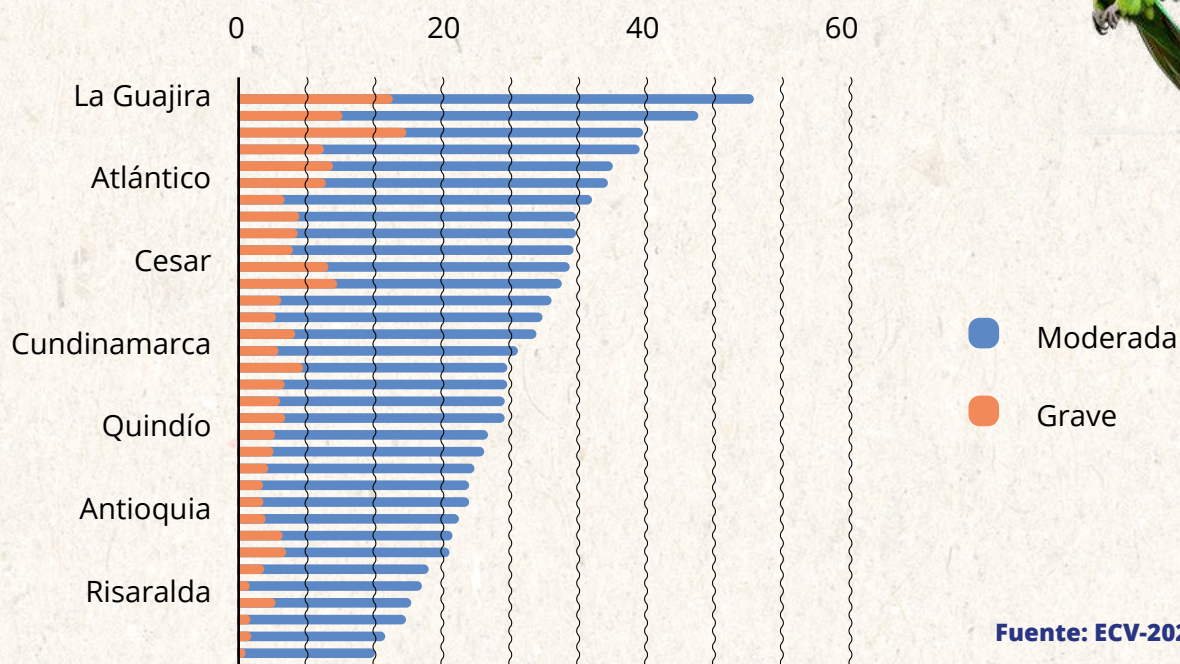
Guaviare

37%

Atlántico

36%

Figura 5. Prevalencia de la inseguridad alimentaria



Fuente: ECV-2023. DANE.

Este análisis, realizado por el DANE, aporta evidencia clave que revela la considerable distancia a la que Colombia se encuentra de alcanzar el ODS 2 Hambre Cero. Además, destaca que existen regiones y sectores poblacionales cuyas circunstancias son significativamente más desfavorables que el promedio nacional. Por ende,

estos hallazgos son de gran importancia para el desarrollo y la puesta en marcha de políticas públicas en Colombia, resaltando la necesidad imperante de abordar las desigualdades y vulnerabilidades particulares, con el fin de luchar de manera efectiva contra la inseguridad alimentaria en el territorio.

3.2 Dimensión territorial ²¹

Los desafíos asociados al hambre y la inseguridad alimentaria presentan una marcada heterogeneidad a lo largo del territorio colombiano. Las disparidades en las condiciones socioeconómicas de los hogares, junto a la variabilidad en la capacidad de producción de alimentos, hacen que ciertas áreas enfrenten desafíos significativamente mayores que otras. Estas diferencias se extienden también a los sistemas agroalimentarios de las regiones y departamentos del país, lo cual refleja la complejidad y diversidad del contexto colombiano.

Para profundizar, es importante considerar de qué manera factores como la infraestructura, el acceso a mercados, el clima y la tenencia de tierra influyen en la eficacia de los sistemas agroalimentarios locales. Por ejemplo, en regiones como la Amazonía y la Orinoquía, la extensiva presencia de áreas naturales protegidas y la baja

21. Esta sección se elaboró en colaboración con el Centro ISA de la Universidad de los Andes (2024).

densidad poblacional contrastan con los desafíos específicos para la producción y distribución de alimentos. En cambio, áreas más urbanizadas y con mejor infraestructura pueden tener mejor acceso a los mercados, pero enfrentan otros retos, como la dependencia de cadenas de suministro largas y vulnerables.

La situación se complica aún más por el impacto del cambio climático, que afecta desproporcionadamente a las regiones con menor capacidad de adaptación. Las variaciones en la disponibilidad de agua, los patrones de precipitación alterados y la incidencia de fenómenos climáticos extremos exacerbaban las dificultades existentes y plantean nuevos desafíos para la seguridad alimentaria.

Además, las dinámicas socioculturales y las políticas públicas desempeñan un rol crucial. Las políticas enfocadas en el fortalecimiento de la agricultura familiar, el apoyo a la producción agroecológica y la implementación de sistemas de garantía del derecho a la alimentación pueden contribuir significativamente a mitigar la inseguridad alimentaria. La promoción de prácticas agrícolas sostenibles, el fomento de cadenas de valor locales y la creación de mercados regionales son estrategias clave para aumentar

la resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a los desafíos multifacéticos que enfrenta Colombia.

En este contexto, es esencial adoptar un enfoque multisectorial y participativo que involucre a los gobiernos locales, comunidades, sector privado y organizaciones no gubernamentales. La cooperación y coordinación entre estos actores permitirá desarrollar estrategias integradas que aborden las raíces de la inseguridad alimentaria y el hambre, considerando las especificidades de cada región y potenciando las capacidades locales para generar soluciones sostenibles y a largo plazo.

En el ámbito internacional, se reconocen los sistemas agroalimentarios como una vía crucial para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional (FAO, IFAD, Unicef, WPA, WHO, 2021). El Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios (Centro ISA) de la Universidad de los Andes conceptualiza estos sistemas como el entramado de actores, interacciones, actividades, infraestructuras y el contexto medioambiental implicados en la producción, procesamiento, distribución, comercialización, consumo y gestión posterior al consumo de alimentos. Estos alimentos provienen de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca



En el ámbito internacional, se reconocen los sistemas agroalimentarios como una vía crucial para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional

e industria alimentaria, y se desenvuelven en un marco compuesto por entornos naturales, económicos, sociales, culturales e intersectoriales. Operando en múltiples niveles -local, municipal, supramunicipal, departamental, nacional y global-, los sistemas agroalimentarios son inherentemente diversos y deben adaptarse a las especificidades de cada territorio (ISA, 2024).

El análisis del Centro ISA (2024) proporciona una visión detallada del enfoque holístico necesario para abordar los sistemas agroalimentarios, y subraya la importancia de comprender los diversos factores que los afectan, así como las diferencias territoriales (Figura 6).



Factores biofísicos y ambientales

- *Recursos naturales:* La disponibilidad de tierra, agua, nutrientes, luz solar, energía y biodiversidad es crucial para la funcionalidad de los sistemas agroalimentarios. En Colombia, el 37,8% del territorio (43,1 millones de hectáreas) se clasifica como frontera agrícola, mientras que el 39,3% corresponde a bosques naturales, destacando la riqueza natural y los desafíos para su uso sostenible.
- *Frontera agrícola:* La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), destinada a separar áreas de actividades agropecuarias de zonas protegidas o con restricciones, la define como un factor ambiental crítico, especialmente en regiones como la Amazonía y la Orinoquía, donde el porcentaje de tierra disponible para la agricultura es significativamente bajo (p. ej., Vaupés 1,2%, Amazonas 1,3%).



Factores tecnológicos, innovación e infraestructura

- *Adopción de innovaciones:* La implementación de innovaciones en la agricultura es limitada a escala nacional, con solo el 5,2% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) aplicando prácticas innovadoras. Esto sugiere una necesidad de fomentar la innovación



Factores políticos e institucionales

- tecnológica en regiones con bajo porcentaje de implementación, como Vaupés y Sucre, para mejorar la productividad y la sostenibilidad.
- *Infraestructura de mercado y tecnológica:* La variabilidad en la infraestructura de mercado y tecnología entre regiones afecta significativamente la eficiencia de los sistemas agroalimentarios. Regiones con mejor acceso a mercados y tecnología pueden tener ventajas en la transformación y comercialización de productos agrícolas.
 - *Políticas públicas:* La implementación de políticas enfocadas a la seguridad alimentaria, como el Plan Nacional Rural para la Garantía Progresiva al Derecho Humano a la Alimentación, es fundamental. **Estas políticas necesitan ser adaptadas a las realidades locales de cada región para ser efectivas.**
 - *Gobernanza local:* La eficacia de los sistemas agroalimentarios también depende de la gobernanza local y departamental. La colaboración entre entidades gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado puede potenciar la seguridad alimentaria en diversas regiones.



Factores socioculturales

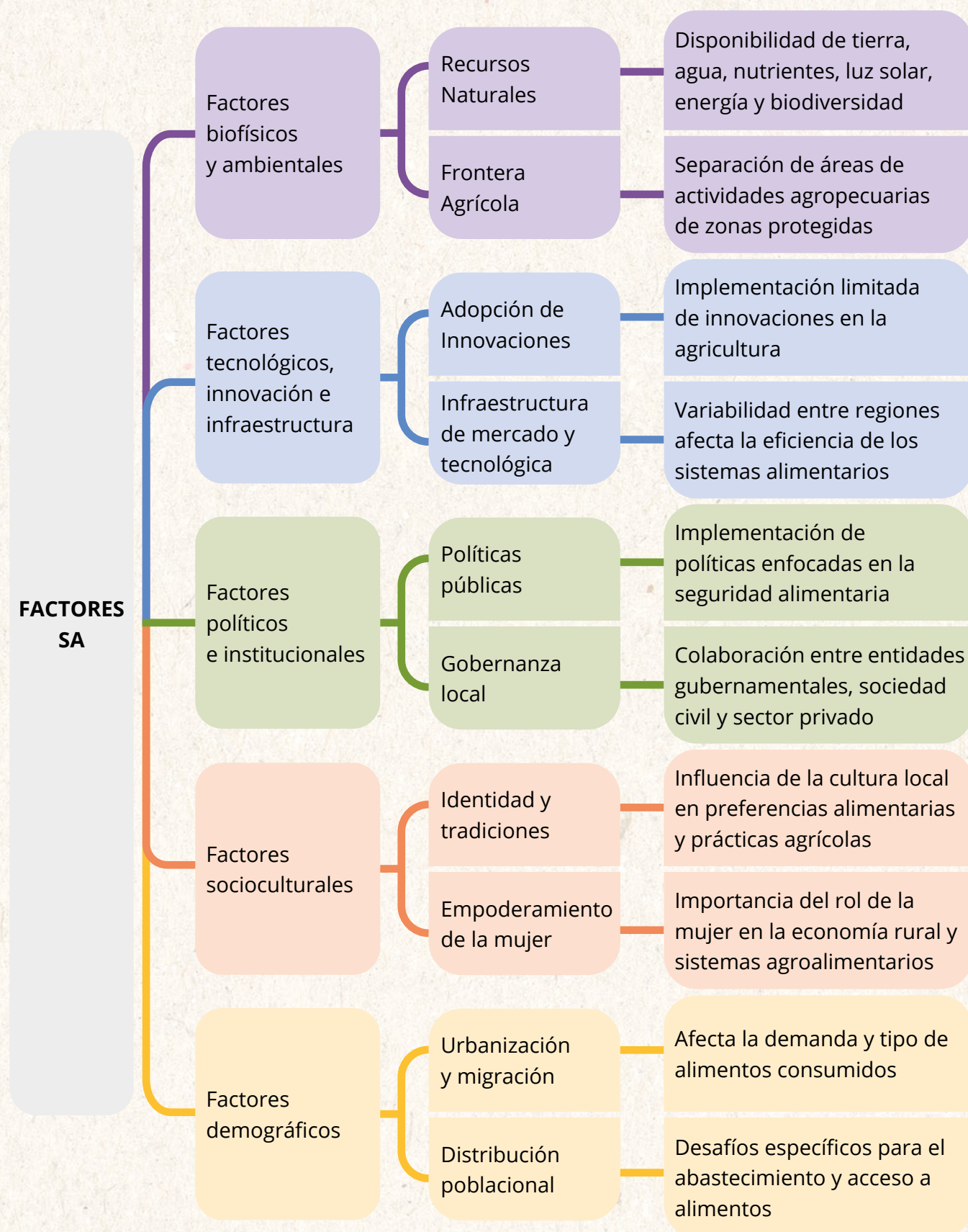
- *Identidad y tradiciones:* Las preferencias alimentarias y prácticas agrícolas, profundamente influenciadas por la cultura local, juegan un papel crucial. En Colombia, la diversidad cultural entre regiones, como la Andina, la Amazónica y la costa Caribe, conduce a sistemas agroalimentarios variados que reflejan esta riqueza cultural.
- *Empoderamiento de la mujer:* Con el 44,2% de los hogares liderados por mujeres, su empoderamiento en la economía rural y en los sistemas agroalimentarios es vital. Las estrategias deben reconocer y abordar las necesidades y capacidades específicas de las mujeres en cada región.



Factores demográficos

- *Urbanización y migración:* La urbanización afecta la demanda y el tipo de alimentos consumidos, con una tendencia hacia alimentos más procesados en áreas urbanas. Colombia, con una tasa de urbanización significativa (76,1% en cabeceras municipales), enfrenta el desafío de garantizar sistemas agroalimentarios sostenibles que atiendan tanto a poblaciones urbanas como rurales.
- *Distribución poblacional:* La distribución desigual de la población, con altas concentraciones en algunas áreas y escasez en otras, como en la Amazonía, implica desafíos específicos para el abastecimiento y acceso a alimentos en cada región.

Figura 6. Factores clave en la sostenibilidad de sistemas agroalimentarios



Fuente: Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios ISA de la Universidad de los Andes

Cada uno de estos factores incide de manera diferente en las regiones de Colombia, y su interacción define la complejidad de los sistemas agroalimentarios nacionales. **Entender estas**

dinámicas es esencial para diseñar e implementar políticas y prácticas que fomenten sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes.

3.3 El ciclo de vida y las consecuencias del hambre en la niñez sobre las otras etapas

La interacción temprana entre nutrición y desarrollo es fundamental para trazar trayectorias de vida saludables. La malnutrición en la infancia no solo tiene efectos inmediatos en el bienestar físico y cognitivo de los niños, sino que también predispone a desafíos y limitaciones a lo largo de su vida. Esta sección analiza cómo la privación nutricional en etapas críticas puede influir en la salud, el aprendizaje y las oportunidades socioeconómicas futuras.

La malnutrición prenatal implica riesgos inmediatos para la salud neonatal y predispone a enfermedades crónicas en la adultez. Además, afecta el desarrollo cognitivo y emocional, con repercusiones en el rendimiento educativo y la capacidad de ingreso en la edad adulta. La insuficiencia alimentaria durante la infancia compromete el desarrollo cerebral y físico, afectando el aprendizaje y el desarrollo educativo. La malnutrición también repercute en el bienestar emocional, impactando el desarrollo social y emocional de los niños.

En la adolescencia, la malnutrición infantil limita el crecimiento físico y el desarrollo cerebral, afectando el rendimiento académico. La insuficiencia nutricional en la infancia está asociada con un coeficiente intelectual más bajo y un rendimiento académico deteriorado. Intervenciones nutricionales y educativas desde las primeras etapas son cruciales para garantizar un desarrollo óptimo durante la adolescencia.

En la adultez, la malnutrición infantil impacta la salud física, lo cual aumenta la susceptibilidad a enfermedades crónicas y afecta tanto la capacidad laboral como la productividad económica. La malnutrición limita el desarrollo cognitivo y físico, por lo que puede reducir los ingresos y la productividad, perpetuando así los ciclos de pobreza. La implementación de estilos de vida saludables y programas educativos en los lugares de trabajo puede mejorar la productividad laboral y la eficiencia económica.

Durante la vejez, la nutrición temprana influye en la prevalencia de enfermedades degenerativas y la calidad de vida. Una nutrición adecuada en la infancia es clave para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la salud y el bienestar en la tercera edad. Programas que promuevan actividades lúdicas, deportivas y cognitivas, así como políticas que faciliten el acceso a una nutrición adecuada y servicios de salud, son fundamentales para garantizar una vejez activa y saludable.

En conclusión, es imperativo adoptar un enfoque integral que aborde las necesidades nutricionales y de desarrollo en todas las etapas de la vida. Las políticas deben enfocarse en asegurar una nutrición adecuada desde los primeros años, promover la educación y estilos de vida saludables durante la adolescencia y la adultez, y garantizar una vejez digna y activa.

3.4 Dimensión étnica: indígenas, afrodescendientes



Población indígena

Aunque no se disponga de investigaciones que abarquen la totalidad de la diversidad indígena nacional, La Guajira se erige como un punto focal de las adversidades que aquejan a estas comunidades²². En esta región, los índices de pobreza, desnutrición y mortalidad infantil exceden significativamente el promedio nacional, lo cual ilustra de manera cruda los desafíos que enfrentan estos grupos poblacionales. La problemática de mortalidad y desnutrición infantil en La Guajira, Colombia, se manifiesta con particular severidad en la comunidad indígena Wayuu, por lo que requiere un enfoque multidimensional y multisectorial para su atención efectiva (Bonet *et al.*, 2017). Este desafío se enraíza tanto en causas estructurales como coyunturales, y abarca desde la gestión inadecuada de recursos y adversidades geográficas hasta el limitado desarrollo económico y social, agravado por un acceso deficiente a servicios esenciales como agua potable y saneamiento básico.

La singularidad geográfica de La Guajira impone restricciones severas sobre la producción agrícola y, por ende, la seguridad alimentaria. A esto se suman la dispersión de su población rural y la insuficiente infraestructura sanitaria, que complejizan aún más el panorama. Factores coyunturales, como el fenómeno de El Niño y la crisis económica venezolana, inciden directamente en la región debido a su interdependencia comercial y social con Venezuela, exacerbando los retos existentes.

Destacando la gravedad de esta situación, Daniels (2017) compara las tasas de mortalidad infantil de La Guajira con las de naciones en conflictos prolongados como Ruanda, señalando la marcada inacción estatal ante esta crisis humanitaria. Por otro lado, Contreras *et al.* (2020) vinculan la sequía de 2012-2016 con un aumento en la mortalidad infantil, evidenciando cómo la precariedad socioeconómica, la falta de seguros de salud y el limitado acceso a servicios básicos se correlacionan con peores desenlaces en la salud infantil.

Estas investigaciones ilustran las implicaciones directas de la corrupción, el cambio climático y la falta de infraestructura adecuada en la salud y bienestar infantil en La Guajira. Subrayan la necesidad imperante de políticas de salud preventivas y un abordaje integral que contemple las diversas aristas de esta problemática para mitigar eficazmente la desnutrición y la mortalidad infantil en la región.

Bonet *et al.* (2017) sugieren varias estrategias para mejorar la situación, que incluyen la construcción de pozos comunitarios para garantizar el acceso a agua potable, la expansión de la infraestructura para fomentar los mercados locales, la revitalización de las tradiciones alimentarias wayuu, la promoción de modelos de negocio innovadores, el fortalecimiento de la educación rural y la implementación de prácticas óptimas de salud pública. Es fundamental que los esque-

22. La comunidad Wayuu es una de las más grandes y prominentes poblaciones indígenas de Colombia. Se caracteriza por su rica cultura, tradiciones y una profunda conexión con su tierra y entorno natural, pero también por sus problemas de acceso al agua e inseguridad alimentaria.

mas de contratación y ejecución de proyectos estén diseñados para minimizar la corrupción y maximizar la efectividad de las intervenciones.

La adopción de estas medidas demanda una sólida institucionalidad local y una coordinación efectiva entre los actores gubernamentales, el sector privado y las comunidades indígenas, que hasta el momento ha sido insuficiente. La discusión y planificación de soluciones deben ser a largo plazo y tener en cuenta la cultura y geografía específicas de cada comunidad, para garantizar intervenciones que no solo sean efectivas, sino también sostenibles y respetuosas con las tradiciones locales.

En el marco de este estudio se realizó un taller en La Guajira²³, con el fin de identificar los problemas desde las comunidades y organizaciones que trabajan en la zona. Para comenzar, se concluyó que Colombia enfrenta un grave desafío en cuanto al hambre y la desnutrición infantil, especialmente en regiones apartadas y comunidades vulnerables. A pesar de los esfuerzos institucionales, persisten importantes brechas y desafíos que requieren un abordaje integral, participativo y culturalmente pertinente.

En zonas costeras, rurales y de difícil acceso, la intervención estatal y de organizaciones suele ser insuficiente o nula, generando vacíos críticos. **Estas “zonas grises” carecen del acceso adecuado a alimentos nutritivos, programas de asistencia y desarrollo productivo, lo cual profundiza los ciclos de pobreza y desnutrición.**

Uno de los mayores obstáculos es la desconexión entre las políticas y programas implementados y las realidades y necesidades de las comunidades locales. Con frecuencia, la oferta institucional no se adapta a las costumbres, patrones alimentarios y contextos culturales específicos, lo que genera rechazo y desperdicio de los recursos destinados. Es crucial involucrar activamente a los miembros de las comunidades desde las primeras etapas del diseño de las intervenciones, para garantizar su pertinencia y aceptación.

Además de la disponibilidad de alimentos, un reto clave es la educación nutricional y la transformación de hábitos alimentarios, especialmente en grupos étnicos como los wayuu en La Guajira. Fomentar opciones nutritivas acordes a las tradiciones culinarias locales es fundamental para lograr **cambios sostenibles**.

La compleja situación se ve agravada por deficiencias logísticas, como la falta de refrigeración, transporte y almacenamiento adecuado, que dificultan el acceso a una alimentación saludable. Sumado a ello, la corrupción y la opacidad en el manejo de recursos destinados a estos programas impiden su efectiva focalización.

Es urgente transitar del enfoque asistencialista hacia iniciativas que empoderen a las comunidades y promuevan su autosuficiencia y soberanía alimentaria. Las políticas públicas deben volverse más dinámicas, ajustándose a los cambios en los patrones de consumo, efectos del cambio climático y realidades regionales específicas.

23. Ver anexo 2. Construcción participativa del Reporte Nacional Voluntario 2024.

Para abordar efectivamente esta crisis humanitaria, se requiere una mayor articulación y coordinación entre los actores gubernamentales, ONG, sector privado y comunidades locales. Únicamente, mediante enfoques participativos que aprovechen los conocimientos ancestrales, se podrán desarrollar soluciones sostenibles y contextualmente apropiadas.

La Guajira es un departamento priorizado por el Gobierno nacional, donde se hizo el lanzamiento del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación

de Políticas Públicas (Mesepp) para impulsar las acciones relacionadas con el acceso a agua, movilidad, vivienda, entre otros. Es un momento propicio para aunar esfuerzos, generar compromiso real y transparencia, y brindar oportunidades de transformación que permitan derrotar definitivamente las alarmantes tasas de desnutrición infantil que azotan a las comunidades más vulnerables de Colombia. Atacar el problema de manera multidimensional, articular los actores partiendo de las comunidades, es la única forma de poder avanzar y mejorar la crítica situación que se enfrenta en las regiones más desamparadas.

En síntesis, se requieren políticas que promuevan la transparencia, participación comunitaria, enfoque territorial diferenciado, coordinación intersectorial, autosuficiencia alimentaria y adaptación a contextos locales para superar de raíz las causas estructurales del hambre en Colombia.

Población afrodescendiente

La población afrodescendiente (AD) en Colombia ha enfrentado históricamente retos significativos, tales como **discriminación racial, pobreza económica, limitaciones en el capital humano y social, y segregación residencial**. Estos desafíos han contribuido

a una mayor prevalencia de condiciones laborales precarias y niveles de pobreza más elevados, en comparación con la población no afrodescendiente (NAD).

La Encuesta de Calidad de Vida del DANE revela una notable disparidad en la percepción de pobreza entre estos grupos, siendo más pronunciada en los hogares AD. En 2019, el 55% de los hogares AD se consideraron pobres frente al 35% de los hogares NAD (Núñez, 2021). Esta situación resalta la vulnerabilidad de los hogares AD, influenciada por la inestabilidad laboral y una menor efectividad de las políticas públicas dirigidas a ellos.

La capacidad económica de los hogares para satisfacer sus necesidades básicas también refleja esta brecha. En 2019, solo el 3,5% de los hogares AD reportaron ingresos superiores a sus necesidades, en contraste con el 9,1% de los hogares NAD. La falta de ingresos es especialmente aguda en los hogares AD, con 53%, lo cual indica que no cubren sus gastos, comparado con el 36% de los hogares NAD.

La raíz de estas desigualdades se encuentra en la trayectoria educativa de la población AD, que impacta directamente en su inserción laboral. Las deficiencias en la educación y los retos adicionales impuestos por

“

En 2019, solo el 3,5% de los hogares AD reportaron ingresos superiores a sus necesidades, en contraste con el 9,1% de los hogares NAD.

la pobreza estructural limitan las oportunidades laborales de los jóvenes AD, tanto en zonas rurales como urbanas, a pesar de que las condiciones en las ciudades puedan parecerse más a las de la población NAD.

Esta brecha educativa se traduce en desigualdades laborales marcadas, con una sobrerrepresentación de los AD en empleos de baja calificación y remuneración, lo que indica segregación laboral. La discriminación en el empleo afecta a los AD en todos los niveles, desde trabajos de baja calificación hasta cargos directivos, agravada por estereotipos racistas y una limitada red de contactos sociales (Núñez, 2021).

El acceso a empleo formal es particularmente difícil para los AD de bajos recursos, por lo que se ven forzados a dirigirse hacia el sector informal. Incluso aquellos con educación superior enfrentan barreras significativas, como la discriminación en el acceso a cargos de responsabilidad, lo que resulta en menores salarios en comparación con sus pares NAD.

Para probar estas hipótesis, Núñez (2021) analiza la exclusión de la población afrodescendiente (AD) en Colombia desde tres perspectivas: educación, acceso a cargos de decisión y disparidad salarial. El estudio indica que los ingresos dependen directamente de la educación, la ocupación en cargos directivos y la condición de afrodescendiente. Los años de educación individual dependen de aquella lograda por sus padres, lo que indica un efecto indirecto sobre el ingreso final de esta última variable (Figura 3.2).

Los resultados indican: primero, se evidencia que la condición de AD está asociada con menos años de educación, incluso considerando la educación de los padres y otras variables de control. Segundo, la probabilidad de que individuos AD accedan a cargos con capacidad de toma de decisiones es 43% menor que para aquellos con

características similares de la población NAD, lo que sugiere discriminación o exclusión en el ámbito laboral. Tercero, al explorar el ámbito educativo y otras características individuales, persiste una brecha salarial para la población AD, quienes reciben 8% menos de salario que sus pares NAD, lo cual indica discriminación salarial.

Los efectos de exclusión se desglosan en tres aspectos: (i) años de educación, (ii) probabilidad de ocupar cargos de poder y (iii) diferencia salarial; a los que se suma un efecto total de exclusión de 0,6819. Además, se analizan los efectos indirectos y totales, donde ser AD incide negativamente en el salario y el acceso a cargos de decisión, lo que refleja niveles de exclusión en estos ámbitos.

El modelo concluye que la población AD enfrenta: (i) menor nivel educativo, (ii) menor probabilidad de acceder a posiciones de liderazgo, y (iii) menor salario en comparación con la población NAD. Además, se mantiene la consistencia con respecto a la menor movilidad social y las diferencias de género, donde los hombres, a pesar de tener menos años de educación promedio que las mujeres, tienden a obtener mayores salarios.





En resumen, el análisis descompone sistemáticamente los efectos de exclusión que la población AD experimenta a lo largo de su ciclo de vida, desde la educación hasta el mercado laboral y las posiciones de poder, culminando en impactos significativos en los ingresos, la movilidad social y la condición de pobreza. Una acción fundamental es el reconocimiento estatal y social del racismo en Colombia, a pesar de las garantías constitucionales contra la discriminación. Este reconocimiento debe ser un proceso continuo y una política de Estado para combatir eficazmente el racismo arraigado en las prácticas culturales.

En el ámbito educativo, es necesario prevenir la deserción escolar y fomentar la continuación educativa, especialmente en secundaria, para mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes AD y evitar su exposición a la violencia y criminalidad. La calidad de la educación pública en territorios con alta concentración de población

AD debe ser una prioridad, y abarcar desde la educación básica hasta la universitaria, para fomentar la inclusión laboral y el desarrollo social.

Para las mujeres AD, se sugiere asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva para prevenir embarazos adolescentes no deseados y facilitar su continuidad educativa y laboral. Además, se recomienda reconocer y apoyar económicamente su contribución a la economía del cuidado, como una forma de reparación por la discriminación histórica.

Por último, es necesario continuar y ampliar las acciones afirmativas del Estado para la inclusión social y laboral de la población AD, promoviendo la formalización y el autoempleo digno, con un enfoque basado en derechos y no solo en asistencia social. De otra forma, la población seguiría siendo excluida, sin poder solucionar los problemas de ingresos, pobreza e inseguridad alimentaria.

3.5 Grupos vulnerables

La dimensión de género



Según el DANE (2023), la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave a escala nacional en 2022 es significativamente más alta en los hogares con jefatura femenina (29%), en comparación con los hogares con jefatura masculina (24%). Esta diferencia de 5 puntos porcentuales resalta la mayor vulnerabilidad que enfrentan las mujeres colombianas en términos de seguridad alimentaria.

En las zonas urbanas (cabeceras), la tendencia se mantiene con una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares liderados por mujeres (28%) frente a aquellos liderados por hombres (22%). Esta diferencia de 6 puntos porcentuales evidencia que, a pesar de estar en áreas urbanas con mejor acceso a servicios y recursos, las mujeres continúan enfrentando mayores desafíos para asegurar alimentos suficientes y nutritivos para sus hogares.

La situación es aún más crítica en las zonas rurales (centros poblados y rural disperso), donde la prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares con jefatura femenina alcanza el 35%, mientras que en hogares con jefatura masculina es del 29%. Esta diferencia de 6 puntos porcentuales destaca las dificultades adicionales que enfrentan las mujeres en áreas rurales, relacionadas con limitaciones en el acceso a recursos agrícolas, crédito y oportunidades económicas y laborales.

Los datos del DANE (2023) sugieren que la inseguridad alimentaria está influenciada por el género del jefe del hogar, con las mujeres enfrentando una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria tanto en zonas urbanas como rurales. Este fenómeno podría estar relacionado con varios

factores, incluida la desigualdad de ingresos (la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 12%), el acceso limitado a recursos y servicios, así como las responsabilidades adicionales y sobrecargas que muchas mujeres asumen en sus hogares (Núñez, 2022). Según el DANE-ENUT (2022), las mujeres colombianas dedican en promedio 22 horas semanales más a tareas no remuneradas que los hombres. Esto implica que las mujeres suelen tener menores ingresos y menos acceso a empleos bien remunerados, lo que limita su capacidad para asegurar alimentos adecuados para sus hogares.

En áreas rurales, las mujeres tienen menos acceso a tierras agrícolas, debido a que culturalmente los hombres son quienes más se dedican a trabajar la tierra y heredan las propiedades. Esto también implica un menor acceso a créditos y formación técnica, lo cual dificulta su capacidad para producir o adquirir alimentos. Además, las mujeres suelen asumir la mayor parte de las responsabilidades de cuidado del hogar y de los hijos, lo que puede restringir su tiempo y capacidad para generar ingresos y trabajar la tierra.

La evidencia del DANE (2023) destaca la necesidad de políticas y programas específicos que aborden las disparidades de género en la seguridad alimentaria y fomenten sistemas de cuidado, como los implementados en Bogotá, que apoyen a las mujeres a disminuir las sobrecargas y a tener mayores oportunidades de formación para el trabajo. En este sentido, es crucial implementar estrategias que mejoren el acceso de las mujeres a recursos económicos y agrícolas, así como apoyar iniciativas que fortalezcan su capacidad para generar ingresos y asegurar la alimentación de sus hogares.



Víctimas del conflicto armado

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado llevó a cabo la Cuarta Encuesta Nacional de Verificación (CENV), con el objetivo de evaluar el progreso en la garantía de los derechos de las víctimas. Este estudio se realizó entre mayo y junio de 2023, y su muestra estuvo compuesta por 9.698 víctimas de desplazamiento forzado, y el análisis comparativo, por 1.987 individuos de referencia (Unidad para las Víctimas, 2024).

Los resultados de la CENV, en comparación con la Superación de Situación de Vulnerabilidad (SSV) y los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED), muestran diferencias en los niveles de cumplimiento de varios derechos, tales como identificación, salud, educación, alimentación y vivienda. Específicamente, la CENV refleja mayores desafíos en la **alimentación, vivienda y generación de ingresos**, en contraste con los resultados más positivos de la SSV y los IGED en estos ámbitos.

De acuerdo con los hallazgos de la CENV, se observó que la tasa de pobreza monetaria alcanzó el 68,1% en el caso de los hombres, y el 80,6% para las mujeres víctimas del conflicto, resultando en una tasa agregada de 76,1%. Este dato evidencia una disparidad significativa en el impacto

de la pobreza monetaria, siendo las mujeres considerablemente más afectadas. En términos de pobreza extrema, los resultados indicaron una tasa del 33% para los hombres y del 44% para las mujeres, lo cual se traduce en una tasa general de 40,3%, subrayando nuevamente una mayor incidencia de esta condición entre la población femenina. **Esta incidencia está muy por encima de los promedios nacionales y refleja la alta vulnerabilidad que enfrentan las víctimas y las necesidades de apoyo que ayuden a superar esta condición.**

Estas diferencias no solo reflejan la mayor vulnerabilidad de las mujeres en contextos de desplazamiento forzado, sino que también destacan las complejidades asociadas a la fragmentación familiar posdesplazamiento. En muchos casos, tras el desplazamiento, los hogares tienden a fragmentarse, dejando a las mujeres como principales responsables del sustento y cuidado de la familia. Esta situación las expone a mayores riesgos y desafíos económicos, agudizando las condiciones de pobreza y pobreza extrema en las que se encuentran. **Este análisis resalta la necesidad de implementar medidas específicas que aborden las disparidades de género en el impacto del desplazamiento forzado,**



De acuerdo con los hallazgos de la CENV, se observó que la tasa de pobreza monetaria alcanzó el 68,1% en el caso de los hombres, y el 80,6% para las mujeres víctimas del conflicto



asegurando estrategias de intervención que contemplen las particularidades y necesidades de las mujeres afectadas.

En cuanto a la insuficiencia alimentaria, la encuesta reporta que el 50,5% de las personas enfrentan esta situación, esto refleja las condiciones de hambre que dicha población sufre diariamente. Este dato destaca la urgente necesidad de intervenciones focalizadas para abordar la seguridad alimentaria entre las víctimas de desplazamiento forzado. Además, es importante considerar la metodología utilizada en la encuesta, que se basa en respuestas subjetivas sobre la cantidad de alimentos consumidos, lo cual podría influir en la percepción de insuficiencia alimentaria reportada.

La alta tasa de insuficiencia alimentaria subraya la importancia de fortalecer los sistemas de apoyo y las políticas públicas para garantizar el acceso a alimentos nutritivos y suficientes para esta población vulnerable.

Migrantes y comunidades de acogida

El informe de 2023 del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) arroja luz sobre la crítica situación de seguridad alimentaria entre migrantes y comunidades de acogida en Colombia, presentando datos alarmantes. Se identifica una desproporcionada incidencia de inseguridad alimentaria en diversos grupos: un preocupante 73% tanto en migrantes en tránsito como en migrantes pendulares, seguido por 54% de colombianos retornados, 52% de migrantes venezolanos con intención de residencia permanente, y 43% en las comunidades receptoras (Figura 7). Estos datos resaltan la magnitud del desafío con los migrantes con vocación de permanencia (1,3 millones) y los migrantes pendulares (1,3 millones), constituyéndose en los grupos más numerosos afectados, seguidos por colombianos retornados (530.000), comunidades de acogida (430.000) y migrantes en tránsito (280.000).

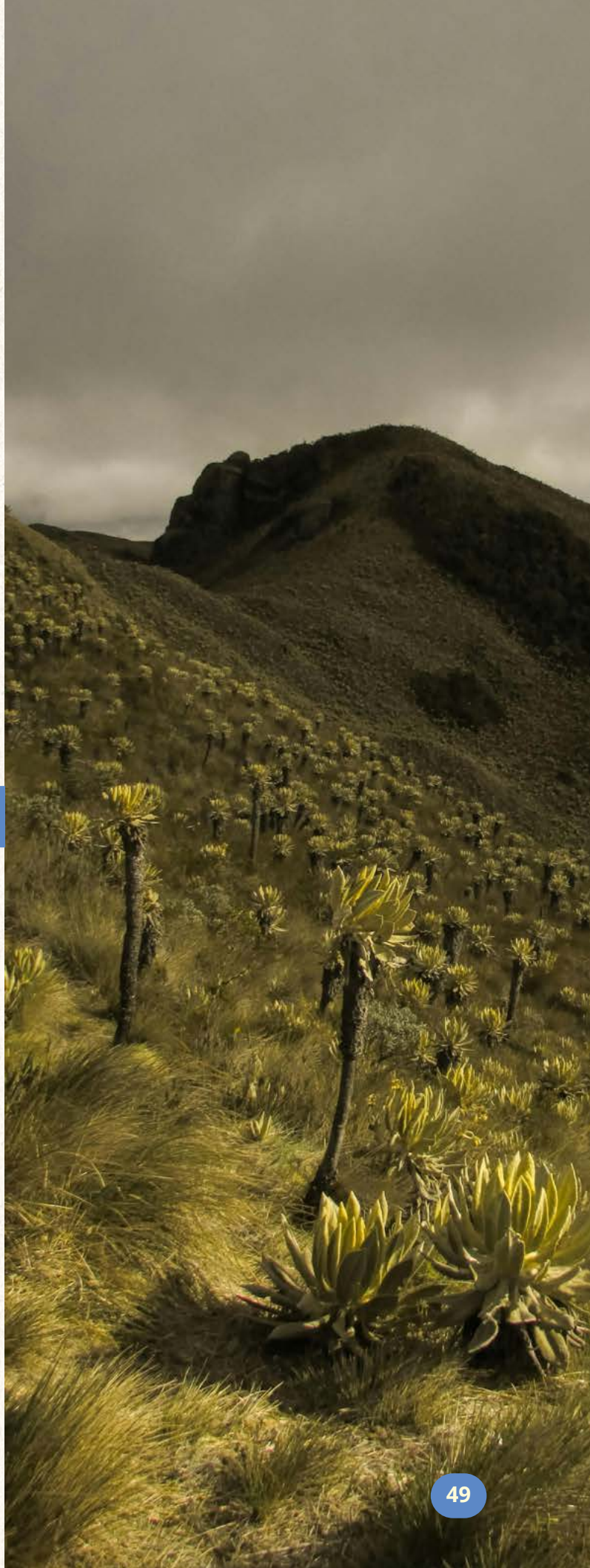
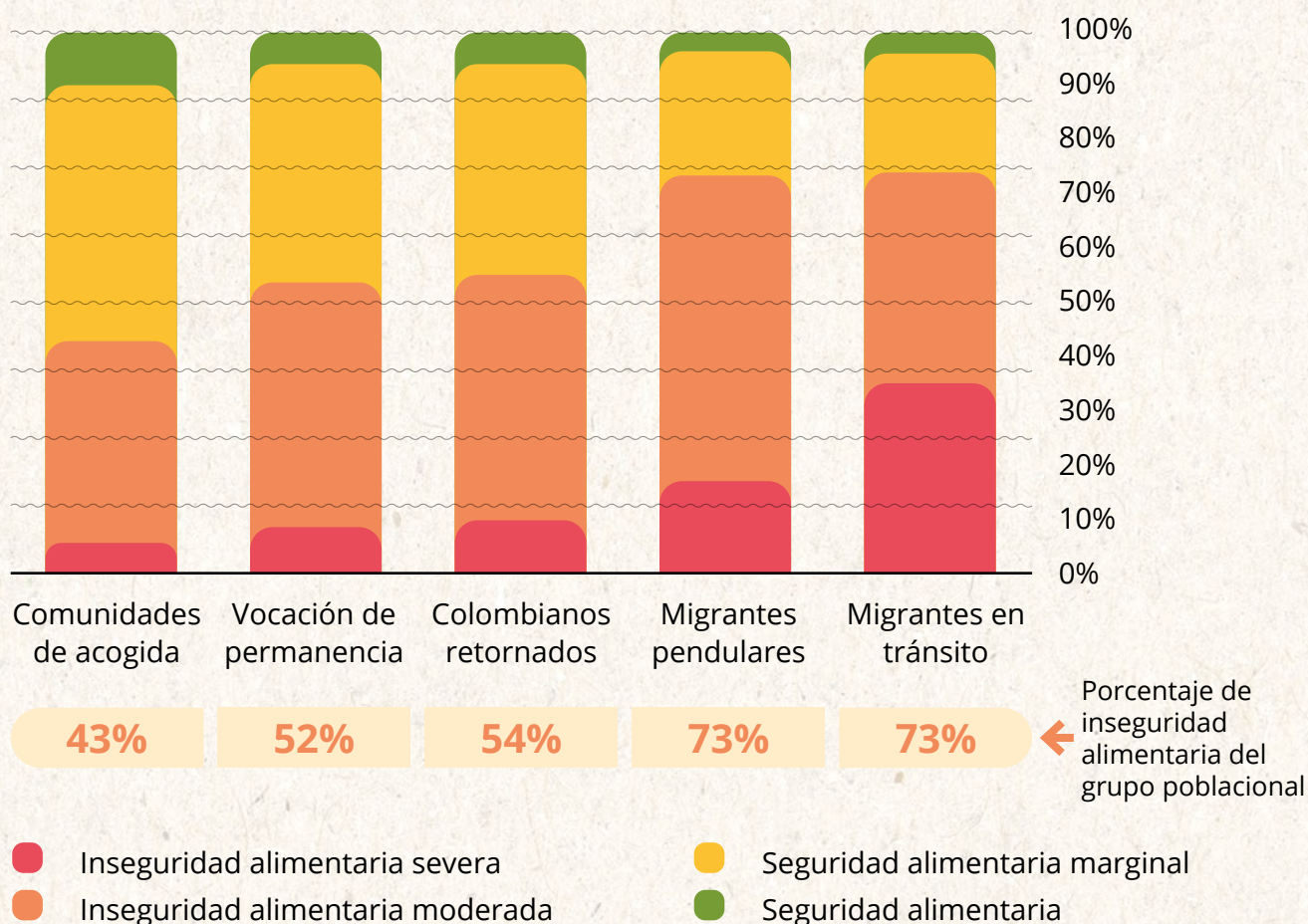


Figura 7. Niveles de inseguridad alimentaria por grupos de población



Fuente: WFP (2023).

La vulnerabilidad de los hogares migrantes se ve exacerbada por sus condiciones de vida precarias, donde la supervivencia a menudo depende de medidas insostenibles como la venta de propiedades personales o el apoyo comunitario. Esta realidad se ve reflejada en que más de la mitad de estos hogares han tenido que omitir comidas, y al menos el 40% se alimenta dos veces o menos al día (WFP, 2023).

El estudio de Pico *et al.* (2021) complementa este panorama, al analizar la situación de los migrantes venezolanos en Bogotá, destacando que, a pesar de ciertas mejoras en la seguridad alimentaria tras su llegada, persisten obstáculos

significativos como el acceso a alimentos de calidad, la legalidad, el empleo, el alojamiento y la xenofobia. Este análisis subraya la necesidad de abordar integralmente estos desafíos para fortalecer la seguridad alimentaria de los migrantes.

El informe del WFP (2023) también señala que el 70% de estos hogares vive con ingresos bajo el umbral de pobreza, lo que limita su capacidad para cubrir necesidades básicas. La falta de estatus legal para trabajar y los bajos niveles educativos son barreras críticas para su integración económica. Ante este escenario, el informe advierte sobre un probable deterioro de la seguridad alimentaria a corto y mediano plazo,

debido a las presiones económicas globales que incrementan el costo de vida. **Se enfatiza la importancia de mantener y ampliar la asistencia de emergencia, con un enfoque nutricional que asegure dietas balanceadas, especialmente para niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y lactantes.** Se recomienda, ade-

más, implementar estrategias que promuevan la integración socioeconómica de migrantes y comunidades receptoras, **como capacitaciones, desarrollo de habilidades y vinculación con el mercado laboral, para abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y fomentar una integración sostenible.**

3.6 La pandemia de COVID-19

Los datos del DANE reflejan la evolución de la pobreza total y extrema en un periodo que abarca desde 2008 hasta 2022 (Figura 8). En el transcurso de la primera década, se observa una tendencia sostenida a la baja tanto en la pobreza total como en la pobreza extrema. La tasa de pobreza total disminuyó de 52,4% en 2008 a 34,7% en 2018, lo que representa una reducción significativa de 17,7 puntos porcentuales. En el mismo periodo, la pobreza extrema se redujo de 18,5% a 8,2%, una disminución de 10,3 puntos porcentuales. Estos cambios se atribuyen al crecimiento económico sostenido de aquellos años (75%) y a políticas orientadas a mejorar las condiciones económicas y sociales de las poblaciones vulnerables (25%), lo que refleja también una mejora en la distribución del ingreso (Núñez, 2021).

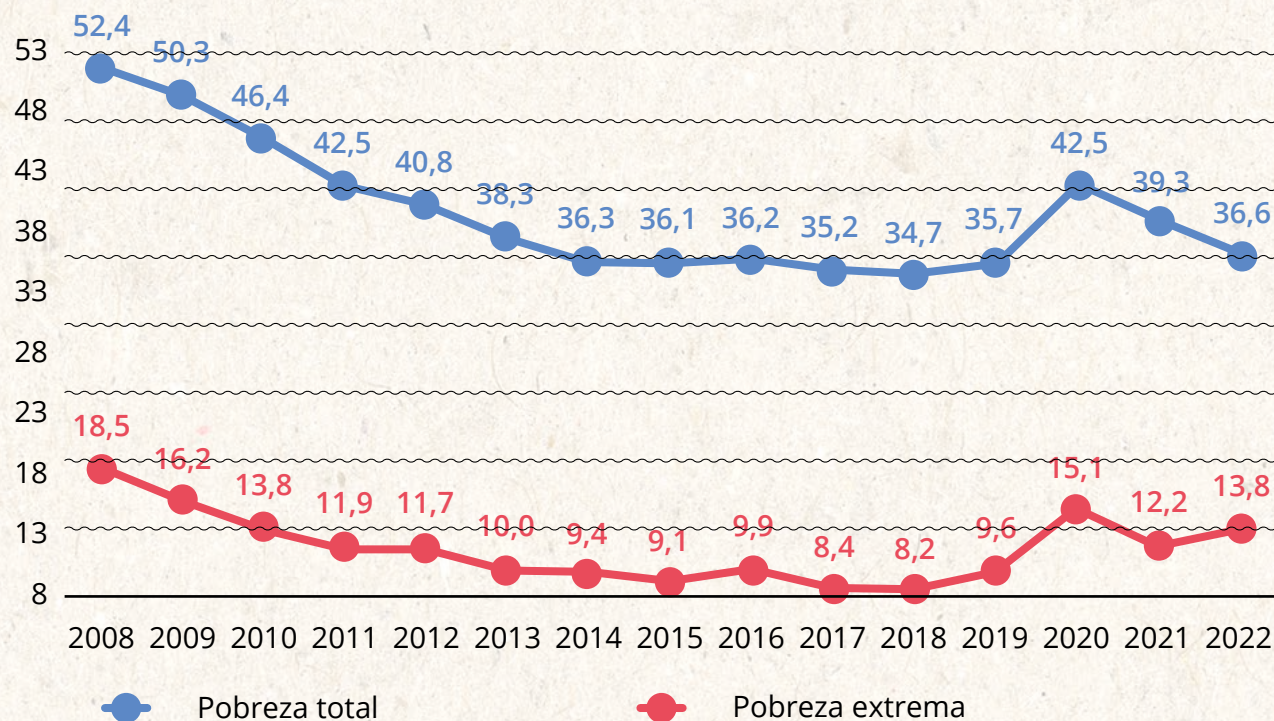
De otro lado, antes de la llegada de la pandemia ya se observaba un leve incremento en la pobreza total en 2019, ascendiendo a 35,7%, como resultado de un incremento en la tasa de desempleo y una disminución en la tasa de ocupación a escala nacional. La pobreza extrema también subió a 9,6% ese mismo año, marcando una interrupción en la tendencia descendente anterior.

Con la llegada de la pandemia en 2020, las cifras muestran un fuerte repunte tanto en la pobreza total como en la extrema. La pobreza total aumentó a 42,5%, y la pobreza extrema a 15,1%, niveles no vistos desde hace más de una década.

Esto refleja los devastadores efectos económicos y sociales del COVID-19, los cuales fueron exacerbados por las medidas de confinamiento, la interrupción de actividades económicas y el incremento del desempleo (Figura 8).



Figura 8. Incidencia de la pobreza en Colombia (%)



Fuente: Serie anual del DANE 2008-2020 y datos extrapolados para 2021 y 2022 a partir de la nueva serie presentada en 2023 (DANE, 2023).

A pesar de los intentos de recuperación económica, a dos años del comienzo de la pandemia, en 2022, la pobreza total aún supera los niveles prepandémicos. La pobreza extrema, aunque disminuyó en tres puntos porcentuales durante

2022, manteniéndose estancada. Esto indica un progreso limitado en la mitigación de las formas más severas de pobreza, presentando un reto sustancial para el diseño y la implementación de políticas públicas eficaces. Especialmente preocupante es la conexión con el hambre, como

se evidenciará en el próximo capítulo, donde las cifras recientes publicadas por el DANE sobre seguridad alimentaria muestran una cercanía a las de pobreza total. Esto nos permite afirmar que la situación de pobreza extrema, que afecta al 12% de la población, es alarmante en términos de las secuelas a largo plazo y la vulnerabilidad a la que está expuesto este segmento de la sociedad.

Los datos analizados evidencian que la pandemia ha revertido los progresos socioeconómicos de Colombia a los niveles de una década atrás, equiparando las condiciones actuales a las que se vivían en 2010. Los avances logrados en materia de bienestar social a lo largo de esos doce años se han visto notablemente mermados. Esta regresión, más allá de reflejar un aumento en las tasas de pobreza, implica indirectamente un incremento en la inseguridad alimentaria y el hambre, impactando desproporcionadamente a los estratos más vulnerables de la sociedad.

La situación actual destaca la urgencia de formular y poner en marcha políticas de recuperación económica que sean integrales y profundas. Es crucial que estas políticas vayan más allá de la simple reactivación del crecimiento económico, el cual fue notablemente débil en 2023, con expectativas similares para 2024, anticipándose un crecimiento cercano al 1%. Es esencial enfocarse también en el robustecimiento de los sistemas de protección social: proteger a las poblaciones más vulnerables y garantizar que la red de seguridad social sea capaz de mitigar un deterioro adicional en la lucha contra la pobreza y el hambre, es más que una obligación, es una necesidad apremiante. Implementar estas acciones es vital para recuperar la senda y cumplir con los ODS. Este enfoque permitirá no solo la recuperación de las pérdidas inmediatas, sino también el fortalecimiento de la estructura socioeconómica del país frente a las adversidades futuras.



4. Retos para superar el hambre en el país



“

1 de cada 4 hogares colombianos sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave, con disparidades geográficas significativas y una mayor vulnerabilidad en ciertos grupos poblacionales.

Colombia enfrenta múltiples desafíos en su lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria, los cuales están profundamente arraigados en factores estructurales, socioeconómicos y políticos. Este capítulo explora los principales retos que el país debe abordar para avanzar hacia el logro del ODS 2 Hambre Cero.

En primer lugar, se analizan las trampas de pobreza, tanto a nivel individual como local y regional, que han perpetuado el hambre y la malnutrición durante generaciones. Estas trampas se manifiestan en múltiples dimensiones (en lo económico, educativo, de salud y social) y se retroalimentan entre sí, creando un ciclo vicioso difícil de romper. Se enfatiza la necesidad de políticas integrales que aborden las causas subyacentes de la pobreza y promuevan la movilidad social.

A continuación, se examina la situación actual de la seguridad alimentaria en Colombia, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2022, que incorporó por primera vez la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES). Los

resultados revelan que el 26% de los hogares colombianos sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave, con disparidades geográficas significativas y una mayor vulnerabilidad en ciertos grupos poblacionales. Se destacan los factores asociados a la inseguridad alimentaria, como la insuficiencia de ingresos, el acceso limitado a servicios básicos y la informalidad laboral, y se analizan sus consecuencias multidimensionales.

El capítulo también aborda los desafíos de los sistemas agroalimentarios en Colombia, resaltando la necesidad de una gobernanza integral y adaptada a las condiciones y funcionalidades de cada territorio. Se enfatiza la importancia de un enfoque sistémico que permita la coordinación armónica de funciones, posibilidades y actores de cada componente, así como la generación y gestión de información pertinente para una toma de decisiones eficaz e inclusiva.

Además, se exploran los retos en transparencia y lucha contra la corrupción, destacando cómo este fenómeno agrava las condiciones de pobreza y

hambre al impactar negativamente en el crecimiento económico, la distribución de recursos y la efectividad de los programas de asistencia social. Se resalta la necesidad de estrategias contextualizadas que consideren las estructuras de poder y las normas sociales existentes.

El financiamiento de las iniciativas para alcanzar las metas del ODS 2 también se analiza, destacando los esfuerzos del Gobierno colombiano dentro de la iniciativa del Marco Integrado de Financiamiento para los ODS (INFF, por sus siglas en inglés). Se identifican las áreas que requieren atención adicional y recursos financieros para asegurar el cumplimiento oportuno de todas las metas.

Asimismo, se examina la capacidad de las entidades territoriales para enfrentar los retos del hambre, evidenciando las profundas desigualdades regionales y la falta de autonomía local para resolver los problemas inmediatos. Se proponen fondos de ecualización inspirados en modelos de países de la OCDE, para promover la equidad fiscal y dotar a las entidades territoriales de la capacidad necesaria para abordar eficazmente los problemas de seguridad alimentaria.

El capítulo también destaca la importancia de la participación social y comunitaria en los programas de lucha contra el hambre, analizando de qué manera iniciativas como el componente de Bienestar Comunitario del programa Renta Ciudadana han fomentado el empoderamiento, la cooperación y el fortalecimiento del tejido social en las comunidades vulnerables.

Por último, se presentan las conclusiones de un taller convocado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con diversas entidades



gubernamentales²⁴, para discutir cómo se están abordando actualmente los desafíos identificados. Se resaltan las estrategias promisorias, como el fortalecimiento de procesos organizativos comunitarios, la agricultura campesina familiar y las prácticas agroecológicas, así como los retos persistentes en materia de articulación, planeación, transparencia y fortalecimiento de capacidades locales.

En resumen, este capítulo ofrece un análisis integral de los múltiples retos que enfrenta Colombia en su lucha contra el hambre, destacando la necesidad de políticas públicas intersectoriales, participativas y adaptadas a las realidades territoriales. Solo a través de un abordaje holístico y coordinado será posible superar las barreras estructurales que perpetúan la inseguridad alimentaria y avanzar hacia el cumplimiento del ODS 2.

24. Ver anexo 2. Construcción participativa del Reporte Nacional Voluntario 2024.

4.1 Trampas de pobreza



El concepto de “trampa de pobreza” se refiere a un ciclo autoperpetuante en el que individuos, hogares o comunidades son incapaces de escapar de su situación socioeconómica desfavorable, a pesar de sus esfuerzos por mejorarla (Núñez y Cuesta, 2006). Este fenómeno se caracteriza por una serie de barreras interconectadas que no solo impiden el progreso, sino que pueden agravar aún más la situación de pobreza.

Una trampa de pobreza se manifiesta a través de múltiples

dimensiones: económicas, educativas, de salud y sociales. Económicamente, la falta de acceso a recursos financieros y a oportunidades de empleo digno limita la capacidad de las personas para invertir en su educación y salud, esenciales para mejorar su calidad de vida. A nivel educativo, la falta de infraestructura, calidad y recursos adecuados impide el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para acceder a mejores oportunidades. En términos de salud, la pobreza puede exacerbar las condiciones de vida insalubres, aumentando la prevalencia de enfermedades y disminuyendo la capacidad de trabajo de los individuos. Socialmente, el estigma y la discriminación asociados a la pobreza pueden llevar a la exclusión y a la falta de acceso a redes de apoyo esenciales, como aquellas que interconectan las oportunidades laborales.

Las dimensiones de la pobreza suelen entrelazarse y retroalimentarse, creando así un ciclo vicioso difícil de romper. Un ejemplo claro de esta dinámica se encuentra en la relación entre la salud y la

capacidad económica: la mala salud puede disminuir significativamente la capacidad de trabajo de un individuo, mermando su potencial económico. Esta reducción en los ingresos, a su vez, limita el acceso a servicios básicos, como una educación de calidad y atención sanitaria adecuada, perpetuando así la condición de pobreza en la que se encuentra.

Este ciclo se extiende a aspectos aún más críticos de la vida social y económica, como la mortalidad infantil y materna, que están intrínsecamente ligadas a las trampas de pobreza. La mortalidad infantil, por ejemplo, no solo es un indicador de las condiciones de salud en una comunidad, también refleja las carencias en nutrición, agua potable y saneamiento básico, higiene y acceso a servicios médicos, todos ellos aspectos afectados directamente por la pobreza. Así, las familias atrapadas en la pobreza enfrentan mayores riesgos de perder a sus hijos debido a condiciones que son prevenibles o tratables en contextos más favorecidos.

De manera similar, la mortalidad materna destaca cómo la



falta de ingresos y el acceso limitado a servicios de salud se combinan de forma perjudicial. Las mujeres en condiciones de pobreza a menudo carecen de acceso a atención prenatal adecuada, servicios de parto seguro y atención posnatal, aumentando significativamente los riesgos asociados al embarazo y al parto. Esta situación no solo tiene un impacto devastador en las familias, también perpetúa el ciclo de pobreza, ya que los niños que pierden a sus madres enfrentan mayores dificultades económicas y sociales.

Por lo tanto, es esencial reconocer y abordar la interconexión entre las dimensiones de la pobreza, para desarrollar estrategias efectivas que promuevan un cambio sostenible. Intervenciones que se centren en mejorar el acceso a la educación, la salud y las oportunidades económicas, mientras se proporcionan redes de seguridad social, pueden contribuir significativamente a romper las trampas de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas.

Trampas de pobreza a nivel individual y reproducción de la pobreza

Como se mencionó, la interrelación entre las trampas de pobreza y el hambre es una dinámica compleja que perpetúa la inseguridad alimentaria y la pobreza durante generaciones. Esta relación se manifiesta en varios aspectos críticos del desarrollo humano y socioeconómico. Algunos ejemplos son:

- **Acceso limitado a recursos:** La incapacidad de las familias en situación de pobreza para acceder a alimentos suficientes y nutritivos lleva directamente al hambre y la malnutrición. Esta situación se agrava por la falta de acceso a otros recursos esenciales como la educación y la atención médica, creando un ciclo vicioso que perpetúa la pobreza y la inseguridad alimentaria (FAO, 2017). Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),

la inseguridad alimentaria no solo es una consecuencia, sino también una causa de la pobreza, creando un bucle de retroalimentación negativo que dificulta el desarrollo socioeconómico.

- **Salud y capacidad para trabajar:** La malnutrición y el hambre afectan severamente la salud física, reduciendo la capacidad de los individuos para trabajar y ser productivos. Black *et al.* (2013) destacan cómo la malnutrición infantil conduce a resultados de salud adversos a largo plazo, afectando negativamente la productividad económica en la edad adulta. Como se ha mencionado, este deterioro en la salud y la productividad laboral contribuye a la persistencia de la pobreza.
- **Inversiones en capital humano:** El capital humano es crucial para romper el ciclo de la pobreza, sin embargo, las familias que enfrentan inseguridad alimentaria a menudo deben priorizar necesidades inmediatas, como la alimentación, por encima de inversiones a largo plazo, tales como la educación. Esta priorización de necesidades básicas puede llevar, en algunos casos, a prácticas de trabajo infantil para complementar el ingreso familiar, lo que, a su vez, interfiere con la educación y el desarrollo de los niños. Según Grantham-McGregor *et al.* (2007), la malnutrición infantil no solo afecta adversamente la salud física de los niños, también tiene consecuencias significativas en su desarrollo cognitivo y capacidades educativas. Esta situación limita considerablemente su potencial para superar la pobreza, perpetuando así el ciclo de desventaja de una generación a otra.
- **Desigualdad y exclusión social:** El hambre y la pobreza están profundamente entrelazadas con la desigualdad y la exclusión social. Sen (2000) explica cómo la falta de acceso a



recursos básicos y oportunidades económicas se ve agravada por la desigualdad social y económica, reforzando las trampas de pobreza y manteniendo a los grupos vulnerables en un estado de inseguridad alimentaria crónica.

- *Estabilidad y conflictos:* Las trampas de pobreza pueden exacerbar la inestabilidad social y los conflictos, los cuales, a su vez, agravan la situación de hambre. Collier y Hoeffler (2004) discuten cómo la pobreza y la inseguridad económica pueden fomentar conflictos, los cuales destruyen la infraestructura agrícola y limitan el acceso a los alimentos, exacerbando la inseguridad alimentaria. En Colombia, por ejemplo, el estallido social de 2021 tuvo efectos macroeconómicos que reforzaron precisamente lo que buscaban solucionar inicialmente las protestas (empleo e inflación).

Para abordar estas complejidades, es crucial un enfoque integrado que considere la seguridad alimentaria no solo como una cuestión de disponibilidad de alimentos, sino también en términos de acceso, uso y estabilidad (Barrett, 2010). **Las políticas deben ser multidimensionales, y abordar tanto las causas inmediatas del hambre como las estructuras subyacentes que perpetúan la pobreza y la inseguridad alimentaria.**

Trampas de pobreza a escala local y regional

La literatura académica reconoce de forma extensa las trampas de pobreza, no solo a nivel individual, sino también en contextos locales, regionales y nacionales, identificando diversas dinámicas a través de las cuales la pobreza se manifiesta y se autoperpetúa en comunidades y regiones completas (Núñez, 2012). Las trampas de pobreza pueden clasificarse en varias categorías clave, según lo indicado en estudios relevantes:

- *Trampas geográficas:* Sachs (2005) destaca cómo factores geográficos pueden obstaculizar el desarrollo económico y mantener la pobreza en ciertas regiones. Áreas con acceso limitado a mercados clave (p. ej.: los de las siete principales ciudades de Colombia que concentran más de la tercera parte de la población), recursos naturales escasos o condiciones climáticas adversas enfrentan desafíos significativos para el comercio y la inversión, lo que limita sus oportunidades económicas y contribuye a la perpetuación de la pobreza.
- *Trampas institucionales:* Acemoglu y Robinson (2012) subrayan la importancia de las instituciones inclusivas y eficaces para el progreso económico. Regiones con instituciones frágiles, baja capacidad administrativa,



clientelismo y corrupción endémica suelen experimentar estancamiento económico y elevados niveles de pobreza (p. ej.: Chocó y La Guajira). La incapacidad de las instituciones para funcionar adecuadamente puede resultar en una provisión ineficiente de servicios públicos y en la implementación ineficaz de políticas y planes de desarrollo.

- *Trampas fiscales:* Bird y Zolt (2008) analizan cómo una capacidad fiscal limitada en ciertas regiones puede generar un círculo vicioso, donde ingresos fiscales insuficientes impiden la provisión de servicios públicos esenciales, afectando negativamente tanto el desarrollo económico y social como la atracción de la inversión. Esto se ve exacerbado en áreas donde la base tributaria es estrecha debido a la extensa pobreza.
- *Trampas ambientales:* La degradación de los recursos naturales y la vulnerabilidad a desastres naturales pueden restringir el desarrollo y aumentar la fragilidad de las comunidades. Barbier (2010) discute cómo la pobreza puede llevar a la explotación insostenible de recursos (p. ej.: en ciertas áreas rurales se puede presentar la sobreexplotación de los suelos), creando un ciclo de degradación que perpetúa la pobreza.

- *Conflictos y violencia:* Collier et al. (2003) ilustran cómo los conflictos pueden sumir a las regiones en la pobreza, dañando infraestructura, desplazando comunidades y desviando recursos esenciales hacia la seguridad, en lugar de hacia el desarrollo.
- *Trampas educativas:* La falta de acceso a educación de calidad perpetúa la pobreza al limitar las oportunidades de empleo y reducir el potencial de ingresos. Las regiones con sistemas educativos deficientes no pueden desarrollar el capital humano necesario para impulsar el crecimiento económico y la innovación.

Para contrarrestar estas trampas de pobreza, es esencial adoptar enfoques integrados y multifacéticos que aborden las causas subyacentes de la pobreza en sus múltiples dimensiones. Esto incluye mejorar la infraestructura y la conectividad, fortalecer las instituciones y la gobernanza, ampliar la base fiscal, gestionar los recursos ambientales de manera sostenible, fomentar la paz y la seguridad, y garantizar el acceso a educación de calidad. Estas estrategias deben ser contextualizadas y diseñadas en colaboración con las comunidades afectadas para garantizar su efectividad y sostenibilidad.



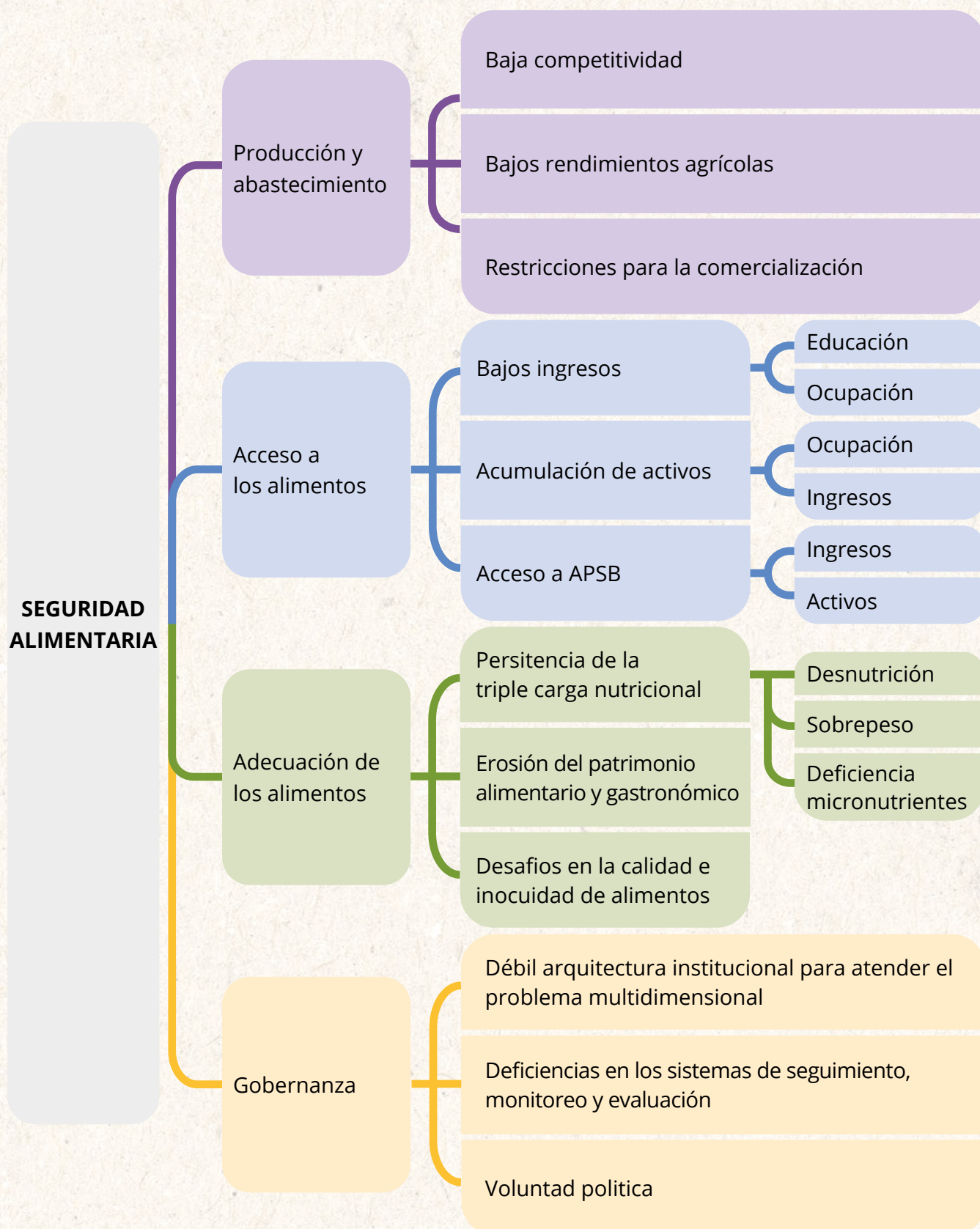
4.2 Seguridad alimentaria

El DNP aborda cuatro problemáticas relacionadas con la inseguridad alimentaria y nutricional en Colombia, que afectan la garantía progresiva del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA):



Producción y abastecimiento de alimentos: Existen dificultades significativas en la producción y abastecimiento de alimentos que permiten un desarrollo equitativo del campo y mejoran la disponibilidad de alimentos para todos. Se destaca la **baja competitividad** del sector agropecuario, los bajos rendimientos agrícolas, los impactos negativos del cambio climático en la producción agrícola y pecuaria, y las limitaciones logísticas e infraestructurales para el transporte de alimentos desde zonas rurales hasta centros de acopio, que se reflejan en restricciones a la comercialización (Figura 9).

Figura 9. Aspectos claves de la seguridad alimentaria en Colombia



Fuente: elaboración propia a partir del documento de DNP



“

El acceso a alimentos en el hogar depende directamente de sus ingresos, la acumulación de activos y el acceso a agua potable y saneamiento básico.



Acceso a los alimentos: Persisten limitaciones para los consumidores en cuanto al acceso físico y económico a alimentos que garanticen una alimentación adecuada de manera permanente y sostenible. Se identifican ineficiencias en la comercialización de alimentos frescos y perecederos, fenómenos de pobreza que restringen el acceso a la alimentación y nutrición adecuadas, inflación de precios de alimentos debido a situaciones coyunturales, y poblaciones en situación de vulnerabilidad con acceso limitado a los alimentos. El acceso a alimentos en el hogar depende directamente de sus ingresos, la acumulación de activos y el acceso a agua potable y saneamiento básico (ver siguiente sección).



Adecuación de la alimentación: Se aborda la problemática de una alimentación no acorde con los requerimientos de energía y nutrientes necesarios en cada etapa de la vida, así como la pérdida de prácticas alimentarias territoriales y limitaciones para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. Por lo tanto, en relación con la adecuación de alimentos, se observa una persistente triple carga nutricional -compuesta por desnutrición, sobrepeso y deficiencia de micronutrientes-, una erosión del patrimonio alimentario y gastronómico colombiano, así como significativos desafíos en cuanto a la calidad e inocuidad de los alimentos. Estos problemas **requieren la implementación de una política pública que sea integral y coordinada** para su efectiva solución (Figura 9).



Débil gobernanza en políticas públicas: Se señala la ausencia de un desarrollo legal integral que defina claramente el alcance y las responsabilidades de las entidades para garantizar el DHAA a toda la población. Además, se menciona una arquitectura institucional débil para la garantía del DHAA y un monitoreo limitado de las metas asociadas a sus dimensiones. Por último, la problemática de la seguridad requiere de voluntad política para fortalecer la institucionalidad y proveer los recursos necesarios para eliminar el hambre en Colombia (Figura 9).

En relación con estos problemas generales, el Centro ISA (2024) señala también que los problemas son más difíciles en algunas regiones del país. En particular, la cadena de suministro de alimentos en Colombia enfrenta una serie de desafíos críticos que afectan su eficiencia y sostenibilidad, lo que refleja la complejidad de su estructura que involucra una amplia gama de actores y actividades desde la producción hasta el posconsumo. Entre los principales problemas identificados en el estudio se incluyen:

- **Producción agroalimentaria:** A pesar de que el sector agropecuario representó el 8,9% del valor agregado nacional en 2022, posicionándose como un sector clave, existen marcadas diferencias en la generación de valor agregado a escala departamental. Por ejemplo, Vichada y Guaviare muestran una alta dependencia del sector agropecuario, mientras que en Bogotá D.C., la contribución es mínima. Esta heterogeneidad resalta la variabilidad de los sistemas productivos en el país.
- **Limitaciones en la producción:** La mayoría de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) tienen extensiones inferiores a 5 hectáreas, con una notable informalidad en la tenencia de la tierra (52,7%). Además, el acceso a factores de producción es limitado, evidenciado por el bajo porcentaje de UPA que reciben asesoramiento técnico (16,4%), financiamiento (9,5%) o cuentan con infraestructura adecuada para la producción (16%).
- **Transformación de productos:** La capacidad de transformación de productos agropecuarios en alimentos es esencial para aumentar su valor, vida útil y seguridad. Sin embargo, la participación de unidades productivas dedicadas a la transformación es variable, siendo menor en departamentos como Bolívar (9%) y Antioquia (14%), y mayor en Guainía (96%) y La Guajira (89%).
- **Distribución y comercialización:** La eficiencia en la distribución y comercialización se ve afectada por el estado de las vías y la distancia de los municipios a las capitales departamentales. El análisis revela que solo el 37% de los departamentos reportan vías en buen estado, lo que impacta negativamente en la inocuidad y frescura de los alimentos distribuidos.
- **Variación de precios:** El IPC para alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó un aumento significativo del 27,81% en 2022, lo cual restringe la comercialización de productos frescos y afecta la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de la población.
- **Consumo de alimentos:** Las decisiones de consumo están influenciadas por múltiples factores, incluidos los precios de los alimentos, que llevan a los hogares a optar por alimentos menos costosos, pero también menos nutritivos. Se observa una mayor propensión al gasto en alimentos en hogares rurales (31,2%), en comparación con los urbanos (14%).
- **Disposición de residuos:** La gestión de los residuos de alimentos, que incluye las pérdidas y desperdicios, es un aspecto crítico. Se estima que el 34% de los alimentos destinados al consumo humano se pierden o desperdician, lo que subraya la necesidad de políticas y medidas eficaces para reducir estas pérdidas.

Estos elementos resaltan la complejidad y la interconexión de los desafíos que enfrenta Colombia en la garantía del DHAA, subrayando la necesidad de abordar estas problemáticas desde múltiples frentes para asegurar una alimentación adecuada y sostenible para toda la población, a fin de reducir el hambre y la prevalencia de inseguridad alimentaria en el país.

4.3 Factores asociados a la (in)seguridad alimentaria

En esta sección se analizan los factores asociados a la inseguridad alimentaria en un hogar que sufre esta condición²⁵. La literatura sobre SAN enfatiza que el acceso a alimentos adecuados se ve afectado por múltiples factores, entre los que se destaca la insuficiencia de ingresos. Esta última afecta directamente la capacidad para adquirir alimentos y, de manera indirecta, incide a través de la tenencia de activos y el acceso a servicios básicos como el acueducto. La disponibilidad de agua potable, por ejemplo, es crucial no solo para el consumo directo y la preparación de alimentos seguros, sino también para prevenir enfermedades que podrían comprometer la nutrición y ocasionar gastos adicionales en servicios de salud.

Además, factores macroeconómicos como la inflación alimentaria, influenciada por la volatilidad cambiaria y las dinámicas de la economía global, afectan la capacidad de compra de los hogares. Asimismo, las barreras físicas al acceso de alimentos, particularmente en zonas remotas o marginadas, se ven exacerbadas por la infraestructura inadecuada y la inseguridad, lo cual eleva los costos y dificulta la disponibilidad de alimentos.

La tenencia de activos se señala como un determinante clave de la SAN, dado que hogares con escasos recursos patrimoniales enfrentan mayores desafíos para acceder a una alimentación adecuada. Esta situación se agrava por la limitada conexión a servicios esenciales como el acueducto, lo que directamente deteriora la SAN, al comprometer tanto la higiene alimentaria como la disponibilidad de agua potable.

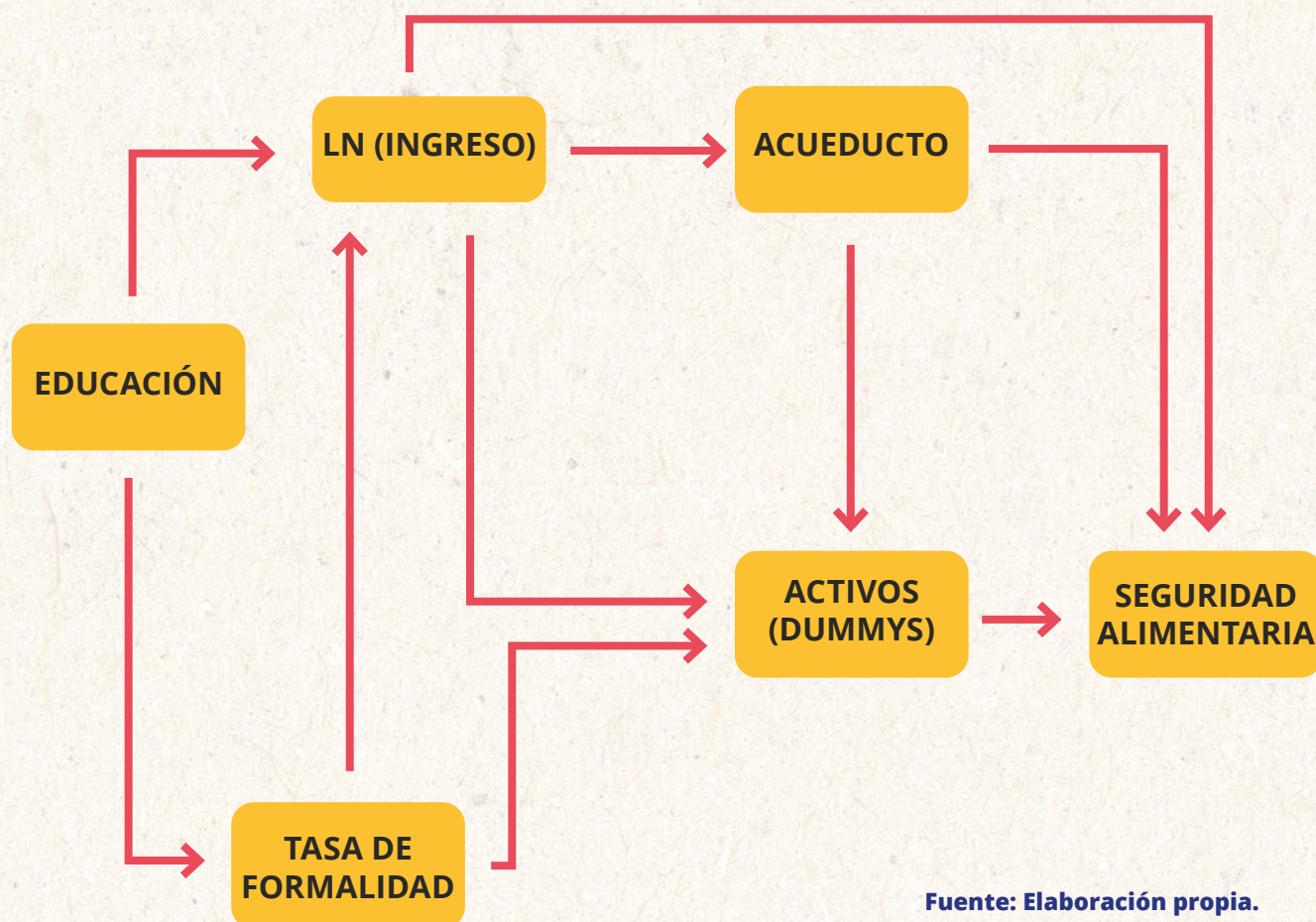


En este contexto, la educación y la formalidad laboral emergen como factores críticos que influyen en el ingreso y, por ende, en la SAN. La educación mejora la productividad laboral, fomenta el aprendizaje continuo y potencia habilidades como la resolución de problemas y la comunicación, lo que se traduce en mejores oportunidades laborales y salarios más altos. Por otro lado, la formalidad laboral puede asegurar ingresos estables, acceso a la seguridad social y prestaciones que contribuyen al bienestar general de los trabajadores y sus familias, facilitando el ahorro y el acceso a créditos y seguros.

La interacción entre educación y formalidad laboral es evidente, ya que las competencias adquiridas a través de la educación son altamente valoradas en el sector formal, donde las oportunidades de empleo suelen ofrecer mejores condiciones y remuneraciones. Esta relación sinérgica entre educación, formalidad laboral e ingresos subraya la importancia de políticas integrales que promuevan el acceso a educación de calidad y fomenten la creación de empleos formales como estrategias clave para mejorar la SAN.

25. Una trampa de pobreza implica un ciclo autopropagante de pobreza que es difícil de romper sin intervención externa. Los factores asociados a la inseguridad alimentaria son condiciones que contribuyen a esta, pero no necesariamente perpetúan un ciclo ni se transmiten generación tras generación.

Figura 10. Modelo de ecuaciones estructurales sobre la inseguridad alimentaria



Fuente: Elaboración propia.

En resumen, el análisis de la SAN requiere una comprensión holística de cómo los ingresos, la educación, la formalidad laboral y el acceso a servicios básicos interactúan y conforman las condiciones para una adecuada nutrición y acceso a alimentos. La figura 10 ilustra estas relaciones complejas, destacando la necesidad de abordajes multidimensionales en las políticas públicas para combatir eficazmente la inseguridad alimentaria y nutricional.

El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) es particularmente útil para analizar de qué manera variables como la educación influyen

directamente en los ingresos y el empleo formal, y a su vez, impactan de modo indirecto en la seguridad alimentaria (SA) a través de estas²⁶. Los resultados del SEM, para 2019, confirman las hipótesis anticipadas, demostrando que todas las variables independientes contribuyen positivamente, ya sea de manera directa o indirecta, a aumentar la probabilidad de alcanzar la SA en

26. Se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para estimar los efectos directos e indirectos de estas variables.



los hogares.

Los análisis detallados revelan que un incremento del 1% en el ingreso per cápita del hogar eleva la probabilidad de SA en 1,05%. Asimismo, el acceso al servicio de acueducto mejora la probabilidad de SA en 0,75%. En cuanto a la tenencia de activos, se observa una correlación positiva con la SA: la posesión de un activo incrementa la probabilidad de SA en 1,09%; dos activos, en 3,03%; tres activos, en 3,07%; cuatro activos, en 6,28%, y cinco activos, en 6,46%. Todos estos efectos sobre la SA resultaron estadísticamente significativos al 99%.

En relación con los ingresos, se constató que cada año adicional de educación promedio en el hogar incrementa el ingreso

per cápita en 6,83%, mientras que un aumento en la tasa de formalidad laboral eleva este ingreso en 71,1%, ambos con significancia estadística al 99% (Figura 11).

La probabilidad de acceso al servicio de acueducto también se ve influenciada positivamente por el ingreso y la tenencia de activos. Un incremento marginal en el ingreso per cápita mejora esta probabilidad en 1,08%, y la posesión de 1 a 5 activos incrementa la probabilidad de acceso al acueducto en un rango de 2,71% a 11,5%, dependiendo de la cantidad de activos. Estos efectos son estadísticamente significativos al 99%.

En cuanto a los activos, su nivel depende del ingreso per cápita y de la tasa de formalidad laboral

En relación con los ingresos, se constató que cada año adicional de educación promedio en el hogar incrementa el ingreso per cápita en

6,83%

del hogar. Un incremento del 1% en el ingreso per cápita aumenta el nivel de activos en 3,98%, con una significancia del 99%. Sin embargo, un incremento en la tasa de formalidad se asocia con una disminución del 5,99% en el

nivel de activos. Un resultado significativo al 90%.

Por otro lado, los efectos indirectos revelan que, además de sus impactos directos en la SA, algunas variables como los activos influyen indirectamente a través del acceso al acueducto. Por ejemplo, un incremento en la unidad de activos aumenta indirectamente la probabilidad de SA en 0,24%. De manera similar, el ingreso per cápita tiene efectos indirectos a través del acueducto y los activos, con un efecto indirecto total de un aumento del 1% en el ingreso per cápita, incrementando la probabilidad de SA en 31,1%.

Las variables como la tasa de formalidad y la educación, aunque no impactan directamente en la SA, ejercen efectos indirectos a través del ingreso y los activos. Un aumento marginal en la tasa de formalidad eleva la probabilidad de SA en 18,15%, mientras que un año adicional de educación incrementa esta probabilidad en 2,5%.

Los efectos totales, combinando impactos directos e indirectos, muestran que el ingreso es un factor determinante en la SA, incrementando la probabilidad en 32,19% (1,05% de efecto directo y 31,1% de efecto indirecto). La educación y la tasa de formalidad, aunque no tienen efectos directos, son significativos para la SA, debido a su influencia indirecta. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar múltiples factores, como el ingreso, la educación y el acceso a servicios básicos, como el acueducto, para mejorar la seguridad alimentaria en los hogares. Los resultados indican que, como era de esperarse, la SA es un fenómeno multidimensional que, además, depende de otros factores que están fuera del alcance del hogar.

En síntesis, el fenómeno de la inseguridad alimentaria no se manifiesta de manera aislada, sino que está entrelazado con diversos factores como la pobreza, especialmente la pobreza extrema, la discriminación tanto social como laboral, el aislamiento geográfico, los conflictos

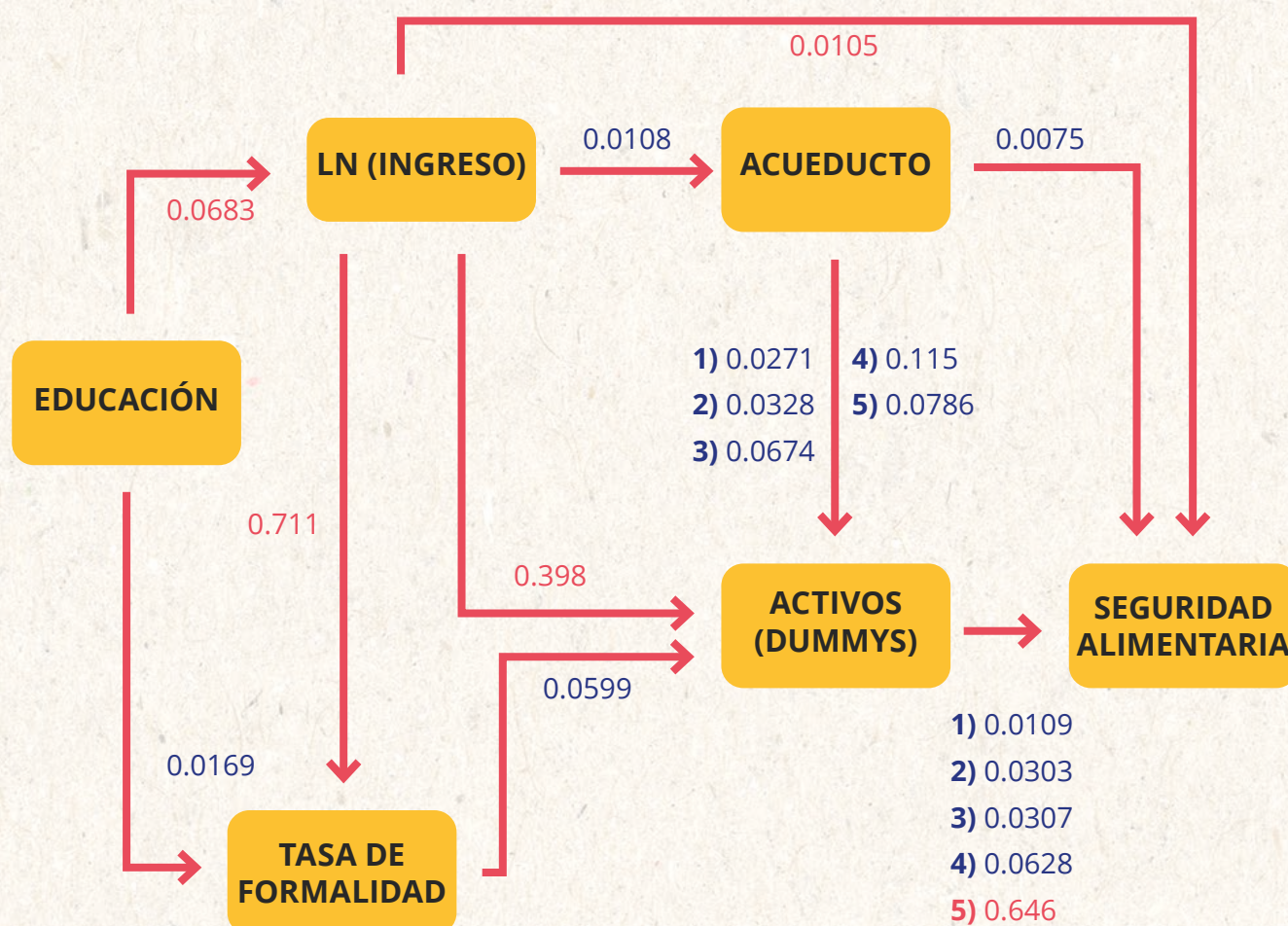


La educación y la tasa de formalidad, aunque no tienen efectos directos, son significativos para la seguridad alimentaria, debido a su influencia indirecta.

armados, la inseguridad y las crisis económicas, incluidas las espirales inflacionarias. De estos, la pobreza se destaca como el principal obstáculo para el acceso a los alimentos. Por lo tanto, una evaluación integral de la SAN debe incluir un análisis detallado de la pobreza, así como de otros factores relevantes. Este enfoque implica examinar el funcionamiento del mercado laboral y la economía en su conjunto, donde aspectos como el desempleo elevado, el subempleo, la inestabilidad laboral, la alta informalidad y la inactividad laboral son indicativos de bajos ingresos y falta de estabilidad financiera.

Según el modelo, además de la pobreza relacionada con la insuficiencia de ingresos laborales estables, la SAN también se ve afectada por la discriminación laboral y social, especialmente en grupos específicos como los indígenas y afrodescendientes, y por la discriminación de género. En este sentido, ser mujer puede influir negativamente en la participación laboral y los ingresos, debido a la discriminación de género en el mercado laboral (p. ej.: salarios inferiores a los de los hombres) y a los roles tradicionales que confinan a las mujeres a la economía del cuidado no remunerada, especialmente en hogares de bajos ingresos.

Figura 11. Estimación SEM sobre la inseguridad alimentaria



Fuente: Elaboración propia.

Los hallazgos muestran que características como el género, la etnia y la ubicación geográfica del jefe de hogar influyen en la probabilidad de alcanzar la SAN. Por ejemplo, ser mujer jefe de hogar reduce la probabilidad de alcanzar la SAN en 0,3%, aunque este resultado no alcanza la significancia estadística del 90%. Los hogares liderados por afrodescendientes tienen 0,9% menos de probabilidad de alcanzar la SAN, y aquellos integrados por indígenas, 1,1% menos, ambos con significancia estadística al 99%. Los

hogares de otras etnias ven su probabilidad reducida en 0,1%, aunque este resultado no es estadísticamente significativo al 90%.

La condición de género, etnia y ubicación geográfica del jefe de hogar afecta diversas variables económicas. Las mujeres jefas de hogar experimentan una reducción del 8,62% en el ingreso per cápita, significativa al 99%. Los hogares afrodescendientes, indígenas y de otras etnias no muestran diferencias significativas en ingresos. La ubicación impacta en los ingresos;

por ejemplo, estar en la zona Pacífica reduce el ingreso en 31%; en Orinoquía-Amazonía, en 22%, y en el Caribe, en 21%.

Respecto al acueducto, los hogares con mujeres jefas tienen 1,4% más de probabilidad de acceso; los afrodescendientes tienen 5,91% menos de probabilidad; los indígenas, 1,69% menos, y otras etnias, 12,3% menos, todos significativos al 99%.

En cuanto a los activos, ser mujer jefa de hogar representa 13,8% menos en el nivel de activos, siendo significativo al 99%. Los hogares afrodescendientes tienen 17,1% menos en activos, también significativo al 99%.

En educación, los hogares con mujeres jefas tienen 0,248 años menos de educación, en comparación con aquellos liderados por hombres. Las regiones fuera de Bogotá generalmente tienen niveles de educación más bajos.

Por último, la tasa de formalidad es ligeramente mayor (0,006 unidades) en hogares con mujeres jefas, significativa al 95%. La pertenencia étnica y la ubicación geográfica no muestran impactos significativos en la tasa de formalidad.

En conclusión, los resultados obtenidos a través del modelo de ecuaciones estructurales (SEM) subrayan la importancia de implementar políticas públicas multifacéticas para mejorar la SAN en los hogares colombianos. A la luz de estos hallazgos, se resalta la relevancia de la educación como un factor fundamental que facilita el acceso al empleo formal y la realización de trabajos productivos, lo cual, a su vez, contribuye a la generación de ingresos. Por lo tanto, la inversión en políticas educativas y el mejoramiento de su calidad se presenta como una prioridad indiscutible.

Además, se observa el impacto positivo de la formalidad laboral en la obtención de ingresos y en el acceso a activos, entre otros beneficios no disponibles en la informalidad, lo que lleva a un

aumento en la SAN en los hogares. En este sentido, las políticas enfocadas en fomentar el empleo juvenil y su inserción en el ámbito laboral formal constituyen una estrategia prometedora. Estas no solo eliminan barreras que tradicionalmente han limitado el acceso de los jóvenes a empleos de calidad, sino que también potencian su capacidad de mejorar su SAN tanto en el presente como en el futuro, facilitando su reincorporación al sector formal en caso necesario.

En cuanto a los ingresos, se destaca la influencia positiva y significativa de los programas de asistencia estatal y transferencias condicionadas en la SAN. Este apoyo financiero directo desempeña un papel crucial en la mejora de las condiciones de vida de los hogares más vulnerables.





Adicionalmente, se debe continuar y fortalecer la política de acceso a servicios de acueducto y saneamiento en el sector rural y los pequeños municipios, dada su relevancia y el impacto positivo comprobado en la SAN de los hogares. La mejora en la infraestructura de agua y saneamiento es esencial para garantizar una vida digna y saludable para todas las familias.

En ese orden de ideas, es imperativo profundizar en políticas con enfoques diferenciados, especialmente en lo que respecta al género. La promoción de la independencia y autonomía económica de las mujeres es fundamental para superar las desigualdades estructurales que enfrentan. Asimismo, es crucial prestar especial atención a las comunidades indígenas y afrodescendientes, las cuales presentan niveles alarmantes de inseguridad alimentaria y pobreza, para asegurar que las intervenciones públicas sean inclusivas y efectivas en todos los sectores de la sociedad.

Consecuencias de la inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria y nutricional, caracterizada por el acceso limitado a alimentos suficientes y nutritivos, tiene profundas implicaciones que van más allá de la mera insuficiencia alimentaria. Esta situación compromete severamente los derechos humanos, afectando de manera desproporcionada el derecho a la alimentación adecuada, especialmente entre los niños, y se entrelaza con una serie de factores como la pobreza extrema, la discriminación social y laboral, el aislamiento geográfico, los conflictos armados, la inseguridad y las crisis económicas (como las espirales inflacionarias).

Como se mencionó, desde la perspectiva individual, el hambre y la desnutrición tienen efectos devastadores en la salud, que varían según el tipo y duración del deterioro nutricional, así como la etapa del ciclo vital afectada (intrauterina, neonatal o preescolar). Por ejemplo, la desnutrición

crónica en los primeros años de vida tiene consecuencias irreversibles en el desarrollo físico, neurológico y cognitivo de los niños, limitando su potencial de aprendizaje y su desempeño productivo futuro.

En el ámbito económico, el hambre y la desnutrición disminuyen la capacidad laboral de las personas, afectando negativamente la productividad y el crecimiento económico. Esto, a su vez, impacta la competitividad de la economía y compromete el bienestar económico general de la sociedad. La inseguridad alimentaria genera costos adicionales significativos en el sistema de salud, para tratar enfermedades crónicas derivadas de la malnutrición, y en el sistema educativo, para abordar los problemas de aprendizaje que

se manifiestan en repitencias y deserción escolar.

Desde una perspectiva social, la inseguridad alimentaria se asocia estrechamente con la pobreza y sus múltiples consecuencias, como las trampas de pobreza, los efectos negativos de vecindario, la desintegración familiar, el trabajo infantil y juvenil, y la limitación de la movilidad y la exclusión social. Los problemas alimentarios en los adultos se traducen en un desempeño laboral deficiente, limitando su capacidad de generar ingresos y su interacción social, lo que contribuye a la desigualdad social y económica y a la inseguridad personal.

En cuanto al aspecto político y de gobernabilidad, la inseguridad alimentaria persistente

y aguda puede exacerbar los problemas de orden público e inestabilidad social, retroalimentando los desafíos asociados a la inseguridad alimentaria y nutricional. Ante este panorama, se hace evidente la necesidad de abordar la inseguridad alimentaria desde un enfoque integral que considere sus múltiples dimensiones y causas subyacentes, a fin de implementar políticas públicas que promuevan la equidad y el acceso universal a alimentos suficientes y nutritivos, garantizando así el derecho fundamental a la alimentación y contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad.





4.4 Sistemas agroalimentarios: retos de gobernanza²⁷

Los sistemas agroalimentarios, que incluyen todas las etapas desde la producción hasta el consumo de alimentos, están estrechamente relacionados con el hambre y la inseguridad alimentaria. Estos sistemas influyen en la disponibilidad, el acceso y la utilización de los alimentos a través de factores como la producción agrícola, las estructuras de mercado, el poder adquisitivo, la calidad de los alimentos y los conocimientos nutricionales. Además, la sostenibilidad de estos sistemas, las políticas gubernamentales y la inversión en innovación también desempeñan un papel crucial en la seguridad alimentaria. Para abordar el hambre y la inseguridad alimentaria, es necesario un enfoque integral que considere todos los aspectos de los sistemas agroalimentarios y promueva su sostenibilidad, equidad y eficiencia.

En la búsqueda de definir los sistemas agroalimentarios, el Grupo Científico de la Cumbre de Sistemas Agroalimentarios de 2021 sugiere que una definición más precisa debe incorporar las relaciones funcionales en los sistemas y ser normativa en relación con objetivos básicos, como los ODS. Un sistema agroalimentario incluye recursos interrelacionados, insumos, producción, transporte, industrias de procesamiento y fabricación, venta al por menor y consumo de alimentos, así como sus impactos en el medio ambiente, la salud y la sociedad (Braun *et al.*, 2023). Además, el sistema agroalimentario está íntimamente relacionado con los valores, culturas y vínculos de las personas.

En ese sentido, un sistema agroalimentario sostenible es aquel que "garantiza seguridad alimentaria y nutrición para todos de tal forma

“

Para abordar el hambre y la inseguridad alimentaria, es necesario un enfoque integral que considere todos los aspectos de los sistemas agroalimentarios.

que las bases económicas, sociales y ambientales para generar seguridad alimentaria y nutrición para las generaciones futuras no se vean comprometidas" (FAO, 2018). Esto implica que la producción y comercialización de alimentos deben ser rentables (sostenibilidad económica), crear beneficios para la sociedad (sostenibilidad social), y que los sistemas agroalimentarios tengan un impacto positivo o neutro en los entornos naturales (sostenible ambientalmente) (FAO, 2018).

27. Esta sección se elaboró en colaboración con la oficina de la Cepal en Colombia (Penagos y Quesada, 2024).

La gobernanza de estos sistemas es fundamental para su transformación hacia la sostenibilidad, entendida como el conjunto de reglas y acuerdos que facilitan la gestión adecuada de los intereses de los actores de cada eslabón para lograr los resultados esperados, preservando el enfoque sistémico con capacidades de coordinación y transformación para mayor adaptabilidad e inclusión.

Desafíos de los sistemas agroalimentarios

Desde la discusión internacional, se pueden destacar cinco puntos críticos que enfrentan los sistemas agroalimentarios en su transición hacia la sostenibilidad, la inclusión y la seguridad alimentaria (Ocampo *et al.*, 2022):

- La producción agrícola se encuentra concentrada en algunas regiones del mundo, debido a diferencias en la producción, acceso a tecnología e inversión en investigación y desarrollo.
- El cambio climático tendrá impactos diferenciados en las regiones y comprometerá la seguridad alimentaria mundial, debido a la baja capacidad de adaptación de los sistemas agroalimentarios.
- La distribución de alimentos y la configuración de estos sistemas acentúan la desigualdad en el derecho a la alimentación adecuada.
- La cantidad y la calidad de los alimentos está desigualmente distribuida.
- Los sistemas agroalimentarios presentan limitaciones tanto para evitar como para enfrentar las crisis.





Gobernanza de sistemas agroalimentarios en Colombia

En el caso colombiano, la gobernanza de los sistemas agroalimentarios se encuentra fragmentada, sin una concepción sistémica en su abordaje, donde cada componente opera bajo instituciones y resultados sectoriales sin un propósito común hacia sistemas sostenibles. Esto lleva a poca correlación entre la formulación de políticas del sistema agroalimentario en sectores como agua, tierra y alimentos (Buriticá *et al.*, 2023). Es preciso considerar la heterogeneidad de los sistemas agroalimentarios en Colombia y la necesidad de desconcentrar su gestión territorial, coherente

con dinámicas territoriales. Por ejemplo, la inseguridad alimentaria en departamentos como La Guajira y Sucre se encuentra entre el 59,7% y el 47,9%, mientras que en otros como Caldas y San Andrés es del 14,6% y el 17,2% (DANE, 2023), con canastas poco diversificadas y bajo aprovechamiento de la producción local. La institucionalidad actual, como la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria, creada en 2009, no responde a los desafíos de gobernanza, al tener un enfoque intrasectorial recurrente y una representación estrictamente nacional (DNP y G-exponencial, 2015), sin abor-

dar el enfoque sistémico que relacione la gestión con aspectos clave como distribución de alimentos y transformación a sistemas productivos sostenibles y resilientes.

En conclusión, es necesario transformar los sistemas agroalimentarios hacia la sostenibilidad, diversificación, descentralización e inclusión, considerando las condiciones internas y externas que los impactan, a través de un enfoque de gobernanza sistémico, coordinado y participativo. Estos temas se retomarán en el quinto capítulo.

4.5 Retos en transparencia y lucha contra la corrupción

Debido a su naturaleza intrínsecamente encubierta, la corrupción representa un desafío significativo para su observación y análisis mediante datos concretos. No obstante, está ampliamente reconocido que la corrupción agrava las condiciones de pobreza y hambre, principalmente por su impacto en la ampliación de la brecha de desigualdad de ingresos, así como por su influencia directa en la disminución del crecimiento económico, la distribución inequitativa de los recursos y la merma en la efectividad de los programas destinados a la asistencia social, los cuales pueden ser objeto de clientelismo y favores políticos.

La corrupción, definida habitualmente como el uso del cargo público para beneficio privado, se presenta como un fenómeno global con ramificaciones profundas y multifacéticas en las esferas socioeconómicas de las sociedades. Según el informe del World Bank (2017), la corrupción es una práctica que puede, en el corto plazo, "lubricar las ruedas de la economía", y en el largo plazo tiene un impacto negativo significativo en el crecimiento, desviando recursos de usos más productivos y afectando la equidad al beneficiar desproporcionadamente a aquellos en

el poder. Esta dinámica socava la legitimidad de las instituciones, al alterar la percepción pública sobre la justicia del proceso de toma de decisiones y asignación de recursos que provienen de los impuestos que paga la ciudadanía. Por esta razón, los impuestos pueden perder legitimidad, e incluso poder, para una justa redistribución de los ingresos.

En este sentido, Gupta *et al.* (1998) abordan la compleja interrelación entre la corrupción y la desigualdad de ingresos, proporcionando evidencia contundente de cómo la primera agrava la segunda. A través de un análisis detallado, los autores demuestran que la corrupción favorece desproporcionadamente a las élites políticas y económicas, lo que resulta en una distribución de recursos menos equitativa y, por ende, en un incremento en la desigualdad de ingresos.

Este hallazgo es crucial porque pone de manifiesto cómo prácticas corruptas pueden socavar los fundamentos de una sociedad justa y equitativa. Al canalizar recursos hacia un pequeño grupo de individuos o redes poderosas, la corrupción perpetúa, pero también profundiza las brechas existentes entre diferentes estratos socioeconómicos.



La corrupción es una práctica que puede, en el corto plazo, lubricar las ruedas de la economía, y en el largo plazo tiene un impacto negativo significativo en el crecimiento, desviando recursos de usos más productivos.





Este proceso no solo es moralmente cuestionable, también tiene implicaciones prácticas significativas, ya que la desigualdad exacerbada puede llevar a un malestar social, a la disminución de la cohesión social y, en última instancia, a un entorno menos estable para el desarrollo económico y social. Un ejemplo de esto son los estallidos sociales en América Latina después de la pandemia.

El trabajo pionero de Gupta *et al.* (1998) subraya la importancia de abordar la corrupción como un problema legal o moral, y como un obstáculo significativo para lograr una distribución más justa de la riqueza y, por consiguiente, para reducir la desigualdad de ingresos. Sus hallazgos respaldan la necesidad de **políticas y reformas enfocadas en mejorar la transparencia, fortalecer el estado de derecho y fomentar instituciones más inclusivas que puedan resistir la influencia corrupta de las élites poderosas.**

Por su parte, el estudio realizado por Husted (1999) proporciona un análisis detallado sobre el impacto negativo de la corrupción en el crecimiento económico, destacando cómo este fenómeno erosiona los fundamentos del desarrollo económico al desalentar la inversión y comprometer la eficiencia económica. Uno de

los hallazgos clave del estudio es que la corrupción actúa como una barrera para la inversión, tanto local como extranjera. Los inversores, al enfrentarse a un entorno corrupto, suelen percibir un mayor riesgo y una menor previsibilidad de la rentabilidad de sus inversiones, lo que lleva a una reducción en la disposición a invertir. Esta disminución de la inversión es crítica porque limita la capacidad de un país para expandir su infraestructura, innovar y desarrollar nuevos sectores, elementos esenciales para el crecimiento sostenido, que es el motor de la reducción de la pobreza en el caso colombiano.

Además, Husted señala que la corrupción reduce la eficiencia económica al distorsionar la asignación de recursos. En lugar de que los recursos se destinen a los proyectos más productivos o necesarios desde una perspectiva económica, se canalizan hacia aquellos que ofrecen las mayores recompensas ilícitas. Esto resulta en una asignación ineficiente de recursos, que no solo reduce la productividad general de la economía, sino que también perjudica la competitividad internacional del país. Ambas cosas reducen las oportunidades de empleo para todos los segmentos de la población y las posibilidades de reducir sostenidamente los niveles de pobreza y aumentar la capacidad de un

país para obtener la seguridad alimentaria.

El impacto combinado de la disminución de la inversión y la eficiencia económica debilitada por la corrupción conduce inevitablemente a un crecimiento económico más lento. Como se ha mencionado, este crecimiento reducido tiene efectos directos en la capacidad de un país para mejorar el bienestar de su población, contribuyendo así a la perpetuación y, en algunos casos, al aumento de la pobreza. El estudio de Husted subraya la importancia de combatir la corrupción no solo desde una perspectiva moral o ética, sino también como una estrategia económica esencial para fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible.

De otro lado, Anik *et al.* (2013) se centran en estudios de caso que ilustran de manera detallada los mecanismos mediante los cuales la corrupción interfiere en la eficacia de los programas de ayuda social. Uno de sus hallazgos más significativos es que la corrupción facilita la desviación de fondos, lo que resulta en una reducción significativa de los recursos disponibles para la implementación efectiva de

estos programas. Esta desviación disminuye la cantidad de ayuda disponible, pero también afecta la calidad de los servicios prestados, comprometiendo así el objetivo principal de estos programas, que es aliviar la pobreza y reducir la inseguridad alimentaria.

Además, el estudio destaca cómo la corrupción en los programas de asistencia social puede erosionar la confianza en las instituciones públicas. Cuando los ciudadanos perciben que los recursos destinados a la asistencia social se manejan de manera inapropiada o injusta, disminuye su confianza en la capacidad del Gobierno para proporcionar servicios básicos, lo que puede llevar a una menor participación ciudadana y a una disminución en el apoyo a futuras iniciativas de ayuda.

Anik *et al.* señalan también las consecuencias directas de la corrupción en las poblaciones

destinatarias de estos programas. La desviación de fondos de la ayuda social (p. ej.: el Programa de Alimentación Escolar en Colombia) puede exacerbar las condiciones de hambre, al limitar el acceso a alimentos y servicios básicos esenciales para las comunidades más necesitadas. Esto puede tener un impacto devastador en la nutrición, la salud y el bienestar general de estas poblaciones, perpetuando ciclos de pobreza y vulnerabilidad.

En esta misma línea, un trabajo reciente de Akena (2023) investiga la corrupción en el uso de los fondos públicos destinados a abordar los efectos adversos de la pandemia de COVID-19 en Uganda, como la pobreza y el hambre, y destaca el impacto en los sistemas socioeconómicos.

Estos hallazgos subrayan la **necesidad crítica de transparencia, rendición de cuentas y**



mecanismos de supervisión eficaces en la implementación de programas de asistencia social, para asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

A lo largo de la historia, los países de la OCDE han encontrado maneras de luchar contra la corrupción, gracias a su desarrollo y a la creación de instituciones sólidas, algo que muchos otros países han intentado imitar, pero sin conseguir los mismos resultados. Las estrategias contra la corrupción suelen creer que se puede reducir simplemente mejorando cómo se aplican las leyes, cambiando lo que la gente espera ganar con la corrupción y haciendo los procesos más sencillos para dejar menos huecos por donde se pueda colar. Sin embargo, este enfoque no ha sido muy efectivo en lugares donde la estructura de poder social no apoya el seguir las normas al pie de la letra.

El informe del World Bank (2017) indica que la corrupción va más allá de actos aislados; es más sobre redes enteras de personas que se conjugan entre lo público y lo privado. Sugiere que cualquier cambio en las reglas o en las estrategias contra la corrupción realmente funcionará solo si va de la mano con los intereses de los grupos poderosos del país y si puede generar un cambio más grande en lo que la sociedad espera como normal. Así, la corrupción no se ve como algo fuera de lo común que hay que eliminar, sino más bien como algo que siempre ha estado ahí en la forma en que se gobierna, con algunos países operando bajo reglas basadas en quiénes o qué ofrecen, mientras que otros las aplican de manera más justa y sin favoritismos.

El progreso económico es clave para disminuir la corrupción porque redistribuye el poder y cambia las reglas del juego en la política, pero no lo explica todo. Que existan tantas diferencias

en cómo los países manejan la corrupción, incluso entre aquellos con niveles similares de desarrollo, muestra que es posible hacer reformas. Por lo tanto, las estrategias efectivas contra la corrupción deben enfocarse en los puntos críticos donde es posible actuar y donde pueden tener un gran impacto, ya sea alineándose con los intereses de los grupos importantes o formando nuevas alianzas para obtener cambios.

Esta forma de ver las cosas destaca lo complicado que es combatir la corrupción y la importancia de tener estrategias que se adapten a cada situación, considerando cómo es el poder y las normas sociales ya existentes, más allá de solo hacer cambios oficiales en las instituciones. **La tecnología digital y la colaboración entre actores internacionales y locales son vistas como oportunidades para avanzar en este desafío que nos afecta a todos a escala mundial.**



4.6 Retos de financiación

Recursos para alcanzar las metas²⁸

El financiamiento del Gobierno de Colombia para el ODS 2 Hambre Cero, se sitúa en la iniciativa del Marco Integrado de Financiamiento para los ODS (INFF, por sus siglas en inglés), apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde su implementación en 2020, el INFF ha tenido como principales objetivos el mapeo de recursos dirigidos a potenciar el desarrollo sostenible en Colombia y la generación de recomendaciones para la priorización del gasto y la movilización de recursos adicionales. A través de sus metodologías, el INFF ha logrado identificar los recursos que el Gobierno nacional ha destinado para financiar el avance del ODS 2 y generar recomendaciones de política presupuestal relevantes.

En cuanto a los recursos alineados del Presupuesto General de la Nación con el ODS 2, se ha identificado que, en promedio, el Gobierno nacional ha destinado recursos equivalentes al 1,25% del presupuesto total a programas relacionados con la reducción del hambre, lo que equivale actualmente a aproximadamente \$4 billones anuales. Este análisis destaca que las metas 2.1 (Poner fin al hambre) y 2.2 (Eliminar la malnutrición) son las que reciben más recursos, mientras que otras metas relacionadas con la productividad agrícola y el acceso a mercados de alimentos reciben menos financiación.

Entre los programas y estrategias más destacados, financiados por el Gobierno para contribuir al ODS 2, se encuentran la Implementación de Estrategias para la Inclusión Financiera en el Sector Agropecuario, la Contribución con acciones



de promoción y prevención en el componente de alimentación y nutrición, y los Programas de Alimentación Escolar (PAE). Además, se enfoca en el Fortalecimiento de la Competitividad de las Cadenas Productivas Agropecuarias a escala nacional, buscando mejorar la producción, comercialización y políticas relacionadas que benefician a comunidades rurales y la agricultura familiar.

El análisis prospectivo de indicadores seleccionados del ODS 2, realizado mediante la metodología de Inferencia de Prioridades de Política (IPP) del INFF, muestra que, aunque los indicadores de desnutrición crónica y mortalidad infantil por desnutrición avanzan a un ritmo adecuado para alcanzar sus metas para 2030, el indicador de lactancia materna exclusiva requiere de un fortalecimiento en el financiamiento de los programas relacionados para acelerar su progreso.

En conclusión, aunque Colombia ha hecho esfuerzos significativos para financiar el avance hacia el Hambre Cero, aún existen áreas que requieren atención adicional y recursos financieros para asegurar el cumplimiento oportuno de todas las metas del ODS 2. El fortalecimiento del financiamiento en programas específicos, especialmente aquellos relacionados con la lactancia materna exclusiva y la producción agrícola sostenible, es crucial para acelerar el progreso y garantizar la SAN de la población colombiana.

28. Esta sección se basó en los insumos del PNUD (2024).



4.7 Capacidad de las entidades territoriales para enfrentar los retos

En la gran mayoría de las entidades territoriales (ET), los recursos provienen principalmente del Gobierno central a través del Sistema General de Participaciones (SGP) o el Sistema General de Regalías (SGR). El SGP, en particular, está específicamente destinado a financiar el pago de maestros, el régimen subsidiado de salud y los subsidios para agua potable y saneamiento básico (APSB), con una pequeña partida conocida como propósito general. Por otro lado, solo las grandes ciudades tienen la capacidad de recaudar impuestos significativos como el de Industria y Comercio (ICA), mientras que el impuesto predial está tan desactualizado que no genera un recaudo significativo. En este contexto, las desigualdades en los ingresos tributarios municipales per cápita son enormes, dejando a la gran mayoría de los municipios sin los recursos necesarios para atender sus necesidades más apremiantes.

En un estudio de la Misión de Descentralización del DNP, Núñez (2023) revela profundas desigualdades regionales en Colombia, destacando una notable disparidad en el PIB per cápita entre departamentos y

municipios. Por ejemplo, el PIB per cápita de Vichada es 5,5 veces menor que el de Casanare, el departamento más rico. A escala municipal, Puerto Gaitán registra un PIB per cápita que supera en 107 veces al de El Litoral del San Juan, el municipio más pobre. La brecha económica es también evidente en la distribución del ingreso, con el municipio más rico alcanzando un ingreso per cápita de \$184.865.872, comparado con \$1.720.976 para el más pobre.

Este análisis destaca las grandes disparidades entre los cincuenta municipios más ricos y los más pobres, siendo los primeros, 15 veces más ricos. Además, el índice de Gini a escala municipal es de 0,36, lo que refleja una mayor desigualdad comparado con el 0,25 departamental. Estas cifras subrayan la necesidad urgente de políticas de compensación y equidad regional, para abordar estas profundas brechas socioeconómicas y promover un desarrollo equitativo.

Núñez utiliza el coeficiente de Gini para evaluar la desigualdad en la distribución de ingresos entre departamentos y municipios, con un enfoque en sus ingresos propios y transferencias



fiscales. Los ingresos propios per cápita muestran un Gini de 0,2247 para departamentos y 0,4337 para municipios, lo cual indica una desigualdad más acentuada a escala municipal. Esto se explica por bases tributarias limitadas, ineficiencias catastrales y diferencias abismales en el recaudo entre zonas urbanas y rurales.

A pesar de que el SGP y el SGR están diseñados para mitigar estas disparidades, el estudio revela que el SGR, en particular, puede estar exacerbando las desigualdades. Mientras el SGP total disminuye el Gini a 0,2077 para municipios, el SGR muestra los mayores niveles de desigualdad con un Gini de 0,7887 para departamentos y 0,8583 para municipios. Estos hallazgos resaltan la necesidad de reformas para mejorar la equidad fiscal y la eficacia de las transferencias fiscales en Colombia, con el fin de que las entidades territoriales puedan enfrentar directamente sus problemas de seguridad alimentaria, hambre y, en general, las necesidades más apremiantes.

Ante este panorama de desigualdades y falta de autonomía local para resolver los problemas inmediatos, Núñez propone un fondo de convergencia inspirado en modelos de países de la OCDE. Basándose en datos de 2019, el análisis revela marcadas disparidades fiscales, con ingresos propios per cápita en departamentos de \$270.664, variando significativamente entre La Guajira (\$107.065) y San Andrés (\$2.762.448). La simulación sugiere que para nivelar la capacidad fiscal a escala departamental se necesitarían aproximadamente \$1,76 billones de 2019, lo que equivaldría a \$2,35 billones en 2023, representando 0,17% del PIB. Esto mejoraría la equidad fiscal, reduciendo el índice de Gini de 0,2247 a 0,1040.

Para los municipios, donde el ingreso propio per cápita promedio es de \$639.349, se requerirían cerca de \$10,5 billones de 2019, o \$14 billones en 2023, para igualar el ingreso propio promedio a escala municipal, representando casi el 1% del PIB. Esta medida reduciría

el índice de Gini de 0,4331 a 0,1886, aumentando el ingreso per cápita de los municipios a \$852.383. Antioquia, Córdoba y Nariño, entre los departamentos más empobrecidos (en términos de población), recibirían las mayores asignaciones, destacando la necesidad de implementar ecualizaciones que promuevan el desarrollo y la cohesión interna, similar a los estándares de la OCDE.

Según Núñez, estos fondos de compensación o convergencia regional, que representarían aproximadamente el 1,2% del PIB, generarían una notable equidad entre las entidades territoriales, dotándolas de la capacidad necesaria para abordar los problemas de hambre y seguridad alimentaria que actualmente no pueden gestionar eficazmente. Por supuesto que su financiación depende del espacio fiscal, pero parte del rápido crecimiento del SGP que se observa en la actualidad debería hacer una recomposición de las bolsas e incluir un fondo de este tipo.



4.8 Participación social y comunitaria

La participación social y comunitaria juega un papel crucial en los programas de lucha contra el hambre, al alinear las intervenciones con las necesidades y prioridades específicas de la comunidad, incrementando su efectividad y relevancia. Echeverri-Gent (1992) destaca la importancia de la participación social para responder a las necesidades de los más necesitados, lo que exige un proceso político representativo. Además, la evidencia sugiere que la participación en programas como el SNAP en Estados Unidos mejora la seguridad alimentaria de los hogares, facilitando un acceso más amplio y equitativo a los beneficios (Mabli y Ohls, 2015).

La participación activa en la planificación e implementación de estos programas no solo conduce al empoderamiento de la comunidad, también fortalece la capacidad local para abordar el hambre y la inseguridad alimentaria de manera sostenible. Chilton *et al.* (2009) resaltan el valor de incluir a las comunidades afectadas en la creación de políticas y programas, con el fin de mejorar la nutrición y el bienestar general.

En Colombia, el **componente Social y Comunitario** del programa Renta Ciudadana del Gobierno nacional ha demostrado ser un ejemplo valioso de cómo la participación social y ciudadana puede fortalecer la comunidad y fomentar el desarrollo propio. Este componente ha generado cambios significativos en las capacidades, oportunidades y comportamientos de los beneficiarios, reflejados en una mayor integración social y confianza en las instituciones, a fin de contribuir al fortalecimiento del capital social. Las madres titulares han utilizado estos espacios para desarrollar habilidades y acceder a oportunidades educativas y laborales, ampliando así sus redes sociales y comerciales.

Además, el componente ha fomentado la cooperación y reciprocidad, creando dinámicas asociativas y emprendimientos colectivos que fortalecen el tejido social. Las madres líderes, en particular, han experimentado mejoras en sus habilidades sociales y personales, lo que ha facilitado la formación de redes de apoyo y mejorado el bienestar comunitario.

La cooperación observada en los espacios de participación ha propiciado formas enriquecedoras de intercambio social, como el trueque y la creación de microempresas, aunque se identifica la necesidad de un mayor apoyo financiero para fortalecer estas iniciativas.

El componente **Bienestar Social y Comunitario** ha tenido también un impacto significativo en la salud de las comunidades participantes, promoviendo la participación social, la articulación institucional y la



concientización sobre la importancia de la salud y la nutrición, lo que ha contribuido a mejorar el acceso a los servicios de salud y la nutrición de los menores.

En consecuencia, **Renta Ciudadana** ejemplifica un programa de Gobierno de lucha contra la pobreza y el hambre, que promueve cambios duraderos y positivos en las comunidades vulnerables. Particularmente, el componente Social y Comunitario de este programa favorece transformaciones significativas en la realidad familiar y personal de los beneficiarios, a través del empoderamiento y la adquisición de capacidades y oportunidades.

Además de los programas de Gobierno, existen iniciativas lideradas por otros actores, dirigidas a lograr la inclusión económica y social a partir del fortalecimiento de la autonomía de las comunidades y el tejido social. Este es el caso del proyecto de Fundación Alpina (Figura 12), orientado al fortalecimiento de capacidades productivas en familias wayuu de los corregimientos de Nazareth y Siapana (municipio de Uribia)²⁹.

El proyecto está enfocado en el fortalecimiento de la autonomía y sostenibilidad de los sistemas productivos de comunidades wayuu de la zona rural extrema de la alta Guajira. Mediante la inclusión social y productiva, el proyecto tiene como objetivo fortalecer el tejido social, el liderazgo, el trabajo solidario y comunitario, para generar

29. En el anexo 3 se encuentra información adicional sobre el proyecto de fortalecimiento de capacidades productivas en familias wayuu de Fundación Alpina





entornos de integración social y económica, así como la inclusión económica y social a través del establecimiento de sistemas productivos integrales y sostenibles.

Para este propósito, se llevan a cabo actividades que contribuyen a mejorar la gobernabilidad territorial y la calidad de vida, a través del acceso al agua mediante pozos y sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de agua, huertas para la generación de ingresos y unidades productivas avícolas. Adicionalmente, se implementaron estrategias de sostenibilidad, como la creación de grupos autogestionados de ahorro y crédito que promueven el buen desarrollo de las unidades productivas.

Mediante estas iniciativas, se promueve la integración socioeconómica y el mejoramiento de condiciones de vida. Las actividades se escalanán al trabajo con las familias, sus unidades claniles y los territorios, con el propósito de fortalecer su tejido familiar y clanil, así como los liderazgos de los jóvenes y las mujeres participantes. El modelo implementado en el área productiva permite a las comunidades participantes integrarse a circuitos de comercialización locales con herramientas que garantizan su sostenibilidad cultural, ambiental y económica.

El proyecto se enmarca en las cuatro dimensiones de trabajo de la metodología Rassa de Fundación Alpina:

- **Producción sostenible:** Desarrolla el fortalecimiento e identificación de procesos productivos comerciales sostenibles que permitan la generación de ingresos y contribuyan a la oferta de productos.
- **Prácticas alimentarias saludables:** Promueve el autoabastecimiento de los alimentos inocuos y de calidad como aporte fundamental a la seguridad alimentaria y nutricional.

- **Asociatividad:** Facilita el acceso de los pequeños productores a los mercados, de modo que puedan aumentar sus ingresos y fortalecer su representatividad local y regional.
- **Enfoque de género:** Promueve acciones afirmativas que faciliten el reconocimiento y ejercicio de derechos, la posibilidad de elegir su propio proyecto de vida, la participación y la capacidad para tomar decisiones, entre otras capacidades.

“

Mediante estas iniciativas, se promueve la integración socioeconómica y el mejoramiento de condiciones de vida. Las actividades se escalanán al trabajo con las familias, sus unidades claniles y los territorios.

Figura 12. Proyecto Fortalecimiento de capacidades productivas en familias wayuu de los corregimientos de Nazareth y Siapana (municipio de Uribia)

FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS WAYUU DE LOS CORREGIMIENTOS DE NAZARETH Y SIAPANA



Objetivo:

Fortalecer agro sistemas productivos para la generación de ingresos y la autonomía alimentaria con comunidades wayuu de acogida de población migrantes y retornados en el corregimiento de Nazareth y Siapana, Alta Guajira.



Población beneficiaria:

Participaron 230 familias wayuu, conformadas por 1062 personas, con la participación del 40% de Migrantes y retornados de Venezuela y 1000 estudiantes del internado de Nazareth. En los corregimientos de: Nazareth, comunidades de Yuutou, Anuwou, Monte de Oro, Kayushpanao, Maluliru, Aiparao, Wantalu y Mochomana Guarerpa.



Actividades principales:

Las principales actividades incluyen promover sistemas productivos sostenibles, implementar sistemas de comercialización pertinentes, fortalecer prácticas alimentarias saludables y gestionar conocimiento.



Innovación:

Se destacan componentes innovadores, como el respeto a los conocimientos y la cultura local, la transferencia tecnológica y la capacitación participativa.



Desafíos:

El acceso a las comunidades y la gestión de plagas, abordados mediante diálogo con líderes locales y soluciones prácticas.



Lecciones aprendidas:

Adaptar el modelo de trabajo a las necesidades y prácticas locales, el empoderamiento de las mujeres en la economía del hogar y la preservación del ambiente.



Contribución a la inseguridad alimentaria:

La inclusión social y productiva de las familias beneficiadas, promovió procesos de desarrollo social que contribuyen a la lucha contra la pobreza, la inseguridad alimentaria y el fortalecimiento del tejido.



ODS

1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero.
3. Igualdad de género.



Aliados

- OIM.
- Cancillería.
- Embajada de Francia.



Recomendaciones:

- Aportar con soluciones, sin afectar o vulnerar las costumbres y tradiciones culturales de la comunidad intervenida.
- Dar a conocer previamente y de forma clara a toda la población o comunidad en compañía de sus líderes el objetivo del programa
- a desarrollar, el alcance, los beneficios, compromisos, deberes y derechos de las partes involucradas.
- Definir conductos regulares para la comunicación que se transmitirá a la comunidad, de igual forma para la resolución de los conflictos que puedan llegar a presentarse.



4.9 ¿Cómo enfrenta la política pública estos retos?

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en ejercicio de la Secretaría Técnica de la Comisión ODS, convocó a diversas entidades (Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento para la Prosperidad Social, Cancillería y Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para dialogar sobre cómo se están abordando actualmente los desafíos detallados en este capítulo³⁰. A continuación, se presentan las principales conclusiones de este ejercicio.

En primer lugar, el Gobierno colombiano se encuentra inmerso en una transición fundamental hacia entender la alimentación como un derecho humano, replanteando la perspectiva tradicional de seguridad alimentaria. Esto conduce a replantear la gobernanza alimentaria, dando voz y **participación a los ciudadanos como sujetos de derechos en la formulación de políticas públicas**. La visión también apunta a **transitar del asistencialismo hacia la generación de capacidades y autonomía alimentaria** en los territorios, comunidades y hogares:

“Desde el punto de vista de las transferencias monetarias, pues sí es algo que es bastante popular, pero al mismo tiempo impopular, porque siempre está la crítica de que son medidas paliativas, son medidas que realmente no ayudan o no aportan suficientemente a la superación de pobreza” (Participante en el taller).

Sin embargo, **estas transformaciones enfrentan retos multidimensionales que requieren un abordaje intersectorial**. Los determinantes de la inseguridad alimentaria abarcan factores como educación, salud, trabajo, acceso a agua y tierras, entre otros. Persisten **desafíos importantes en la descentralización y el fortalecimiento de capacidades de planeación en los entes territoriales**. Además, la corrupción, los conflictos de interés y la falta de transparencia son obstáculos a vencer.

En este escenario, emergen estrategias promisorias como el **fortalecimiento de procesos organizativos comunitarios, la agricultura campesina familiar y las prácticas agroecológicas**. Asimismo, se impulsa la **reforma agraria** y la

30. Ver anexo 2. Construcción participativa del Reporte Nacional Voluntario 2024.

redistribución de recursos productivos como la tierra. También cobra relevancia **promover mercados locales, compras públicas territorializadas y circuitos cortos de comercialización**. Implementar **políticas diferenciales adaptadas a los contextos y cosmovisiones de los pueblos** es otra apuesta clave.

No obstante, persisten importantes **retos de articulación intersectorial, como evitar duplicidades** en las acciones de las entidades en los territorios. Se requiere una mejor planeación y cronogramas coordinados de intervención entre las instituciones. El DNP desempeña un rol fundamental en rastrear y armonizar la oferta institucional hacia los territorios.

Por último, emergen perspectivas innovadoras que reconocen las dimensiones emocionales culturales en torno a los alimentos. Se vislumbra la necesidad de **transitar hacia un enfoque integral de los sistemas agroalimentarios, más allá de la producción**. Apostar por la **interseccionalidad para atender las discriminaciones y desigualdades entrecruzadas** es otra apuesta novedosa discutida con las entidades del Gobierno.

En síntesis, si bien se vislumbra una visión de cambio hacia políticas alimentarias con un enfoque de derechos, participación comunitaria, sostenibilidad, intersectorialidad y adaptación territorial, aún persisten grandes retos en materia de **articulación, planeación, transparencia y fortalecimiento de capacidades locales para hacer realidad esta transformación**.

Los mensajes principales se resumen en los siguientes puntos clave:

- *Replanteamiento de la gobernanza alimentaria:* Promover una nueva forma de gobernanza que incluya la participación activa de los ciudadanos como sujetos de derechos, enfocándose en el cambio de la seguridad alimentaria hacia el reconocimiento de la alimentación como un derecho humano.
- *Abordaje intersectorial de los determinantes de la inseguridad alimentaria:* Integrar sectores como educación, salud, acceso a recursos naturales y otros, para una comprensión y tratamiento holístico de la seguridad alimentaria y nutricional.
- *Fortalecimiento de capacidades locales y descentralización:* Mejorar las capacidades de planeación y ejecución de políticas en los entes territoriales, para abordar problemas de corrupción y falta de transparencia.
- *Promoción de la agricultura campesina y prácticas agroecológicas:* Incentivar prácticas sostenibles como la agricul-





tura familiar campesina y agroecológica, así como la reforma agraria para una distribución más equitativa de los recursos productivos.

- *Desarrollo de mercados locales y circuitos cortos de comercialización:* Fomentar el consumo de productos locales mediante mercados y compras públicas territorializadas, para fortalecer las economías locales y reducir el impacto ambiental.
- *Implementación de políticas adaptadas a las cosmovisiones locales:* Crear políticas públicas que respeten y se adapten a las particularidades culturales y sociales de las comunidades, especialmente en territorios indígenas y de afrodescendientes.
- *Mejorar la articulación y planificación interinstitucional:* El DNP tiene un rol funda-

mental para coordinar y armonizar las intervenciones de las entidades, con el fin de evitar duplicidades y optimizar recursos en los territorios.

- *Reconocimiento de las dimensiones emocionales y culturales del alimento:* Incluir en las políticas alimentarias un enfoque que reconozca las dimensiones emocionales asociadas al consumo de alimentos.
- *Promoción de la interseccionalidad para abordar desigualdades:* Incorporar un enfoque interseccional que permita entender y actuar sobre las múltiples discriminaciones y desigualdades que afectan especialmente a las mujeres rurales y comunidades étnicas.

Estos mensajes reflejan la necesidad de un cambio profundo y estructural en la forma en que se aborda la seguridad alimentaria en Colombia, con un énfasis en la inclusión, la sostenibilidad y el respeto por las diversas culturas y comunidades que componen el país, teniendo en cuenta que:

- Colombia enfrenta desafíos significativos en términos de seguridad alimentaria y nutricional, con marcadas disparidades entre regiones, grupos étnicos y sectores

socioeconómicos. La heterogeneidad territorial, el impacto del cambio climático y las desigualdades estructurales exacerbando la vulnerabilidad de ciertas poblaciones, perpetuando ciclos de pobreza y malnutrición.

- La inseguridad alimentaria tiene consecuencias profundas y duraderas a lo largo del ciclo de vida, especialmente cuando ocurre durante etapas críticas como el embarazo y la primera infancia. Estos efectos se extienden más allá de la salud individual, afectando el desarrollo socioeconómico del país en su conjunto.
- Los sistemas agroalimentarios de Colombia enfrentan desafíos multidimensionales, como las brechas en la producción, distribución y acceso a alimentos de calidad. La gobernanza fragmentada, la falta de coordinación intersectorial y las deficiencias en transparencia y rendición de cuentas limitan la capacidad del país para responder efectivamente a las crisis alimentarias.
- La participación social y comunitaria es fundamental para el éxito de las políticas y programas de lucha contra el hambre. El empoderamiento de las comunidades, especialmente

de las mujeres y los grupos étnicos, no solo mejora la relevancia y eficacia de las intervenciones, también promueve el desarrollo sostenible y equitativo.

- Colombia está transitando hacia un enfoque de política pública que reconoce la alimentación como un derecho humano y busca superar la perspectiva asistencialista tradicional. Este cambio de paradigma requiere una reestructuración de la gobernanza para los sistemas agroalimentarios, la adopción de un enfoque intersectorial para atacar las trampas de pobreza y el fortalecimiento de las capacidades locales.
- El sector privado tiene un papel crucial en la mejora de la seguridad alimentaria a través de la innovación, la colaboración multisectorial y la promoción de prácticas sostenibles. La integración de pequeños productores en las cadenas de valor y el fomento de la educación en nutrición y sostenibilidad son estrategias clave para fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios.





Decreto 0531 de 2024 ³¹

Reglamenta la implementación, seguimiento y supervisión de las Zonas de Recuperación Nutricional (ZRN) dentro de ecosistemas estratégicos para la soberanía alimentaria. Estas zonas buscan incidir en los determinantes sociales de la nutrición y contribuir a la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación. A continuación, se mencionan algunos de las principales iniciativas que se esperan alcanzar a través de esta norma:

- El decreto promueve la soberanía alimentaria mediante la creación de ecosistemas socio-ambientales que integran modos de vida, formas productivas y saberes comunitarios para la producción sostenible y ecológica de alimentos locales y tradicionales.
- A través del establecimiento de ZRN, se pretende abordar la desnutrición y malnutrición en poblaciones vulnerables, especialmente en la infancia. Se busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada y saludable, reduciendo las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la desnutrición.
- Establece un Modelo Integral de Acción Transectorial (MIAT) que optimiza la acción coordinada entre diferentes entidades gubernamentales, ONG y la sociedad civil, que asegure la colaboración armónica y la co-responsabilidad entre los diversos actores.
- Se implementarán acciones para mejorar los servicios de salud en las ZRN, con un enfoque

31. Además de este decreto, previo a la publicación de este documento, el Gobierno Nacional aprobó el Decreto 0684 de 2024 que reglamenta el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, el Programa Hambre Cero, el Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para la Superación del Hambre y la Malnutrición - SNSMSHM y el Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición ODAN. Este decreto marca un hito importante en la gobernanza inherente a la política pública de la alimentación como derecho y da un impulso renovado a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional-CISAN.

diferencial que abarca desde la promoción de la salud hasta la atención y la rehabilitación.

- Enfatiza la atención integral a la primera infancia y sus familias, promoviendo prácticas de alimentación saludables y sostenibles. Se busca prevenir la malnutrición y fomentar la recuperación nutricional a través de programas específicos de complementación alimentaria y educación nutricional.
- Impulsa la reactivación de la producción alimentaria local y el fortalecimiento de las cadenas de abastecimiento. Se promueve la producción de alimentos de tradición local y sistemas agroecológicos, apoyando la economía local y garantizando el acceso a alimentos nutritivos.
- Se desarrollan estrategias para garantizar el acceso a agua potable y saneamiento básico en las ZRN, mejorando la infraestructura y la gobernanza del agua a nivel local.
- Se establece un sistema de seguimiento y evaluación para monitorear los avances en las ZRN. Los planes de respuesta se revisan regularmente para asegurar el cumplimiento de los objetivos y realizar los ajustes necesarios.
- Fomenta la participación de las comunidades locales en la implementación y seguimiento de las ZRN, asegurando que las acciones sean culturalmente apropiadas y respondan a las necesidades específicas de cada territorio.
- El decreto refleja el compromiso del gobierno de Colombia para enfrentar la desnutrición, promover la soberanía alimentaria y mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables a través de una acción coordinada y sostenible.



5. Recomendaciones

Colombia enfrenta el desafío urgente de erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para todos sus ciudadanos. A pesar de los avances de las últimas décadas, la persistencia de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, sumadas a los impactos del cambio climático y la crisis económica, han dificultado el progreso hacia el cumplimiento del ODS 2 Hambre Cero.

En este contexto, es fundamental repensar las estrategias y enfoques tradicionales no solo para abordar el hambre y la

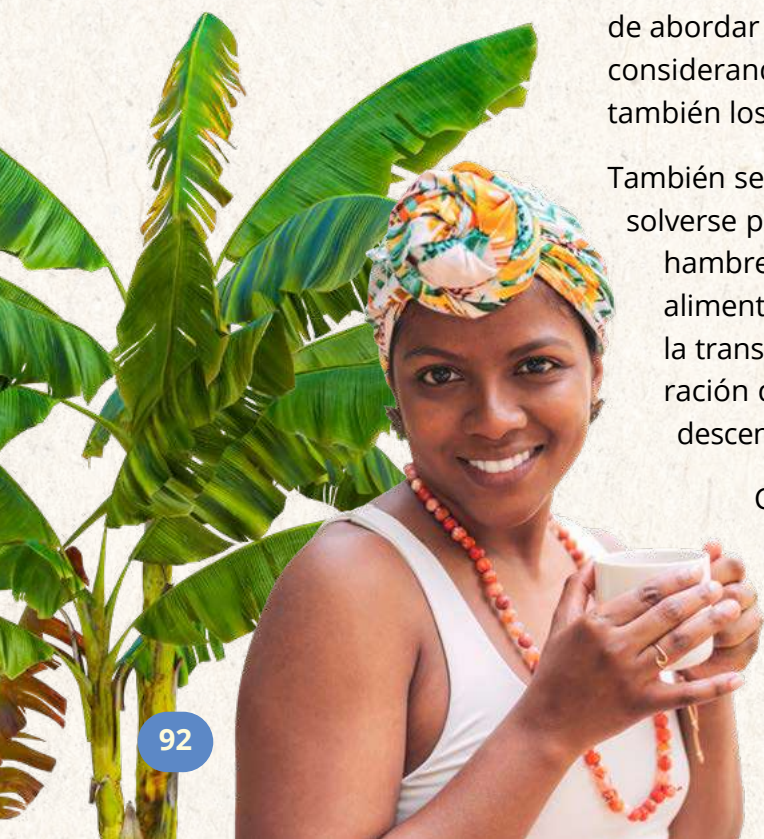
malnutrición, sino también para adoptar soluciones innovadoras, integrales y adaptadas a las realidades territoriales y culturales del país. Este capítulo presenta una serie de recomendaciones y propuestas, basadas en la experiencia y conocimiento de diversos actores, como el sector público y el privado, la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional y las comunidades locales.

En primer lugar, se destacan las buenas prácticas y lecciones aprendidas del sector privado en tres ejes fundamentales: (i) innovación y tecnología, (ii) colaboración multisectorial, y (iii) educación y sostenibilidad. Estas experiencias demuestran el potencial de las alianzas público-privadas, la adopción de tecnologías avanzadas y la promoción de hábitos saludables para transformar los sistemas agroalimentarios y mejorar la seguridad alimentaria.

A continuación, se exploran las prácticas innovadoras y emergentes en la lucha contra el hambre a escala global, como el involucramiento de los gobiernos y líderes políticos, el empoderamiento de los pequeños agricultores, la inversión en investigación y desarrollo agrícola, y la atención a los aspectos ambientales y de cambio climático. Estas estrategias enfatizan la importancia de abordar el hambre desde una perspectiva multidimensional, considerando no solo los aspectos técnicos y económicos, sino también los sociales y ambientales.

También se abordan los problemas estructurales que deben resolverse para avanzar de manera efectiva en la lucha contra el hambre, como la implementación del derecho humano a la alimentación como principio rector de las políticas públicas, la transformación de los sistemas agroalimentarios, la superación de las trampas de pobreza y la profundización de la descentralización para abordar las desigualdades regionales.

Con base en estos elementos, se presentan siete recomendaciones generales para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia: **(i)** desarrollar un marco de gobernanza integral para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación





adecuada; **(ii)** fortalecer los programas de nutrición dirigidos a mujeres embarazadas, niños menores y otros grupos vulnerables; **(iii)** promover la agricultura familiar y las prácticas agroecológicas; **(iv)** invertir en la mejora de la infraestructura rural; **(v)** establecer mecanismos de financiamiento innovadores; (vi) fomentar la investigación, la innovación y la transferencia de tecnologías en el sector agroalimentario; y (vii) promover la educación alimentaria y nutricional en todos los niveles.

Cada una de estas recomendaciones se desarrolla en detalle en la sección 5.4 *Recomendaciones generales*, donde se identifican los desafíos específicos para su implementación y se proponen acciones concretas para superarlos. Además, se presentan recomendaciones vanguardistas que exploran el potencial de tecnologías disruptivas y enfoques innovadores para transformar la lucha contra el hambre, como el uso de *blockchain* para la transparencia

alimentaria, la urbanización de la agricultura con tecnologías de cultivo vertical y la legislación para reducir el desperdicio de alimentos.

De otra parte, teniendo en cuenta que el Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (GSDR por sus siglas en inglés), lanzado en 2023, hace un llamado a la acción con el fin de acelerar el progreso y el logro de los ODS, considerando la diversidad de los objetivos y sus metas, se hace necesario contar con un enfoque integrado y coherente. Es por esto que el GSDR 2023 motiva a los países a promover las transformaciones a través de 6 puntos de entrada y 5 mecanismos/palancas. Bajo este marco, se considera relevante el llamado a la acción y la identificación de posibles transformaciones que permitan el cumplimiento de los ODS. En este sentido, teniendo en cuenta el enfoque en el ODS 2 del RNV de Colombia, se identifica una relación directa con el eje para la transformación “sistemas alimentarios y

nutrición saludable” definido en el GSDR³². En el anexo 5 se asocian de manera resumida los hallazgos, conclusiones y recomendaciones para los mecanismos/palancas de gobernanza, economía y finanzas, acción individual y colectiva, ciencia y tecnología y desarrollo de capacidades.

En conclusión, este capítulo ofrece una hoja de ruta integral y ambiciosa para avanzar hacia el logro del ODS 2 en Colombia, basada en la colaboración, la innovación y la adaptación a las realidades territoriales y culturales del país. Su implementación requerirá un compromiso sostenido y una acción coordinada de todos los sectores de la sociedad, bajo el liderazgo del Estado y con la participación activa de las comunidades. Solo así será posible construir un futuro donde todos los colombianos puedan ejercer plenamente su derecho a una alimentación adecuada, suficiente y de calidad.

32. Ver anexo 5. Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (GSDR por sus siglas en inglés) en el Reporte Nacional Voluntario (VNR por sus siglas en inglés) de Colombia.

5.1. Buenas prácticas y lecciones aprendidas del sector privado

Después de llevar a cabo un taller con actores del sector privado, incluidas las cámaras de comercio, bancos de alimentos y otras organizaciones comprometidas con la erradicación del hambre y la mejora de la seguridad alimentaria³³, se han podido consolidar algunas buenas prácticas y lecciones aprendidas en tres ejes fundamentales: **(i)** innovación y tecnología, **(ii)** colaboración multisectorial, y **(iii)** educación y sostenibilidad.



Innovación y tecnología

La adopción de tecnologías avanzadas y modelos de producción sostenible, como la acuaponía y sistemas hidropónicos, está transformando la manera en que producimos alimentos, haciéndola más eficiente y sostenible. Esta transformación es posible gracias a la inversión continua en investigación y desarrollo, que no solo mejora la calidad nutricional de los productos, sino que también desarrolla soluciones adaptadas a diferentes contextos geográficos y socioeconómicos.



Colaboración multisectorial

La complejidad de los desafíos en seguridad alimentaria y nutricional requiere una colaboración estrecha entre el sector privado, el Gobierno, las ONG y la academia. Integrar a pequeños productores y jóvenes en las cadenas de valor, mejorando su competitividad y acceso a mercados, es fundamental para fortalecer la industria agrícola local y asegurar la sostenibilidad de la producción de alimentos. Las alianzas público-privadas se convierten en un vehículo esencial para unir fuerzas, compartir conocimientos y recursos, y generar impactos más significativos en la seguridad alimentaria.



Educación y sostenibilidad

Educar a la población sobre nutrición, consumo responsable y técnicas de producción sostenible es clave para cambiar comportamientos y mejorar la salud pública. Iniciativas que promueven hábitos saludables y el uso eficiente de recursos como el agua, así como la reducción de desperdicios de alimentos, son esenciales para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles y justos. La sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria van de la mano con la promoción de una cultura de respeto por los recursos naturales y la valoración de los alimentos.

33. Ver anexo 2. Construcción participativa del Reporte Nacional Voluntario 2024.

Cada uno de estos ejes destaca la importancia de abordar la seguridad alimentaria y nutricional de manera integral, considerando tanto los aspectos técnicos y económicos, como los sociales y ambientales. La colaboración, la innovación y

la educación son fundamentales para construir sistemas agroalimentarios que alimenten a la población de hoy y garanticen la salud del planeta y el bienestar de las generaciones futuras.

Recomendaciones

- **Fomentar la innovación:** Crear incentivos y marcos legales que promuevan la adopción de tecnologías y prácticas agrícolas innovadoras y sostenibles.
- **Fortalecer la colaboración multisectorial:** Establecer plataformas y mecanismos de coordinación para facilitar el intercambio de conocimientos, recursos y buenas prácticas entre los diversos actores.
- **Invertir en educación y concienciación:** Desarrollar programas educativos y campañas de concienciación que aborden la importancia de la nutrición, la sostenibilidad y el consumo responsable.
- **Apoyar la investigación aplicada:** Incentivar la investigación que aborde los desafíos

específicos de la seguridad alimentaria en diferentes contextos y que contribuya al desarrollo de soluciones escalables y replicables.

- **Promover políticas integradas:** Alinear las políticas de seguridad alimentaria con otras áreas relevantes como el desarrollo rural, la salud pública y la protección ambiental, para abordar los desafíos de manera integral.

Lo anterior refleja el amplio espectro de enfoques que el sector privado propone, además, subraya la importancia de la **innovación, la colaboración y la educación en la lucha contra el hambre y en la promoción de sistemas agroalimentarios más sostenibles y justos.**

5.2. Prácticas innovadoras y emergentes

Las estrategias innovadoras y emergentes en la lucha contra el hambre buscan abordar este desafío global desde un **enfoque multidimensional que involucre la participación activa de diversos actores sociales y el aprovechamiento de nuevas tecnologías, al tiempo que promueve la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático.**

En primer lugar, es fundamental el involucramiento de los gobiernos, líderes políticos y el sector privado en el desarrollo de políticas que fomenten la agricultura, mitiguen el cambio climático y protejan a los sectores más vulnerables. Además, se debe empoderar a los





“

Se debe empoderar a los pequeños agricultores familiares, alentándolos a unirse en cooperativas para mejorar su acceso a recursos, adaptarse al cambio climático y desarrollar estrategias de cultivo sostenible.

pequeños agricultores familiares, alentándolos a unirse en cooperativas para mejorar su acceso a recursos, adaptarse al cambio climático y desarrollar estrategias de cultivo sostenible (FAO, 2017). La **asociatividad** debe hacerse a gran escala.

Por otro lado, es clave fortalecer las capacidades de innovación de los propios agricultores mediante inversiones significativas en investigación y desarrollo agrícola, como el mejoramiento de semillas. Asimismo, se destaca el rol transformador de la tecnología digital, ofreciendo soluciones para optimizar el funcionamiento del mercado, prevenir fluctuaciones de precios y mejorar los sistemas de información y alerta temprana (Braun, 2018).

Otra estrategia fundamental es prestar mayor atención a los aspectos ambientales y de cambio climático en la agricultura, el uso de la tierra y el agua, con el fin de reducir el hambre de manera sostenible y proteger los recursos naturales esenciales

(Braun, 2018; FAO, 2017). Igualmente, es necesario implementar **programas innovadores de protección social e intervenciones nutricionales directas para abordar las múltiples dimensiones del hambre y la malnutrición** (Braun, 2018).

Se enfatiza, también, en la importancia de involucrar a las generaciones más jóvenes en esta causa (FAO, 2017), así como integrar las políticas de desarrollo con la diplomacia y seguridad en situaciones de emergencia complejas, con el fin de asegurar buena gobernanza y prácticas financieras sólidas (Braun, 2017). Las acciones clave incluyen la integración de currículos escolares especializados, junto con la organización de talleres y seminarios educativos. Es fundamental ofrecer formación en habilidades cruciales como liderazgo, toma de decisiones, negociación y gestión financiera, con el objetivo de preparar a los jóvenes para contribuir activamente en la esfera de la gobernanza y en proyectos de desarrollo.





Además, es esencial promover alianzas entre entidades gubernamentales, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y el ámbito académico, para implementar programas interdisciplinarios dirigidos a satisfacer las exigencias y afrontar los retos que enfrentan los jóvenes. Por último, es imprescindible enseñar a los jóvenes a desarrollar resiliencia ante situaciones adversas, especialmente durante crisis complejas, dotándolos de las herramientas necesarias para navegar eficazmente a través del cambio y la incertidumbre.

En síntesis, las estrategias innovadoras contra el hambre requieren un enfoque integral que combine la participación social, el desarrollo agrícola inclusivo, la aplicación de tecnologías digitales, la sostenibilidad ambiental, la protección social y la integración de políticas, con el objetivo de construir un futuro libre de hambre y malnutrición. La experiencia indica que acciones aisladas o exclusivamente sectoriales son muy ineficientes y no son capaces de romper los círculos viciosos de la pobreza y el hambre (trampas de pobreza).

5.3. Problemas estructurales para resolver previamente

Implementar el derecho humano a la alimentación como principio rector de las políticas públicas

El derecho humano a la alimentación es un concepto transformador que va más allá de la simple satisfacción de las necesidades básicas, y reconoce que todas las personas tienen derecho a una alimentación adecuada, suficiente y de calidad. La implementación de este derecho como principio rector de las políticas públicas implica un cambio de paradigma en la forma en que se aborda el hambre y la malnutrición.

En lugar de centrarse únicamente en intervenciones asistenciales o de corto plazo, un enfoque basado en derechos humanos busca abordar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Esto implica garantizar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a los recursos y medios necesarios para alimentarse con dignidad, como la tierra, el agua, las semillas y el crédito.

“

Es crucial para Colombia desarrollar un enfoque más integrado y efectivo para superar las trampas de pobreza, abordándolas desde una perspectiva multisectorial que permita una coordinación efectiva entre las diversas funciones, capacidades y actores implicados.

Sistema agroalimentario

Es importante que en Colombia se avance en una gobernanza más adaptada a las condiciones y funcionalidad de los sistemas agroalimentarios sostenibles, abordándola desde un enfoque sistémico que permita la coordinación armónica de funciones, posibilidades y actores de cada componente. Esto implica abordar integralmente los componentes alrededor de la alimentación desde una perspectiva de resultados esperados, con herramientas y escenarios de coordinación que incluyan actores territoriales desde productores hasta consumidores e instituciones transversales. También se requieren sistemas de generación y gestión de información pertinente, oportuna y representativa para una toma de decisiones eficaz, inclusiva y basada en evidencia, que permita corregir desbalances entre actores (HLPE, 2022).

En concreto, es necesario reconsiderar si la instancia adecuada es la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición o avanzar hacia una Comisión de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles que supere la limitada dinámica nación-territorio (RIMISP, 2023). Esto implica fortalecer espacios técnicos departamentales y municipales, con articulación y participación de la sociedad civil en la discusión sobre la

gobernanza territorial de los sistemas agroalimentarios.

Sintetizando, la transformación debe ser un pacto de país que comprometa acciones multiactor y multinivel hacia los ODS, con especial atención a requerimientos y necesidades para sistemas más sostenibles, diversificados, descentralizados e inclusivos, considerando factores internacionales y subregionales que afecten su desempeño (Penagos y Quesada, 2024).

Trampas de pobreza

Es crucial para Colombia desarrollar un enfoque más integrado y efectivo para superar las trampas de pobreza, abordándolas desde una perspectiva multisectorial que permita una coordinación efectiva entre las diversas funciones, capacidades y actores implicados. Esto requiere una comprensión holística de los factores que perpetúan la pobreza, como los económicos, educativos, de empleo, salud e infraestructura, y cómo estos se interrelacionan para limitar el desarrollo humano y económico.

Es esencial establecer mecanismos de coordinación que involucren a todos los actores relevantes, desde agencias gubernamentales hasta comunidades locales, ONG y el sector privado. Además, se necesitan sistemas robustos para la generación y gestión de información

que guíen la toma de decisiones eficaz, inclusiva y basada en evidencia, capaces de identificar y responder a las necesidades específicas de las poblaciones en riesgo.

Podría ser pertinente reconsiderar la estructura y función de las instancias actuales dedicadas a la reducción de la pobreza, o avanzar hacia una comisión más enfocada en romper las trampas de pobreza que mejore la dinámica entre la nación y los territorios. Esto implicaría fortalecer los espacios técnicos a escala departamental y municipal, con una mayor articulación y participación de la sociedad civil en la definición de políticas y estrategias para la gobernanza de la pobreza. **Sin una política clara e integral que permita a los hogares superar las trampas de pobreza, solo se lograrán avances mínimos.**

Descentralización y desigualdades regionales

Para Colombia, es fundamental profundizar en el proceso de descentralización para abordar efectivamente las desigualdades persistentes entre departamentos y municipios. Esta estrategia debe centrarse en un enfoque holístico que reconozca y responda a las capacidades y necesidades de cada territorio, promoviendo una distribución más equitativa de los recursos y las oportunidades.

La creación de fondos de convergencia regional y otras formas de financiamiento innovadoras puede ser una vía efectiva para redistribuir recursos y capacidades a las regiones menos desarrolladas.

Fortalecer los espacios técnicos a escala departamental y municipal es vital para mejorar la planificación y ejecución de políticas públicas en los territorios. La transformación hacia una descentralización más efectiva debe ser un pacto nacional que comprometa a todos los niveles del Gobierno y actores involucrados hacia el logro de un desarrollo más uniforme y sostenible, considerando los desafíos y oportunidades únicos de cada región y promoviendo políticas que aborden directamente las disparidades regionales. Desde las regiones, es fundamental trabajar con las comunidades para comprender y solucionar sus problemas.

5.4. Recomendaciones generales

1. Desarrollar un marco de gobernanza integral para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación adecuada

Resulta fundamental un marco de gobernanza integral que garantice progresivamente el derecho humano a la alimentación adecuada a través de una entidad coordinadora encargada de liderar la formulación de una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con un enfoque territorial, estableciendo lineamientos, objetivos y metas a largo plazo.

Es preciso señalar que previo a la publicación de este documento, el Gobierno Nacional aprobó el Decreto 0684 de 2024 que reglamenta el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, el Programa Hambre Cero, el Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para la Superación del Hambre y la Malnutrición - SNSMSHM y el Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición ODAN. Este decreto marca un hito importante en la gobernanza inherente a la política pública de seguridad alimentaria y nutricional como derecho y da un impulso renovado a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional-CISAN. A escala regional, es crucial fortalecer los Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para que adapten la política nacional a las realidades y necesidades locales.



Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, se propone la creación de un sistema de información público que permita monitorear los avances en los indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, así como el uso de los recursos asignados. Este sistema debe incluir un observatorio del derecho a la alimentación y un sistema nacional de monitoreo de la malnutrición, facilitando así la accesibilidad y comprensión para todos los ciudadanos, además de incluir mecanismos de denuncia y control social.

Acciones específicas para la implementación:

- Definir un modelo claro de operación del marco de gobernanza, con el fin de asegurar que este pueda adaptarse a las dinámicas demográficas y comportamiento de los actores en los territorios.
- Garantizar una participación social paritaria en el diseño y ejecución de la política, con voz y voto activo dentro del sistema, enfocando al territorio como centro del desarrollo.
- Proveer acompañamiento técnico a los consejos departamentales y municipales del derecho a la alimentación, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para gestionar y adaptar la política nacional a sus contextos específicos.
- Implementar el control social y la veeduría ciudadana para supervisar la distribución de los fondos y los recursos del fondo de convergencia regional propuesto en otra de las recomendaciones.
- Establecer información pública que sea oportuna y veraz, y facilite un diálogo abierto entre el Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y otros actores relevantes.
- Crear mesas de trabajo con diversas partes interesadas, para identificar y abordar las realidades específicas del territorio, fomentando así una mayor cohesión y eficiencia en la implementación de las políticas.

Esta integración de desafíos y acciones asegura que la gobernanza del derecho a la alimentación sea efectiva, inclusiva y adaptada a las necesidades y especificidades de cada comunidad, promoviendo así un desarrollo equitativo y sostenible en todas las regiones del país.

2. Fortalecer los programas de nutrición dirigidos a mujeres embarazadas, niños menores y otros grupos vulnerables

La propuesta se enfoca en aumentar la cobertura y calidad de los servicios de salud materno-infantil, especialmente en las zonas rurales y dispersas, a través de la mejora de la infraestructura de salud, la capacitación del personal médico y comunitario, así como la garantía de la disponibilidad de suplementos nutricionales y micronutrientes. Además, se propone reforzar los programas de transferencias monetarias condicionadas, como Familias en Acción, y fortalecer los programas de alimentación escolar.

Sin embargo, se identifican varios desafíos para la implementación efectiva de estos programas. En primer lugar, la focalización adecuada de los beneficiarios es fundamental, y se requiere construir criterios claros para la identificación de los grupos más vulnerables y aplicar los programas a todos ellos. También es necesario tener en cuenta las diferencias culturales y las visiones diversas del sistema de salud, caracterizando a la población con base en sus prácticas culturales y diseñando estrategias de comunicación diferenciada.

La dispersión geográfica y la cultura son factores determinantes para el acceso a programas nutricionales, y se debe trabajar en conformar redes comunitarias para ampliar la cobertura en zonas rurales dispersas, identificar el estado real de las vías para la distribución de alimentos y formular normatividad acorde con las realidades territoriales.

Otro desafío importante es la disponibilidad de alimentos, ya que la producción estacionaria no siempre responde a las necesidades locales y existe desigualdad regional en el acceso a alimentos. Es necesario

promover la compra de alimentos locales y mejorar la trazabilidad de la cadena de distribución, así como difundir información sobre la oferta de servicios a la comunidad.

La falta de recursos es otro obstáculo para lograr una cobertura total y transformaciones significativas, por lo que se sugiere crear fondos multiactor que involucren a los sectores privado, público, comunitario y académico. Además, es fundamental establecer mecanismos de monitoreo y estrategias de rendición de cuentas en doble vía, mediante la transferencia de buenas prácticas entre territorios y el desarrollo de capacidades estadísticas para el seguimiento de la implementación.

Para abordar estos desafíos, se proponen acciones adicionales como: (i) estructurar programas con base en la caracterización cultural, (ii) capacitar a grupos con visiones culturales diversas sobre las necesidades y beneficios de alimentarse, (iii) organizar la producción local, (iv) implementar proyectos y programas sostenibles más allá de vigencias, y (v) articular la respuesta de diferentes actores.

En conclusión, fortalecer los programas de nutrición dirigidos a mujeres embarazadas,

niños pequeños y otros grupos vulnerables requiere un enfoque integral que tenga en cuenta las realidades territoriales, culturales y socioeconómicas, y que involucre a todos los actores relevantes en la planificación, implementación y seguimiento de las acciones. Solo así será posible mejorar la cobertura y calidad de estos programas y contribuir de manera efectiva al logro del ODS 2.

3. Promover la agricultura familiar y las prácticas agroecológicas

Para promover eficazmente la agricultura familiar en Colombia, es esencial adoptar una política integral de reforma agraria que facilite el acceso a la tierra para los pequeños productores, especialmente mujeres y jóvenes rurales. Esta política debe acompañarse de programas de formalización de la propiedad, asistencia técnica y extensión rural, que permitan a los agricultores mejorar su productividad y competitividad.

Es crucial crear líneas de crédito especiales para la agricultura familiar, con tasas de interés preferenciales y subsidios a la producción sostenible, vinculados a capacitaciones en prácticas agroecológicas, como la



“

Se deben fomentar los mercados locales y los circuitos cortos de comercialización, mediante programas de compras públicas que prioricen la adquisición de alimentos de la agricultura familiar.

diversificación de cultivos, el manejo integrado de plagas y enfermedades, y la conservación de suelos y agua. Asimismo, se deben fomentar los mercados locales y los circuitos cortos de comercialización, mediante programas de compras públicas que prioricen la adquisición de alimentos de la agricultura familiar, abasteciendo instituciones públicas como hospitales, escuelas y cárceles, y promoviendo ferias campesinas y mercados comunitarios para ventas directas de los agricultores a los consumidores.

Sin embargo, la implementación de estas políticas enfrenta múltiples desafíos. La difusión inadecuada de las capacitaciones actuales implica que muchos agricultores no están al tanto de los recursos disponibles, lo que requiere la implementación de estrategias de comunicación diferenciada y programas de capacitación diseñados según las necesidades específicas de los grupos poblacionales. También existe un desconocimiento considerable de las prácticas y saberes existentes en las comunidades, que debe abordarse fomentando el intercambio de conocimientos entre técnicos y agricultores para integrar prácticas tradicionales y modernas.

La falta de claridad en las competencias entre los diferentes niveles de Gobierno y la ausencia de acuerdos comunitarios dificultan la implementación efectiva, lo que se puede superar definiendo un marco de responsabilidades claro y promoviendo procesos sociales asociativos y solidarios. Además, muchos municipios tienen catastros rurales desactualizados, por lo que es vital acelerar el desarrollo y la actualización del catastro multipropósito y mejorar la difusión de información relevante sobre el territorio.

En cuanto a garantías e incentivos, el ser agricultor en Colombia actualmente no es

tan atractivo debido a la producción insuficiente y el bajo acceso a factores productivos, especialmente para la población campesina, étnica y las mujeres. Esto se puede abordar rediseñando una reforma agraria en colaboración con la comunidad productora y el sector privado, que incluya incentivos efectivos para la agricultura. La focalización inadecuada de los programas, que no responde a la vulnerabilidad real de los agricultores, requiere la implementación de mecanismos de priorización y focalización que respondan a las necesidades y vulnerabilidades específicas.

Por último, la participación social limitada de las organizaciones en la formación y liderazgo de iniciativas de agroecología necesita ser ampliada para que llegue a todos los niveles de planificación, implementación y evaluación de los programas.

Abordar estos desafíos y ejecutar acciones concretas y coordinadas permitirá a Colombia no solo mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, sino también promover la sostenibilidad ambiental y la equidad social,





contribuyendo efectivamente al cumplimiento del ODS 2.

4. Invertir en la mejora de la infraestructura rural

Para mejorar la infraestructura rural en Colombia y potenciar el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria, es necesario realizar un incremento significativo en la inversión pública en infraestructuras clave, como vías terciarias, sistemas de riego y drenaje, centros de acopio, almacenamiento y electrificación rural. Estas inversiones deben priorizarse en regiones con alto potencial agrícola y alta incidencia de pobreza rural, y deben ser acompañadas por alianzas público-privadas que involucren tanto la construcción como el mantenimiento de estas infraestructuras.

La implementación de estas iniciativas requiere una estrategia que vaya más allá de un enfoque *top-down* y que integre las visiones y necesidades de los actores locales, especialmente las comunidades

rurales. Esto implica reconocer y adaptarse a la cosmogonía y las dinámicas sociales de cada comunidad, que a menudo presentan concepciones distintas sobre seguridad alimentaria y desarrollo agrícola. Es fundamental también garantizar la transparencia en la gestión de recursos y en las concesiones, para evitar prácticas corruptas y asegurar que las inversiones realmente benefician a las comunidades locales.

Para fortalecer la conectividad digital en zonas rurales, es esencial explorar esquemas innovadores, como la conectividad satelital o las bandas no licenciadas, además de proporcionar subsidios para dispositivos que les faciliten a los agricultores acceder a información de mercado, servicios financieros y asistencia técnica en línea. Sin embargo, esto debe acompañarse de una estrategia de capacitación comunitaria que permita a los residentes locales hacer uso efectivo de estas tecnologías.

Además, se deben implementar acciones específicas que posibiliten la articulación de actores y acciones en el territorio, como la creación de un documento Conpes específico sobre seguridad alimentaria que garantice una perspectiva transversal y una inclusión más extensa del término agropecuario. Este enfoque debe estar acompañado de incentivos para la participación activa de todos los actores en la planificación y ejecución de proyectos.

También es crucial implementar un modelo de contratación bajo estándares internacionales para las alianzas público-privadas, con el fin de asegurar que estas sean transparentes y efectivamente supervisadas. Adicionalmente, es necesario cocrear estrategias que fortalezcan la infraestructura rural y capacitar a las comunidades para que puedan implementar y mantener estas soluciones por sí mismas.



Para superar estos desafíos y garantizar una implementación exitosa, es esencial utilizar tecnología para reducir costos y desarrollar un sistema de información y seguimiento robusto, como un banco de desarrollo con plataforma abierta.

Por último, el desarrollo y la implementación de un catastro multipropósito con enfoque rural-productivo y el procesamiento de imágenes satelitales sobre el uso del suelo ayudarán tanto a identificar y priorizar las regiones con mayor potencial agropecuario como a garantizar la seguridad jurídica y física necesaria para el éxito de estas inversiones. Este enfoque integral, combinado con la colaboración efectiva entre el sector público, privado y las comunidades, es

clave para superar los desafíos actuales y lograr una verdadera transformación en la infraestructura rural de Colombia.

5. Establecer mecanismos de financiamiento innovadores

Para movilizar recursos hacia las regiones y comunidades más necesitadas, es crucial la creación de fondos de convergencia que redistribuyan los ingresos fiscales entre departamentos y municipios, según criterios de equidad y eficiencia. Estos fondos, que se prevé que representen el 1,2% del PIB con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), deben tener asignaciones específicas para programas de seguridad alimentaria y nutricional. También es fundamental promover alianzas público-privadas para financiar proyectos de desarrollo rural y seguridad alimentaria, como esquemas de financiación mixta y la creación de fondos de inversión de impacto, para atraer recursos privados hacia proyectos con alto potencial de impacto social y ambiental.

No obstante, se enfrentan varios retos para la implementación efectiva de estas propuestas. Existe un desconocimiento de soluciones existentes y mecanismos de inversión en alimentación, así como un liderazgo deficiente y desarticulación entre actores clave. La falta de coordinación y la ausencia de

un marco regulatorio claro para garantizar la transparencia en las inversiones son obstáculos significativos, sumados a la poca conectividad entre los niveles de Gobierno local y nacional, y la ineficiencia de las instancias existentes.

Para superar estos desafíos y garantizar una implementación exitosa, es esencial utilizar tecnología para reducir costos y desarrollar un sistema de información y seguimiento robusto, como un banco de desarrollo con plataforma abierta. Es vital priorizar el ODS 2 en mecanismos existentes y fortalecer los procesos de participación, veeduría y control social. Identificar y articular fuentes de recursos a escala nacional, local e internacional, así como integrar las economías regionales en un esfuerzo conjunto que abarque desde lo local hasta lo nacional, son pasos necesarios. Además, la implementación de estándares internacionales de lucha contra la corrupción ayudará a asegurar que los fondos y esfuerzos se apliquen de manera efectiva y transparente.

En resumen, fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación de políticas y programas de seguridad alimentaria y nutricional, con indicadores claros de impacto, cobertura y calidad, permitirá una mejor supervisión y participación

de la sociedad civil en el control del gasto y la transparencia de las inversiones. Esta estrategia integral, que combina financiamiento adecuado con una gestión eficiente y transparente, es fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la eliminación del hambre y la promoción de la agricultura sostenible.

6. Fomentar la investigación, la innovación y la transferencia de tecnologías en el sector agroalimentario

Para fomentar la investigación, la innovación y la transferencia de tecnologías en el sector agroalimentario, es crucial incrementar la inversión pública en ciencia y tecnología agropecuaria. Esto se puede lograr mediante convocatorias competitivas financiadas con recursos de las regalías, que prioricen temas como la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la generación de valor agregado. También es fundamental fortalecer los centros de investigación y los programas de formación en ciencias agrarias, con el fin de promover la vinculación de jóvenes investigadores y la participación de las comunidades rurales.

Para asegurar una efectiva transferencia de tecnologías, es necesario implementar programas de extensión rural que ofrezcan asistencia técnica y capacitación en nuevas variedades, prácticas de manejo y tecnologías de poscosecha, utilizando metodologías participativas que valoren los saberes locales. Asimismo, se deben establecer alianzas entre universidades, centros de investigación y empresas privadas para el desarrollo y comercialización de

nuevas tecnologías, como aplicaciones móviles y sistemas de riego inteligente adaptados a las condiciones locales.

Sin embargo, se enfrentan múltiples desafíos en este empeño, como los altos costos asociados a la dispersión geográfica y problemáticas intersectoriales, como la violencia y los desastres naturales, que afectan el alcance y desarrollo de las iniciativas. Otros retos incluyen el acceso limitado a internet, la baja adopción de inteligencia artificial, la migración de jóvenes rurales y la falta de articulación entre el sector agroalimentario y la población rural.

Para superar estos desafíos y garantizar una implementación exitosa, es imprescindible transformar la sostenibilidad en la investigación y la innovación del sector agroalimentario. Esto implica conectar a los actores del sistema alimentario mediante tecnologías avanzadas, transformar los sistemas de información del sector y diseñar programas de investigación sobre consumo sostenible. Además, es necesario adoptar programas integrales de apoyo a productores que incluyan componentes de investigación a escala nacional, estandarizar procesos para facilitar la participación de comunidades rurales e implementar estrategias específicas para involucrar a los jóvenes en la agricultura.





Por último, se debe trabajar en la identificación y mapeo de iniciativas de investigación e innovación en el sector privado, especialmente en regiones de difícil acceso, asociar indicadores del sector privado con los de planes de desarrollo territorial, y establecer programas dirigidos a jóvenes rurales en zonas prioritarias. Esto contribuirá a fortalecer la seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático en el sector agroalimentario.

7. Promover la educación alimentaria y nutricional en todos los niveles

Para promover la educación alimentaria y nutricional de manera efectiva, es esencial integrar este tema transversalmente en los currículos escolares, desde la educación inicial hasta la media, abarcando aspectos como los grupos de alimentos, la preparación de comidas saludables,

la higiene y manipulación de alimentos, y la importancia de la actividad física. Asimismo, es crucial implementar programas de educación nutricional en centros de salud y hospitales, dirigidos especialmente a mujeres gestantes, madres lactantes y cuidadores de niños pequeños, con el objetivo de proporcionar información vital sobre alimentación complementaria, lactancia materna exclusiva y prevención de desnutrición y obesidad.

A nivel comunitario, se deben organizar campañas de sensibilización y movilización social para fomentar el derecho a la alimentación y la adopción de hábitos saludables. Estas iniciativas pueden incluir actividades lúdicas y culturales, tales como ferias de alimentación, concursos de recetas tradicionales y proyectos de huertos comunitarios. Para ampliar el alcance y la efectividad de estos mensajes, es

fundamental establecer alianzas con medios de comunicación para difundir contenidos educativos sobre alimentación y nutrición a través de plataformas como radio, televisión, redes sociales y aplicaciones móviles.

Sin embargo, la implementación de estas estrategias enfrenta varios desafíos, como los altos precios de los productos saludables, la falta de articulación entre los sectores de salud y educación, el desconocimiento sobre dietas variadas y saludables, y la necesidad de incluir un enfoque étnico en los currículos escolares. Además, se requiere un cambio cultural y comportamental profundo, que vaya más allá de la simple educación y sensibilización, hacia la apropiación real de los conocimientos impartidos.

Para superar estos obstáculos y asegurar una implementación exitosa, es necesario llevar a cabo concertaciones con las poblaciones objetivo al impartir la educación alimentaria, desarrollar currículos escolares con un enfoque étnico adaptado a la diversidad cultural de los estudiantes y ofrecer subsidios a productos saludables. También es crucial implementar incentivos para programas educativos en entornos operativos de empresas privadas, y articular esfuerzos con pequeños productores para facilitar el acceso a alimentos nutritivos y producidos de manera sostenible.

De igual forma, deben diseñarse aplicativos y estrategias de comunicación que promuevan dietas nutritivas y cambios de

comportamiento a nivel comunitario, especialmente en áreas con altos niveles de malnutrición. Es fundamental también que la educación nutricional se establezca como un eje transversal en todos los proyectos de seguridad alimentaria y nutricional (SAN), y que se financien innovaciones sociales que contribuyan a la creación de ambientes alimentarios saludables y a la consolidación de una cultura ciudadana que reconozca y exija el derecho a la alimentación.

En resumen, la implementación de estas recomendaciones requiere un esfuerzo coordinado y sostenido de todos los sectores de la sociedad, bajo el liderazgo del Estado y con la participación activa de las comunidades. Solo así será posible avanzar hacia un sistema agroalimentario más justo, sostenible y saludable para todos los colombianos.

5.5. Recomendaciones vanguardistas para la lucha contra el hambre

1. Sistemas de tecnología *blockchain* para la transparencia alimentaria

Implementar tecnología *blockchain* para rastrear el origen y la distribución de alimentos, con el fin de asegurar la transparencia desde el campo hasta el consumidor. Esto podría reducir significativamente la corrupción y mejorar la confianza en los sistemas agroalimentarios.

Ejemplo: En algunos países europeos se utilizan sistemas *blockchain* para garantizar la trazabilidad y la calidad de productos como el aceite de oliva y productos marinos.



Es fundamental también que la educación nutricional se establezca como un eje transversal en todos los proyectos de seguridad alimentaria y nutricional.





2. Iniciativas de banca de alimentos móviles y digitales

Crear plataformas móviles y aplicaciones que conecten directamente a productores de alimentos con consumidores y bancos de alimentos, con el fin de reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia en la distribución de alimentos a los más necesitados.

Ejemplo: En Estados Unidos, aplicaciones como “Food Rescue US” conectan a restaurantes y supermercados con bancos de alimentos locales para donar alimentos que de otro modo se desperdiciarían.

3. Urbanización de la agricultura con tecnologías de cultivo vertical

Desarrollar granjas urbanas verticales que utilizan técnicas de hidroponía o aeroponía para producir alimentos en áreas urbanas densamente pobladas, con el propósito de reducir espacios y recursos.

Ejemplo: Singapur y Japón han adoptado la agricultura vertical para aumentar su autosuficiencia alimentaria en entornos urbanos con espacio limitado.

4. Innovaciones en biofortificación de cultivos

Invertir en investigación y desarrollo de cultivos biofortificados genéticamente para mejorar su contenido nutricional, resistencia a enfermedades y

adaptabilidad a condiciones climáticas adversas.

Ejemplo: En varios países africanos se han introducido variedades de maíz y batata ricas en vitaminas para combatir la malnutrición.

5. Redes de solidaridad alimentaria y economías compartidas

Fomentar sistemas de economía compartida donde comunidades pueden intercambiar o compartir alimentos mediante plataformas colaborativas, con el fin de reducir el costo y aumentar el acceso a alimentos nutritivos.

Ejemplo: En Brasil, las “redes de solidaridad alimentaria” conectan a pequeños agricultores directamente con consumidores, eliminando intermediarios y reduciendo costos.

6. Legislación innovadora para la reducción de desperdicio de alimentos

Adoptar leyes que obliguen a los supermercados y restaurantes a donar alimentos no vendidos que sean seguros para el consumo, en lugar de desecharlos.

Ejemplo: Francia ha implementado legislación que prohíbe a los supermercados desechar alimentos no vendidos, impulsando así la donación a bancos de alimentos y otras entidades caritativas.

Anexo 1. Indicadores de la transformación Derecho Humano a la Alimentación del Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026.

Sector	Indicador
Agricultura y Desarrollo Rural	Producción en cadenas agrícolas priorizadas para el derecho humano a la alimentación
Inclusión Social y Reconciliación	Incidencia de pobreza monetaria extrema
Salud y Protección Social	Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años (por cada 100.000 mil menores de 5 años)
Transporte	Instalaciones portuarias fluviales intervenidas
Agricultura y Desarrollo Rural	Área con distritos de riego de pequeña escala existentes rehabilitados, complementados y modernizados
Agricultura y Desarrollo Rural	Área con nuevos distritos de riego construidos o ampliados
Agricultura y Desarrollo Rural	Nuevas admisibilidades sanitarias y fitosanitarias obtenidas para la diversificación de exportaciones
Agricultura y Desarrollo Rural	Operaciones de crédito de fomento (pequeño productor ingresos bajos y pequeño productor)
Agricultura y Desarrollo Rural	Pequeños productores asegurados con el seguro agropecuario
Agricultura y Desarrollo Rural	Producción de pescado proveniente de la pesca artesanal

Sector	Indicador
Agricultura y Desarrollo Rural	Sistemas de trazabilidad de productos agropecuarios implementados
Agricultura y Desarrollo Rural	Usuarios atendidos con el servicio público de extensión agropecuaria
Agricultura y Desarrollo Rural	Zonas libres y de baja prevalencia mantenidas
Ciencia, Tecnología e Innovación	Prototipos de tecnologías para la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación en proceso de validación precomercial o comercial
Cultura	Municipios con alta incidencia de pobreza que cuentan con consolidación de ecosistemas de cocina tradicional fortalecidos para el desarrollo productivo comunitario
Educación	Tasa de cobertura del programa de alimentación escolar
Inclusión Social y Reconciliación	Unidades de recuperación nutricional comunitarias de ICBF implementadas, como parte de las zonas de recuperación nutricional - ZRN
Salud y Protección Social	Entidades públicas y empresas que según la Ley 1823 de 2007, adaptan espacios para la implementación de las salas de lactancia materna en el entorno laboral
Vivienda, Ciudad y Territorio	Índice de riesgo de la calidad del agua - IRCA rural nacional
Vivienda, Ciudad y Territorio	Índice de riesgo de la calidad del agua - IRCA urbano nacional

Anexo 2. Construcción participativa del Reporte Nacional Voluntario 2024

La Agenda 2030 insta a los gobiernos a adelantar procesos de revisión y dialogo multiactor que garantice que la implementación de los ODS sea un proceso continuo y participativo. En este sentido, el DNP, en ejercicio de la Secretaría Técnica de ODS, organizó cuatro espacios de socialización y diálogo con actores no gubernamentales, con el objetivo de recoger aportes sobre la implementación del ODS 2 por parte del sector privado, organismos internacionales, entes territoriales, sociedad civil y academia para la elaboración del RNV-2024:

Sector privado



14 de marzo
2024

¿Cómo aporta el sector privado a la seguridad alimentaria del país?

Empresas: Nestlé, Fundación Alpina. Cámara de Comercio de Bogotá, Afoacuaponia, Fundación Éxito, Grupo Nutresa, P4G, ABACO, DSM-Firmenich Colombia.

Organismos Internacionales: Programa Mundial de Alimentos, Oficina Coordinadora residente Naciones Unidas.

Entidades de Gobierno



9 de abril
2024

Conversatorio sobre Políticas y Programas en Seguridad Alimentaria

- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Departamento para la Prosperidad Social
- Ministerio de Agricultura
- Ministerio de Salud
- DANE
- CBF

Entidades territoriales



11 de abril
2024

Conversatorio sobre Gobernanza interinstitucional: oportunidades y desafíos en la superación del hambre en la Guajira

- Gobierno: Banco de la República sede Guajira, DNP, Secretaria de Desarrollo, Secretaria de Salud, Veeduría ciudadana.
- Sector privado: Fundación Alpina.
- Academia: Universidad de la Guajira.
- Organismos internacionales: WFP, UNICEF, ONU.

Múltiples actores



26 de abril
2024

Taller Nacional para la construcción del Reporte Nacional Voluntario

- Gobierno: ICBF, DANE, Ministerio de Relaciones Exteriores, Asocapitales.
- Organismos Internacionales: WFP, UNFPA, ONU, GIZ, FAO, SEI, CEPAL.
- Academia: CODS, Centro ISA unidades.
- Sector privado: Repsol, ACP, Fundación Alpina.
- Sociedad civil: CCONG.

Anexo 3. Avance en los indicadores del sistema de seguimiento nacional a los ODS

ODS 1

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
1	1_1_1_G	Porcentaje de población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza extrema	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	1,7%	5,6%	Porcentaje	9,4%	2020	0%
	1_1_2_C	Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	4,0%	9,1%	Porcentaje	13,8%	2022	0%
	1_2_1_P	Incidencia de la Pobreza Monetaria	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	18,7%	36,1%	Porcentaje	36,6%	2022	0%
	1_2_2_P	Índice la Pobreza Multidimensional	DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	Reducción	8,4%	19,8%	Porcentaje	12,9%	2022	61%
	1_3_1_C	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	ADRRES - Base de Datos Única de Afiliados (BDUA)	Flujo	0,99	95,7% (2016)	Porcentaje	95,5%	2021	96%
	1_4_1_C	Hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas	Agencia Nacional de Tierras	Acumulado	7.000.000	0	Hectáreas	242.525	2021	33%
	1_5_1_P	Mortalidad nacional causada por eventos recurrentes	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) - Consolidado Atención de Emergencias	Reducción	80	89	Muertes	152	2022	0%
	1_5_2_P	Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) - Consolidado Atención de Emergencias	Reducción	890,82	989,79	Tasa por cada 100.000 habitantes	1.096	2022	0%
	1_3_2_C	Porcentaje de población ocupada afiliada a Administradora de Riesgos Laborales	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Flujo	48,0%	34,3%	Porcentaje	42,1%	2023	88%
	1_3_3_C	Porcentaje de población ocupada cotizante al sistema de pensiones	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Flujo	42,1%	36,8%	Porcentaje	38,5%	2020	91%

ODS 2

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
2	2_1_1_P	Prevalencia de inseguridad alimentaria en el hogar (moderada o severa)	Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN	Reducción	0,139	23,5% (2016)	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.

2	2_1_2_C	Porcentaje de menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva	ICBF - Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN)	Acumulado	51,0%	36,1%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	2_2_1_G	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años	ICBF - Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN)	Reducción	5,0%	10,8%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	2_2_2_P	Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años	ICBF - Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN)	Reducción	0,9%	2,3%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	2_4_1_C	Participación de la Producción Agrícola que cumple con criterios de Crecimiento Verde	DANE - Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)	Acumulado	0,1	0,49% (2016)	Porcentaje	0,3%	2019	9%
	2_2_3_C	Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años	DANE - Estadísticas Vitales (EEV)	Reducción	5	7,86	Tasa por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años	11	2022	0%

ODS 3

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
3	3_1_2_P	Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	DANE - Estadísticas Vitales (EEV)	Flujo	99,0%	99,0%	Porcentaje	97,9%	2022	99%
	3_1_3_C	Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales	DANE - Estadísticas Vitales (EEV)	Acumulado	93,0%	88,2%	Porcentaje	83,7%	2022	100%
	3_2_1_G	Tasa de mortalidad neonatal	DANE - Estadísticas Vitales (EEV)	Reducción	6	7,01	Tasa por cada 1.000 nacidos vivos	7	2020	34%
	3_3_1_G	Incidencia de tuberculosis	Ministerio de Salud y Protección Social - Sistema de Información para la Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	Reducción	10	26,4	Tasa por cada 100.000 habitantes	24	2021	18%
	3_3_2_G	Incidencia de malaria	Ministerio de Salud y Protección Social - Sistema de Información para la Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	Reducción	2	5,3	Tasa por cada 1.000 habitantes	2	2021	96%
	3_3_3_C	Tasa de mortalidad por malaria	DANE - Estadísticas Vitales (EEV)	Reducción	2	8,00	Tasa por cada 100.000 habitantes	4	2020	67%

3	3_3_4_C	Letalidad por dengue	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	0,1%	0,2%	Porcentaje	0,2%	2021	0%
	3_3_7_C	Porcentaje de transmisión materno-infantil del VIH/SIDA	Ministerio de Salud y Protección Social - Sistema de Información para la Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	Reducción	2,0%	1,7%	Porcentaje	4,7%	2018	100%
	3_3_8_C	Tasa de mortalidad por VIH/SIDA	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	2,4	5,29	Tasa por cada 100.000 habitantes	4	2022	29%
	3_4_1_G	Tasa de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	4,12	5,07 (2014)	Tasa por cada 100.000 habitantes	5	2020	0%
	3_4_7_C	Porcentaje de personas atendidas en servicios en salud mental	Bodega de datos SISPRO: Registros Individuales de Prestación de Servicios y Registro Especial de Prestadores	Flujo	14,4%	6,7%	Porcentaje	5,1%	2022	36%
	3_5_1_C	Porcentaje de personas con abuso o dependencia de cualquier sustancia ilícita	Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, DPS, Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) - Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia.	Reducción	0,01	2,1% (2013)	Porcentaje	1,5%	2019	56%
	3_5_2_C	Porcentaje de personas con consumo de riesgo y perjudicial de alcohol	Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, DPS, Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) - Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia.	Reducción	0,05	11% (2013)	Porcentaje	1,5%	2019	100%
	3_6_1_G	Tasa General de Mortalidad por Accidentes de Tránsito terrestre (TGMA)	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	8,35	15,69	Tasa por cada 100.000 habitantes	17	2022	0%
	3_8_1_P	Porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente	Ministerio de Salud y Protección Social - Programa Ampliado de Inmunización (PAI)	Flujo	95,0%	91,4%	Porcentaje	87,5%	2022	92%
	3_8_2_P	Porcentaje niños y niñas de 1 año con vacunación de triple viral	Ministerio de Salud y Protección Social - Programa Ampliado de Inmunización (PAI)	Flujo	95,0%	94,0%	Porcentaje	88,5%	2022	93%
	3_8_3_P	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	ADRRES - Base de Datos Única de Afiliados (BDUA)	Flujo	0,99	96,8% (2016)	Porcentaje	95,5%	2021	96%

3	3_9_1_P	Porcentaje de estaciones que cumplen con el objetivo intermedio III de las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en material particulado inferior a 2.5 micras (PM2.5)	IDEAM - Sistema de información sobre calidad de aire (SISAIRE)	Acumulado	70,0%	25,0%	Porcentaje	57,1%	2021	100%
	3_9_2_P	Porcentaje de estaciones que cumplen con el objetivo intermedio III de las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en material particulado inferior a 10 micras (PM10)	IDEAM - Sistema de información sobre calidad de aire (SISAIRE)	Acumulado	70,0%	14,9%	Porcentaje	54,5%	2022	100%
	3_9_3_C	Incidencia de intoxicaciones por sustancias químicas	Instituto Nacional de Salud (INS)-Sistema de Información para la Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	Reducción	47	70,1	Tasa por cada 100.000 habitantes	45	2019	100%
	3_9_4_C	Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) Urbano	INS - Sistema de la Vigilancia de la Calidad del Agua Potable para Consumo humano (SIVICAP)	Reducción	5,0%	9,6%	Porcentaje	10,6%	2021	0%
	3_9_5_C	Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) Rural	INS - Sistema de la Vigilancia de la Calidad del Agua Potable para Consumo humano (SIVICAP)	#N/D	Sin meta	35,0%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	3_2_2_G	Tasa de mortalidad en menores de 5 años (ajustada)	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	15	18,7	Tasa por cada 1.000 nacidos vivos	19	2020	0%
	3_2_3_C	Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (ajustada)	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	14	17,1	Tasa por cada 1.000 nacidos vivos	18	2020	0%
	3_4_2_P	Tasa de mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	75	81,2	Tasa por cada 100.000 habitantes de 30 a 70 años	84	2020	0%
	3_4_3_P	Tasa de mortalidad prematura por cáncer de mama, cuello uterino, colon y recto, pulmón, próstata, estómago, linfoma no Hodgkin y Leucemia en adultos	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	55,2	55,67	Tasa por cada 100.000 habitantes de 30 a 70 años	56	2020	0%
	3_4_4_P	Tasa de mortalidad prematura por diabetes	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	11,5	14,23	Tasa por cada 100.000 habitantes de 30 a 70 años	17	2020	0%

3	3_4_5_P	Tasa de mortalidad prematura de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	8,1	9,49	Tasa por cada 100.000 habitantes de 30 a 70 años	9	2020	63%
	3_A_1_P	Prevalencia actual de consumo de tabaco	DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	Reducción	0,075	8,3% (2016)	Porcentaje	6,4%	2023	100%
	3_4_6_C	Tasa de mortalidad por tumores malignos en menores de 18 años	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	3,9	4,65	Tasa por cada 100.000 menores de 18 años	5	2020	0%
	3_1_1_G	Razón de mortalidad materna	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	32	53,7	Razón por cada 100.000 nacidos vivos	49	2022	23%
	3_7_1_G	Tasa de fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	46	63,9	Tasa por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años	54	2020	53%
	3_7_2_P	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Flujo	48,6%	28,5%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	3_7_3_P	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Flujo	81,4%	61,4%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	3_7_4_C	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Reducción	12,0%	17,4%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	3_7_5_C	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	14,0%	20,1%	Porcentaje	21,1%	2022	0%

ODS 4

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
4	4_1_1_P	Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER 5 - Lenguaje	ICFES - Pruebas Saber	Flujo	44,5%	33,5%	Porcentaje	43,0%	2017	97%

4	4_1_2_P	Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER 5 -Matemáticas	ICFES - Pruebas Saber	Flujo	38,1%	28,3%	Porcentaje	28,0%	2017	73%
	4_1_3_P	Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER 9 - Lenguaje	ICFES - Pruebas Saber	Flujo	44,5%	34,0%	Porcentaje	48,0%	2017	100%
	4_1_4_P	Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER 9 - Matemáticas	ICFES - Pruebas Saber	Flujo	29,7%	18,8%	Porcentaje	26,0%	2017	88%
	4_1_5_C	Tasa de cobertura bruta en educación media	Ministerio de Educación Nacional - Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)	Acumulado	95,0%	77,8%	Porcentaje	86,1%	2020	100%
	4_2_1_C	Porcentaje de niñas y niños en primera infancia que cuentan con las atenciones priorizadas en el marco de la atención integral	Comisión Intersectorial para la Primera Infancia (CIPI)	Acumulado	95,0%	11,7%	Porcentaje	31,2%	2021	100%
	4_2_2_C	Tasa de cobertura bruta en transición	Ministerio de Educación Nacional - Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)	Capacidad	100,0%	85,9%	Porcentaje	92,3%	2020	45%
	4_3_1_C	Cobertura en educación superior	Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES)	Capacidad	80,0%	49,4%	Porcentaje	53,9%	2021	15%
	4_5_1_C	Brecha entre cobertura neta urbano-rural en educación preescolar, básica y media	Ministerio de Educación Nacional - Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)	Reducción	5,47	8,6	Puntos porcentuales	9	2018	0%
	4_6_1_C	Tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	3,0%	5,8%	Porcentaje	4,4%	2020	51%
	4_A_1_C	Porcentaje de matrícula oficial con conexión a internet	Ministerio de Educación Nacional - Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) MinTIC Ministerio de Educación Nacional - Reporte de Conectividad por Sede Educativa	Flujo	100,0%	74,1%	Porcentaje	56,7%	2021	57%
	4_2_3_C	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que asisten a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio.	DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	Flujo	50,0%	36,7%	Porcentaje	35,9%	2023	72%

ODS 5

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
5	5.1_1_C	Porcentaje de municipios que cuentan con mecanismo intersectorial para el abordaje de las violencias de género	Ministerio de Salud y Protección Social – Línea de Violencias de género.	Acumulado	80,0%	10,7%	Porcentaje	11,8%	2016	28%
	5.4_1_P	Brecha del tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados por hombres y mujeres	DANE - Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC) con base en la información de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT)	#N/D	Sin meta	74,1% (2012)	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5.4_2_C	Brecha de la valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)	DANE - Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC) con base en la información de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT)	#N/D	Sin meta	11,9% (2012)	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5.A_1_C	Brecha de ingreso mensual promedio entre hombres y mujeres	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	15,0%	20,3%	Porcentaje	8,5%	2022	100%
	5.2_1_P	Porcentaje de mujeres que han sido forzadas físicamente por el esposo o compañero a tener relaciones o actos sexuales	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Reducción	5,0%	7,6%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5.2_2_P	Porcentaje de mujeres que han sido forzadas físicamente por otra persona diferente a su esposo o compañero a tener relaciones o actos sexuales	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Reducción	2,5%	4,5%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5.2_3_P	Porcentaje de mujeres, alguna vez unidas, que han experimentado alguna violencia física por parte del esposo o compañero	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Reducción	27,0%	31,9%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5.2_4_P	Porcentaje de mujeres que han experimentado alguna violencia física por una persona diferente al esposo o compañero	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Reducción	10,0%	13,0%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5.2_5_P	Porcentaje de mujeres, alguna vez unidas, que reportaron violencia psicológica por parte de su pareja	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Reducción	50,0%	64,1%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5.2_6_C	Tasa de homicidio de mujeres	MinDefensa - Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO)	Reducción	2,9	4,37	Tasa por cada 100.000 mujeres	4	2019	5%

5	5_3_1_P	Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 18 años	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Reducción	17,7%	20,6%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5_3_2_C	Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Reducción	3,1%	4,0%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5_5_1_C	Porcentaje de mujeres en cargos directivos del Estado Colombiano	Departamento Administrativo de la Función Pública	Capacidad	50,0%	43,5%	Porcentaje	48,6%	2023	79%
	5_5_1_P	Porcentaje de mujeres candidatas del total de personas candidatizadas	Registraduría Nacional del Estado Civil	Flujo	50,0%	36,6%	Porcentaje	39,0%	2023	78%
	5_6_1_P	Tasa de fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	46	66,1	Tasa por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años	54	2020	58%
	5_6_2_C	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	Reducción	14,0%	20,1%	Porcentaje	21,1%	2022	0%
	5_6_3_P	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos	Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Flujo	48,6%	28,5%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5_6_4_P	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Flujo	81,4%	61,4%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5_6_5_C	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo	Profamilia - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Reducción	12,0%	17,4%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	5_B_1_P	Porcentaje de mujeres que usan teléfono celular	DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	Acumulado	93,0%	86,7%	Porcentaje	90,5%	2022	100%
	5_B_2_P	Porcentaje de mujeres que usan internet	DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	Acumulado	94,0%	55,2%	Porcentaje	73,6%	2022	100%
	5_B_3_C	Porcentaje de mujeres que usan terminales	DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	Acumulado	99,0%	51,6%	Porcentaje	34,0%	2022	100%

ODS 6

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
6	6_1_1_P	Acceso a agua potable	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Capacidad	100,0%	92,5%	Porcentaje	90,3%	2021	0%
	6_2_1_P	Porcentaje de la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Capacidad	92,6%	91,8%	Porcentaje	88,6%	2021	0%
	6_3_1_P	Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de manera segura	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Sistema Único de Información (SUI), Requerimientos al prestador y visitas de inspección	Acumulado	68,6%	37,3%	Porcentaje	53,1%	2021	100%
	6_3_2_P	Porcentaje de aguas residuales industriales tratadas	DANE - Encuesta Ambiental Industrial	Flujo	92,0%	84,5%	Porcentaje	80,3%	2021	87%
	6_3_3_C	Porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del Índice de Calidad de Agua (ICA)	IDEAM	Acumulado	43,0%	36,0%	Porcentaje	22,0%	2022	100%
	6_4_1_C	Porcentaje de subzonas hidrográficas con Índice de Uso del Agua (IUA) muy alto o crítico	IDEAM - Estudio Nacional del Agua	Reducción	0,178	8,2% (2012)	Porcentaje	7,3%	2020	0%
	6_4_2_C	Productividad hídrica	DANE - Cuenta Ambiental y económica de flujo del agua	Capacidad	4.400	3.334	Pesos / m³	4.085	2018	70%
	6_5_1_C	Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) formulados en el territorio nacional	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Acumulado	135	4	Planes	92	2023	100%
	6_5_2_C	Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Acumulado	60	0	Planes	80	2022	100%
	6_1_2_P	Acceso a agua potable (suelo urbano)	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Capacidad	100,0%	97,3%	Porcentaje	97,3%	2021	0%
	6_1_3_P	Acceso a agua potable (suelo rural)	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Capacidad	100,0%	73,7%	Porcentaje	67,0%	2021	0%

ODS 7

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
7	7_1_1_C	Cobertura de energía eléctrica	Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) - Plan indicativo de expansión de Cobertura (PIEC)	Capacidad	100,0%	96,9%	Porcentaje	96,8%	2019	0%
	7_2_1_C	Porcentaje de capacidad instalada que corresponde a fuentes renovables	Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) - Balance Energético Colombiano	Capacidad	73,3%	73,9%	Porcentaje	69,5%	2020	100%
	7_3_1_G	Intensidad energética	Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) - Balance energético Nacional DANE - Cuenta Ambiental y Económica de Flujos de Energía, en Unidades Físicas.	Reducción	2,9	3,7	Terajulios / mil millones de pesos de 2005	3	2019	39%
	7_B_1_C	Capacidad instalada de generación de energía eléctrica	Ministerio de Minas y Energía – Sistema de Información eléctrico colombiano Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) - Plan de Expansión de Generación y Transmisión	Capacidad	23.482	16.571	Megavatios (MW)	17.725	2021	17%

ODS 8

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
8	8_1_1_G	Crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita	DANE - Cuentas Nacionales	Flujo	3,3%	1,9%	Porcentaje	-0,4%	2023	92%
	8_10_1_P	Porcentaje de población adulta que cuenta con algún tipo de producto financiero	Banca de las Oportunidades – Informe trimestral de la inclusión financiera	Capacidad	84,0%	76,3%	Porcentaje	90,5%	2021	100%
	8_10_2_P	Porcentaje de adultos que tienen un producto financiero activo o vigente	Banca de las Oportunidades – Informe trimestral de la inclusión financiera	Capacidad	70,0%	63,5%	Porcentaje	74,8%	2021	100%
	8_2_1_G	Crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) real por persona empleada	DANE - Cuentas Nacionales	Flujo	3,0%	0,6%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.

8	8_4_1_C	Generación de residuos sólidos y productos residuales frente al Producto Interno Bruto (PIB)	DANE - Cuenta Ambiental y Económica de Flujo de Materiales - Cuenta de Residuos Sólidos, en unidades físicas.	Flujo	15.788	24.932	Toneladas / billón de pesos	29.995	2019	100%
	8_4_2_C	Porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Acumulado	30,0%	45,3%	Porcentaje	49,7%	2020	100%
	8_4_3_C	Participación de la economía forestal en el PIB	DANE - Cuentas Nacionales	Flujo	1,5%	0,8%	Porcentaje	0,7%	2021	45%
	8_4_4_C	Bioproductos registrados por el Programa Colombia Bio	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Capacidad	500	84 (2017)	Número	301	2022	52%
	8_9_1_P	Participación del valor agregado turístico	DANE - Cuenta Satélite de Turismo	Flujo	0,0156	1,9% (2014)	Porcentaje	1,6%	2021	100%
	8_3_1_C	Tasa de formalidad laboral	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Flujo	60,0%	50,8%	Porcentaje	52,0%	2020	87%
	8_5_1_G	Tasa de desempleo	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	6,8%	8,9%	Porcentaje	15,9%	2020	0%
	8_8_1_C	Porcentaje de población ocupada afiliada a Administradora de Riesgos Laborales	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Flujo	48,0%	34,3%	Porcentaje	42,1%	2023	88%
	8_9_2_P	Porcentaje de población ocupada en la industria turística	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Flujo	10,8%	8,3%	Porcentaje	8,8%	2018	81%
	8_6_1_P	Porcentaje de jóvenes que no estudian y no tienen empleo	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	15,0%	21,3%	Porcentaje	29,1%	2020	0%
	8_7_1_G	Tasa de trabajo infantil	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	6,0%	9,1%	Porcentaje	4,9%	2020	100%

ODS 9

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
9	9_1_1_C	Viajes realizados diariamente en sistemas de transporte público organizados	Ministerio de Transporte	Flujo	6.900.000	3.935.396	Viajes	2.496.316	2020	36%

9	9_2_1_G	Valor agregado de la industria manufacturera	DANE - Cuentas Nacionales	Flujo	\$103.59 7.983	\$58.783. 000	Millones de pesos	\$95.802.05 1	2020	92%
	9_4_1_P	Intensidad de emisiones de CO2 de las industrias manufactureras respecto a valor agregado de la industria manufacturera	Numerador: UPME - Balance Energético Colombiano (Consumo Industrial + Transformación sin Centrales térmicas) Denominador: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.	Acumulado	0,86	0,7	Gigagramos de CO2 equivalente / miles de millones de pesos	0	2021	100%
	9_5_1_G	Inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)	Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)	Flujo	0,8%	0,4%	Porcentaje	0,3%	2020	34%
	9_5_2_C	Tasa de solicitudes de patentes presentadas por vía nacional	Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)	Flujo	30	6,16	Tasa por cada 1.000.000 de habitantes	8	2021	27%
	9_5_3_P	Inversión pública en I & D de importancia para el crecimiento verde	Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)	Flujo	0,008	44,7% (2016)	Porcentaje	16,2%	2020	100%
	9_B_1_C	Porcentaje de cooperación Internacional en investigación y desarrollo (I+D)	Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)	Flujo	No Aplica	2,4%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	9_C_1_C	Porcentaje de Hogares con acceso a internet	DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	Flujo	100,0%	41,8%	Porcentaje	69,8%	2020	70%
	9_2_2_P	Ocupados en la industria manufacturera	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Flujo	4.062.66 6	2.608.39 1	Número	4.475	2019	0%
	9_C_1_P	Porcentaje de personas que usan Internet	DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	Acumulado	93,0%	55,9%	Porcentaje	72,8%	2022	100%

ODS 10

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
10	10_1_1_G	Tasa de crecimiento de los ingresos per cápita en el 40% de los hogares más pobres de la población	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Acumulado	3,5%	2,7%	Porcentaje	-19,3%	2020	0%

10	10_1_2_C	Coefficiente de GINI	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	0,48	0,522	Puntos	1	2022	0%
	10_2_1_C	Brecha de pobreza extrema urbano-rural	DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	0,0258	0,0323	Unidades	2	2022	100%
	10_4_1_P	Valor de ingresos laborales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)	DANE - Cuentas Nacionales	Flujo	35,0%	33,5%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.

ODS 11

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
11	11_1_1_P	Hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda	DNP DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	2,7%	6,7%	Porcentaje	4,0%	2021	68%
	11_1_2_P	Hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda	DNP DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	Reducción	7,0%	11,0%	Porcentaje	9,6%	2021	35%
	11_2_1_C	Vehículos Eléctricos	Ministerio de Transporte (RUNT)	Acumulado	600.000	1.695 (2018)	Número	4.259	2020	2%
	11_4_1_C	Miles de hectáreas de áreas protegidas	Parques Nacionales Naturales (PNN) - Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP)	Acumulado	30.620	23.617	Hectáreas	49.874	2023	100%
	11_5_1_P	Mortalidad nacional causada por eventos recurrentes	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) - Consolidado Atención de Emergencias	Reducción	80	88,6	Muertes	152	2022	0%
	11_5_2_P	Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) - Consolidado Atención de Emergencias	Reducción	890,82	989,79	Tasa por cada 100.000 habitantes	1.096	2022	0%
	11_6_1_P	Porcentaje de estaciones que cumplen con el objetivo intermedio III de las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en material particulado inferior a 2.5 micras (PM2.5)	IDEAM - Sistema de información sobre calidad de aire (SISAIRE)	Acumulado	70,0%	25,0%	Porcentaje	47,6%	2022	100%

11	11_7_1_P	Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que han sido tocados o manoseados sin su consentimiento	Ministerio de Salud y Protección Social - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Reducción	5,0%	9,4%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	11_7_2_P	Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que han sido tocadas o manoseadas sin su consentimiento	Ministerio de Salud y Protección Social - Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Reducción	8,0%	17,9%	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	11_B_1_C	Porcentaje de municipios y Departamentos con Planes de Ordenamiento Territorial (POD y POT) que incorporan el componente de cambio climático	DNP - Sistema POT Modernos	Acumulado	100,0%	0,0%	Porcentaje	0,1%	2018	0%
	11_B_2_C	Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Capacidad	32	5	Número	28	2022	85%
	11_B_3_C	Porcentaje de departamentos y ciudades capitales que incorporan criterios de cambio climático en las líneas instrumentales de sus planes de desarrollo	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Acumulado	50,0%	0,0%	Porcentaje	93,8%	2022	100%

ODS 12

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
12	12_3_1_C	Desperdicio de alimentos per cápita en consumo en hogares	DNP	Reducción	16,2	32,4 (2013)	Kilogramos	Nd.	Nd.	Nd.
	12_4_1_P	Residuos peligrosos aprovechados y tratados	IDEAM	Acumulado	2.806.130	210.132	Toneladas	2.645.289	2022	100%
	12_4_2_C	Porcentaje de equipos y desechos de policlorobifenilos (PCB) eliminados	IDEAM - Inventario Nacional de PCB	Acumulado	100,0%	9,2%	Porcentaje	28,4%	2021	100%
	12_4_3_C	Residuos de bombillas con mercurio aprovechadas o gestionadas	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)	Acumulado	7768	2228	Toneladas	8.196	2022	100%
	12_5_1_P	Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos	DANE - Cuentas Ambientales	Flujo	17,9%	8,6%	Porcentaje	8,7%	2016	48%
	12_B_1_C	Negocios verdes verificados	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Acumulado	12.630	144	Negocios	4.199	2022	100%

ODS 13

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
13	13_1_1_P	Mortalidad nacional causada por eventos recurrentes	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) - Consolidado Atención de Emergencias	Reducción	80	89	Muertes	152	2022	0%
	13_1_2_P	Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) - Consolidado Atención de Emergencias	Reducción	890,82	989,79	Tasa por cada 100.000 habitantes	1.096	2022	0%
	13_1_3_C	Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Capacidad	32	5	Número	28	2022	85%
	13_2_1_C	Reducción de emisiones totales de gases efecto invernadero	IDEAM	Reducción	0,2	0 (2010)	Porcentaje	Nd.	Nd.	Nd.
	13_2_2_C	Porcentaje de municipios y Departamentos con Planes de Ordenamiento Territorial (POD y POT) que incorporan el componente de cambio climático	DNP - Sistema POT Modernos	Acumulado	100,0%	0,0%	Porcentaje	0,1%	2018	0%
	13_2_3_C	Porcentaje de departamentos y ciudades capitales que incorporan criterios de cambio climático en las líneas instrumentales de sus planes de desarrollo	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Acumulado	50,0%	0,0%	Porcentaje	93,8%	2022	100%
	13_2_4_C	Planes sectoriales integrales de cambio climático formulados	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Capacidad	8	0	Planes	4	2022	50%

ODS 14

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
14	14_1_1_C	Porcentaje de estaciones de monitoreo de aguas marinas con categoría entre aceptable a óptima del Índice de calidad de Aguas Marinas (ICAM)	INVEMAR	Acumulado	30,0%	20,0%	Porcentaje	75,0%	2022	100%

14	14_5_1_P	Miles de hectáreas de áreas marinas protegidas	Parques Nacionales Naturales (PNN) - Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP)	Acumulado	13.250	7.892	Hectáreas	30.471	2023	100%
----	----------	--	--	-----------	--------	-------	-----------	--------	------	------

ODS 15

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
15	15_1_1_P	Miles de hectáreas de áreas protegidas	Parques Nacionales Naturales (PNN) - Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP)	Acumulado	30.620	23.617	Hectáreas	49.874	2023	100%
	15_1_2_P	Porcentaje de la superficie cubierta por bosque natural	IDEAM	Acumulado	51,1%	52,2%	Porcentaje	52,9%	2022	100%
	15_1_3_C	Pérdida anualizada de bosque natural	IDEAM	Reducción	0	124.035	Hectáreas	123.517	2022	0%
	15_1_4_C	Áreas en proceso de restauración	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Acumulado	1.000.000	408.134	Hectáreas	720.474	2022	100%
	15_2_1_C	Participación de la economía forestal en el PIB	DANE - Cuentas Nacionales	Flujo	1,5%	0,8%	Porcentaje	0,7%	2021	45%
	15_5_1_P	Proporción de especies críticamente amenazadas	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	Reducción	0,12	0,14 (2014)	Proporción	0	2021	0%
	15_5_2_P	Proporción de especies amenazadas	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	Stock	0,32	0,32 (2014)	Proporción	0	2021	100%
	15_5_3_P	Proporción de especies vulnerables	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	Capacidad	0,56	0,53 (2014)	Proporción	1	2021	0%

ODS 16

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
16	16_1_1_G	Tasa de homicidio	MinDefensa – Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO)	Reducción	16,4	26,5	Tasa por cada 100.000 habitantes	26	2019	8%

16	16_1_2_P	Tasa de víctimas directas de homicidio y de desaparición forzada registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV)	Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas (UARIV) - Registro Único de Víctimas (RUV)	Reducción	0	1,17	Tasa por cada 100.000 habitantes	1	2021	4%
	16_1_4_C	Tasa de violencia interpersonal	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF)	Reducción	209,61	263,06	Tasa por cada 100.000 habitantes	131	2022	100%
	16_10_1_C	Porcentaje de sujetos obligados incluidos en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) que avanzan en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) - Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	Acumulado	70,0%	0,0%	Porcentaje	58,3%	2021	100%
	16_3_1_C	Indemnizaciones otorgadas a víctimas del conflicto armado interno	Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas (UARIV) - INDEMNIZA	Acumulado	1.984.635	588.400	Indemnizaciones	1.414.116	2022	100%
	16_3_2_C	Víctimas con atención o acompañamiento psicosocial en modalidad individual, familiar, comunitaria y/o grupal	Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas (UARIV) - Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a la Víctimas (MAARIV)	Acumulado	1.462.500	84.913	Víctimas	23.616	2022	10%
	16_A_1_C	Entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de diseño, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos en materia de Derechos Humanos	Ministerio del Interior	Flujo	1.134	132	Entidades territoriales	305	2023	27%
	16_1_3_C	Tasa de victimización de hurto a personas (Porcentaje de hurto a personas)	DANE - Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana (ECSC)	Reducción	10,4%	11,6%	Porcentaje	4,8%	2020	100%

ODS 17

ODS	ID indicador	Nombre del Indicador	Fuente	Tipo de acumulación	Meta 2030	Línea base 2015	Unidad de medida	Último dato disponible		% Avance 2030
17	17_11_1_P	Exportaciones totales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)	DANE - Cuentas Nacionales	Flujo	16,1%	15,7%	Porcentaje	17,8%	2023	100%
	17_8_1_G	Porcentaje de personas que usan internet	DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	Acumulado	93,0%	56,0%	Porcentaje	72,8%	2022	100%

Anexo 4. Ficha caso de estudio Uribia



Fundación Alpina

El propósito de esta ficha es documentar un proyecto de desarrollo local comunitario que promueva la soberanía y la seguridad alimentaria y contribuya con la erradicación del hambre en la región (ODS 2: Hambre Cero).

Nombre del proyecto
• Fortalecimiento de capacidades productivas en familias wayuu de los corregimientos de Nazareth y Siapana (Municipio de Uribia).
Objetivo del proyecto
• Fortalecer agro sistemas productivos para la generación de ingresos y la autonomía alimentaria con comunidades wayuu de acogida de población migrantes y retornados en el corregimiento de Nazareth, Alta Guajira. Municipio de Uribí • Promover los sistemas productivos para lograr la autonomía y sostenibilidad de comunidades wayuu del corregimiento de Nazareth. • Implementar un sistema de comercialización, pertinente con el territorio. • Fortalecer Prácticas alimentarias saludables de vida. • Fortalecer la Gestión de Conocimiento.
Descripción del Proyecto
• El proyecto está enfocado en el fortalecimiento de la autonomía y sostenibilidad de los sistemas productivos de comunidades wayuu de la zona rural de la Alta extrema Guajira mediante la inclusión social y productiva que permita fortalecer el tejido social, el liderazgo, el trabajo solidario y comunitario para generar entornos de integración social y económico, lograr la inclusión económica y social a través del establecimiento de sistemas productivos integrales sostenibles, implementando actividades que contribuyen a mejorar la gobernabilidad territorial y la calidad de vida, a través del acceso al agua mediante pozos y sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de agua), huertas para la generación de ingresos, y unidades productivas avícolas. Se desarrollaron estrategias de sostenibilidad como la creación de grupos autogestionados de ahorro y crédito, que fomentaron el buen desarrollo de las unidades productiva. • Mediante estas actividades se promueve la integración socioeconómica y el mejoramiento de condiciones de vida. Las actividades se escalonarán al trabajo con las familias, sus unidades claniles y los territorios, fortaleciendo su tejido familiar y clanil, y los liderazgos de los jóvenes y mujeres participantes. Finalmente, el modelo implementado en el área productiva permite a las comunidades participantes integrarse a circuitos de comercialización locales con herramientas que garanticen su sostenibilidad cultural, ambiental y económica. • El proyecto se enmarca en las cuatro dimensiones de trabajo de la metodología Rassa de Fundación Alpina. • Producción sostenible: donde se desarrolla el fortalecimiento e identificación de procesos productivos comerciales sostenibles que permitan la generación de ingresos y contribuyan con la oferta de productos. • Prácticas alimentarias saludables: promueve el autoabastecimiento de los alimentos inocuos y de calidad como aporte fundamental a la seguridad alimentaria y nutricional. • Asociatividad: Los modelos de asociatividad que faciliten el acceso de los pequeños productores a los mercados de modo que puedan aumentar sus ingresos y fortalecer su representatividad local y regional.

- Enfoque de Género: Promueve acciones afirmativas que faciliten el reconocimiento y ejercicio de derechos, la posibilidad de elegir su propio proyecto de vida, la participación y la capacidad para tomar decisiones, entre otras capacidades.

Población beneficiaria (cobertura geográfica)

- El proyecto se desarrolla en la Alta Guajira en el municipio de Uribia el cual está conformado por veintiún (21) corregimientos, donde se encuentra el pueblo Wayuu, el más numeroso del país y diverso en dinámicas organizativa. Para el desarrollo del proyecto se contó con la participación de 230 familias wayuu, conformadas por 1062 personas, con la participación del 40% de Migrantes y retornados de Venezuela y 1000 estudiantes del internado de Nazareth En los corregimientos de: Nazareth, comunidades de Yuutou, Anuwou, Monte de Oro, Kayushpanao, Maluliru, Aiparao, Wantalu y Mochomana Guarerpa: Alaimapu y Anuwapaa, Siapana: Monserrate.

¿Cuáles fueron los criterios de priorización?

- Vocación productiva, mano de obra disponible, acceso al agua.

¿Cuál es el contexto socioeconómico de la población antes del inicio del proyecto?

- En la Guajira hay alta incidencia de las condiciones de pobreza y desigualdad. Su reducción no se ha producido al mismo ritmo con que lo hace el resto del país. Ramírez y otros (2016), en “Geografía económica, descentralización y pobreza multidimensional en Colombia”, señalan la existencia de una correspondencia entre pobreza multidimensional y ruralidad. En la medida en que una zona, área o región sea más rural y tenga menos relaciones con centros dinámicos de mercados, ella será más pobre. Es la consecuencia del aislamiento espacial y económico, situación que enfrenta en general La Guajira y de manera particular el municipio de Uribia y la Región de la Alta Guajira. Ello se evidencia a través de los indicadores sobre condiciones de pobreza multidimensional rural, en donde los más afectados son los territorios ocupados por los grupos indígenas, destacándose la incidencia en el municipio de Uribia (89,3%), lo que nos remite a percibir al Departamento como un territorio en donde persisten altas condiciones de desigualdad interétnicas. Una de las consecuencias es la alta tasa de mortalidad por desnutrición que en 2018 se ubicó en 45 muertes por cada 100.000 menores de cinco años, siendo 8,3 veces superior al promedio nacional (5,46). Esta realidad es vivida principalmente por los miembros de la etnia wayuu. Por los precarios niveles de ingresos que reciben los miembros de los hogares, la población se mantiene en condiciones de pobreza (9,9%) o en extrema pobreza.
- El departamento de la Guajira y principalmente la alta Guajira viene sufriendo del flagelo del hambre y la desnutrición desde hace muchos años, los largos periodos de sequía por falta de lluvias motivadas por el cambio climático potencializan estos factores, limitando la autoproducción de alimentos de las comunidades de la Alta Guajira; El 96% de la población del municipio de Uribia tiene necesidades básicas insatisfechas. La crisis venezolana en el pueblo wayuu, y especialmente para las comunidades ubicadas en zona de frontera, ha significado la disminución de productos básicos de la canasta familiar provenientes de ese país; la reducción de los ingresos de los wayuu trabajadores en condición pendular a ambos lados de la frontera; y un aumento significativo en la población en los territorios étnicos, debido al retorno de los wayuu de La Guajira Venezolana.

- Todos estos factores motivaron a desarrollar intervenciones significativas dadas las necesidades de sus comunidades, es por ello que en el año 2017 se decide poner en marcha un proyecto para el fortalecimiento productivo que contribuyera a mejorar la seguridad alimentaria de familias y estudiantes Wayuu en este departamento peninsular a través de la implementación de sistemas de producción auto sostenible de alimentos (pancoger), con ejercicios de comercialización de excedentes. Desarrollo de infraestructura productiva (soluciones de agua, sistemas de riego y bombeo con energía solar).

¿Qué estrategias se utilizaron para involucrar a la comunidad en el diseño y la implementación?

- Las comunidades participantes desde su selección iniciaron un proceso activo que va desde la firma de actas de compromisos y la planeación de las actividades. Los participantes son los protagonistas de la ejecución, desde fundación Alpina guiamos, acompañamos, orientamos el avance de metas que se van evaluando para dar inicio a una siguiente actividad y generar sinergias con el territorio y con los objetivos del proyecto.

¿El proyecto cuenta con algún componente innovador?

- El principal factor de innovación fue la manera de trabajar conjuntamente con los productores, partiendo del profundo respeto por sus conocimientos, su cultura, su cosmovisión, sus maneras de desarrollar la actividad productiva y sus costumbres en general, creando un dialogo participativo constante para llegar a acuerdos que aprovecharan el conocimiento ancestral y aquel que aporta la asistencia técnica y las nuevas tecnologías. Esto nos llevó a la transferencia tecnológica mediante la que se le instruyó al pequeño productor una forma diferente de trabajar y aprovechar sus recursos naturales, a través de la implementación de tecnologías como los sistemas de bombeo solar, sistemas de riego para optimizar el uso del agua, implementación de líneas productivas nuevas (línea avícola pollo y gallinas ponedoras) en el territorio para la generación de ingresos.
- Desarrollar módulos de capacitación acordes al contexto del territorio a través de la metodología de aprender haciendo, donde se generaron espacios de aprendizaje en doble vía, tanto de nuestro equipo de extensionista como de los productores que con sabiduría ancestral combinaron factores y encontraron convergencias para el desarrollo del proyecto de manera exitosa.

¿Cuáles fueron los principales desafíos y cómo se abordaron?

- El acceso a las comunidades fue un reto importante ya que la comunidad wayuu guarda ciertas prevenciones para dar entrada a sus territorios, este desafío logro abordarse de manera exitosa mediante el dialogo previo con lideres y autoridades y se fortaleció aún más con la presencia de miembros de la etnia y del territorio que forman parte del equipo de extensionistas.
- Otro de los retos a nivel productivo fue la presencia de plagas como insectos y la presencia de animales en las huertas como pájaros, reptiles y pequeños mamíferos. Soluciones como biopreparados, espantapájaros o la presencia de gatos, ayudaron a mitigar estos desafíos.

¿Cómo ha contribuido en la erradicación del hambre y la inseguridad alimentaria de la comunidad?

- El proyecto conjugó dos estrategias para promover la inclusión social y productiva de las familias beneficiadas, promoviendo procesos de desarrollo social que contribuyeran a la lucha contra la pobreza, la inseguridad alimentaria, el fortalecimiento del tejido. Estas estrategias fueron: la generación de capacidades productivas y empresariales en las familias participantes, y la promoción de la seguridad alimentaria involucrando a todos los miembros de la familia.
- Reducción del 18% en la percepción de inseguridad alimentaria de los participantes / Como resultado de las huertas agroecológicas (caseras o comunitarias) contribuimos a la seguridad alimentaria de los participantes manteniendo indicadores donde pasamos de 1 a 3 comidas al día con alimentos de alto valor nutricional y autoproducidos. Pasando de consumo de 3 a +7 productos.

¿Cuál fue el rol de otros actores como gobiernos locales, ONGs, el sector privado, etc, en el desarrollo y éxito del proyecto?

- OIM organización internacional para las migraciones aliado financiador a través del programa IPA (Inclusión para la Paz) Que busca cerrar significativamente la brecha de inclusión entre la población general y las poblaciones étnicas y el programa Estabilización y Emergencia, el cual desde el componente Emergencia brinda asistencia humanitaria integral a refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, y desde el componente de Estabilización, promueve la integración socioeconómica y el empoderamiento económico y cultural de refugiados y migrantes, colombianos retornados y comunidades de acogida.
- La Cancillería aliado financiador que busca fortalecer lazo entre el gobierno nacional y las comunidades wayuu. La embajada de Francia aliado financiador que busca fortalecer las comunidades indígenas wayuu de la alta Guajira a través de la implementación de proyectos de generación de ingresos.
- La fundación Alpina como Aliado ejecutor del proyecto el cual busca transformar la vida de familias, comunidades y organizaciones del sector rural del territorio.
- Las comunidades beneficiarias como principales protagonistas del desarrollo de los proyectos.
- Asociación KOWA como aliado estratégico en desarrollo de actividades comerciales
- El Internado de Nazareth como dinamizador local y eje fundamental para fortalecer escenarios de aprendizaje y llegar a los jóvenes para motivarlos en la recuperación de prácticas agropecuarias en comunidades Wayuu.

¿Se establecieron mecanismos de sostenibilidad para garantizar beneficios a la comunidad en el largo plazo?

- Se Consolidaron escenarios participativos como estrategia de formación y de inclusión productiva para generar cambios positivos en las comunidades indígenas, donde el conocimiento tradicional y prácticas ancestrales juegan un papel crucial sobre la soberanía alimentaria y por ende se convierten en la herramienta principal para generar ingresos promoviendo las buenas prácticas agrícolas y ganaderas, creando sistemas sostenibles, generando un dialogo de saberes entre las nuevas prácticas a integrar en la cultura, los usos, costumbres y la economía tradicional. Para esto se implementa estrategias de solución de agua para garantizar la producción los 365 del año, En el componente de agua se lograron los siguientes resultados:
- Se disminuye en un 70% el número de productores que no tenían acceso a agua.
- Aumento del 10% al 52% en el número de participantes que usan sistema de riego.
- Seis (6) de las nueve (9) comunidades tienen disponibilidad de agua 24 horas de los 7 días de la semana, los tres restantes cuentan con al menos 8 horas diarias los 7 días de la semana.
- La ruta de sostenibilidad planteada en el proyecto implica el desarrollo e implementación de nuestro Sistema de Extensión Rural RASSA (Ruralidad agroalimentaria sostenible y saludable)– donde priorizamos el Acompañamiento a las comunidades con equipos integrales multidisciplinarios, fomentado:

- Generación y fortalecimiento de capacidades previo entrega activos.
- Fortalecimiento de habilidades blandas
- Implementación de sistemas de producción sostenibles.
- Modelos asociativos auto gestionados funcionando.
- Circuitos cortos de comercialización establecidos.
- Voluntarios Multiplicadores y Líderes – Formación de formadores
- Actores identificados y articulados al proceso - Transferencia de conocimiento y acciones complementarias.

¿Cuáles fueron algunas lecciones aprendidas?

- La producción de alimentos en las comunidades Wayuu es posible mediante un modelo de trabajo productivo con enfoque diferencial, que contempla la productividad sostenible, prácticas agroecológicas, innovación tecnológica y reconversión ecológica, impactando directamente en la reducción de pobreza".
- La interiorización de la importancia del cuidado del ambiente por parte de las comunidades requiere de tiempo. En la medida que vean los beneficios de las prácticas agroecológicas, las preservarán en sus técnicas productivas.
- Las actividades culturales como Yanamas inciden en que la comunidad se sienta más comprometida y proactiva en la producción de alimentos y con el proyecto en general.
- Mediante la implementación de las huertas integrales, las mujeres han tenido un papel relevante en la economía del hogar y comunitaria. De esta manera se avanza en su empoderamiento y autonomía económica.
- Empoderar a las mujeres a través de la generación de espacios de participación que les permiten lograr autonomía económica y ejercer un rol de liderazgo y motivación dentro de la familia.

Recomendaciones para proyectos similares en otras comunidades.

- El trabajo con las comunidades requiere de un gran sentido social y de empatía que permita aportar con soluciones a los problemas encontrados, pero sin afectar o vulnerar las costumbres y tradiciones culturales de la comunidad intervenida.
- Es de vital importancia dar a conocer previamente y de forma muy clara a toda la población o comunidad en compañía de sus líderes el objetivo del programa a desarrollar, el alcance, los beneficios, compromisos, deberes y derechos de las partes involucradas.
- Definir conductos regulares para la comunicación que se transmitirá a la comunidad, de igual forma para la resolución de los conflictos que puedan llegar a presentarse.
- Las soluciones planteadas deben guardar una proporción equilibrada de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad, si bien se realizan mejoras técnicas o innovadoras deben desarrollarse de tal forma que la comunidad no lo asimile como una vulneración a su cultura.
- La estrategia del desarrollo de proyecto por fases facilita su autoevaluación, identificación de impactos, necesidades satisfechas y estrategias para la sostenibilidad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados: ¿El proyecto tiene algún impacto sobre otros ODS?

- ODS 1 - Fin de la pobreza (indicador: 1.2.1)
- ODS 2 - Hambre Cero (Indicadores 2.1, 2.3 y 2.4)
- ODS 5 - Igualdad de género (Indicadores: 5.1, 5.4, y 5.5)

ANEXO 5: INFORME MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL REPORTE NACIONAL VOLUNTARIO

CONTEXTO

Nos encontramos en la mitad del periodo establecido para alcanzar la implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, no nos encontramos en la mitad del logro de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente estamos enfrentándonos a una poli crisis (la guerra, tensiones comerciales y conflictos geopolíticos, migraciones, crisis climática y de pérdida de biodiversidad, entre otros) ralentizan el progreso de la agenda, generando desafíos para el logro de esta en los próximos 6 años.

El GSDR 2023 (ver cuadro 1) menciona que el progreso de los ODS en América Latina y el Caribe se ha visto altamente impactado por la pandemia del COVID-19 en comparación con otras regiones debido a la alta informalidad y el acceso desigual a las vacunas. Es evidente que la pandemia ha tenido graves consecuencias en poblaciones vulnerables.

CUADRO 1: INFORME MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE (GSDR POR SUS SIGLAS EN INGLES)

El Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (GSDR, por sus siglas en inglés) fue encomendado originalmente por los Estados miembros de las Naciones Unidas en el documento final de la "Río +20" I la conferencia sobre desarrollo sostenible de 2012, "El futuro que queremos". Tres años más tarde, como parte de la Agenda 2030, los Estados miembros reafirmaron la importancia del GSDR y en el año 2016 solicitaron que fuera laborado por un grupo independiente de científicos (IGS, por sus siglas en inglés). El primer informe se publicó en 2019 "El futuro es ahora: la ciencia al servicio del desarrollo sostenible". En septiembre de 2023 se publicó el segundo informe "Tiempos de crisis, tiempos de cambio, ciencia para acelerar las transformaciones para el desarrollo sostenible".

El IGS, designado por el secretario general de las Naciones Unidas para el GSDR 2023, estaba conformado por 15 expertos destacados de las ciencias naturales y sociales de países desarrollados y en desarrollo. El grupo actual está copresidido por la profesora Imme Scholz, de Alemania, y el profesor J. Jaime Miranda, de Perú.

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el Séptimo informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, realizó un análisis de las trayectorias hacia el logro de los ODS, donde identificó un leve retroceso respecto de los resultados de años anteriores (CEPAL, 2023b). Muestran horizontes de cumplimiento de las expectativas a 2030 solo el 34% de las series estadísticas (frente a un 41% en 2023), el 28% de los indicadores (31% en 2023) y el 22% de las metas (25% en 2023) que se han podido proyectar.

Persiste una marcada heterogeneidad entre indicadores y entre metas en cada uno de los Objetivos. En lo referente a alrededor del 30% de las series, el 39% de los indicadores y el 46% de las metas se continúa en la dirección correcta, pero se necesitaría acelerar el ritmo de avance para alcanzar los umbrales establecidos, mientras que en relación con el 36% de las series, el 33% de los indicadores y el 32% de las metas se registra un retroceso respecto del punto de partida en 2015, por lo que es urgente revertir la tendencia observada. La grafica 1 se presenta información más detallada, al identificarse, para cada ODS, el pronóstico de cumplimiento de sus metas a 2030, clasificadas según los colores del semáforo, lo que permite constatar la diversidad de situaciones de avance en relación con cada uno de los Objetivos y entre ellos.

América Latina y el caribe ha presentado un compromiso alto en la implementación de la Agenda 2030, todos los países de la región han establecido mecanismos institucionales para la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030. Así mismo 31 de los 33^[1] países de la región han presentado VNR en los foros políticos de alto nivel (HLPF por sus siglas en ingles). En 2024, ocho (8) países de la región planean presentar su VNR: Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Perú.

A pesar de estos avances y su compromiso, la región requiere de apoyo técnico e inversiones transformadoras que aceleren el progreso de la Agenda 2030.

Grafica 1: América Latina y el Caribe: metas de los ODS según la posibilidad de cumplimiento a 2030 y porcentaje de metas analizadas por ODS



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

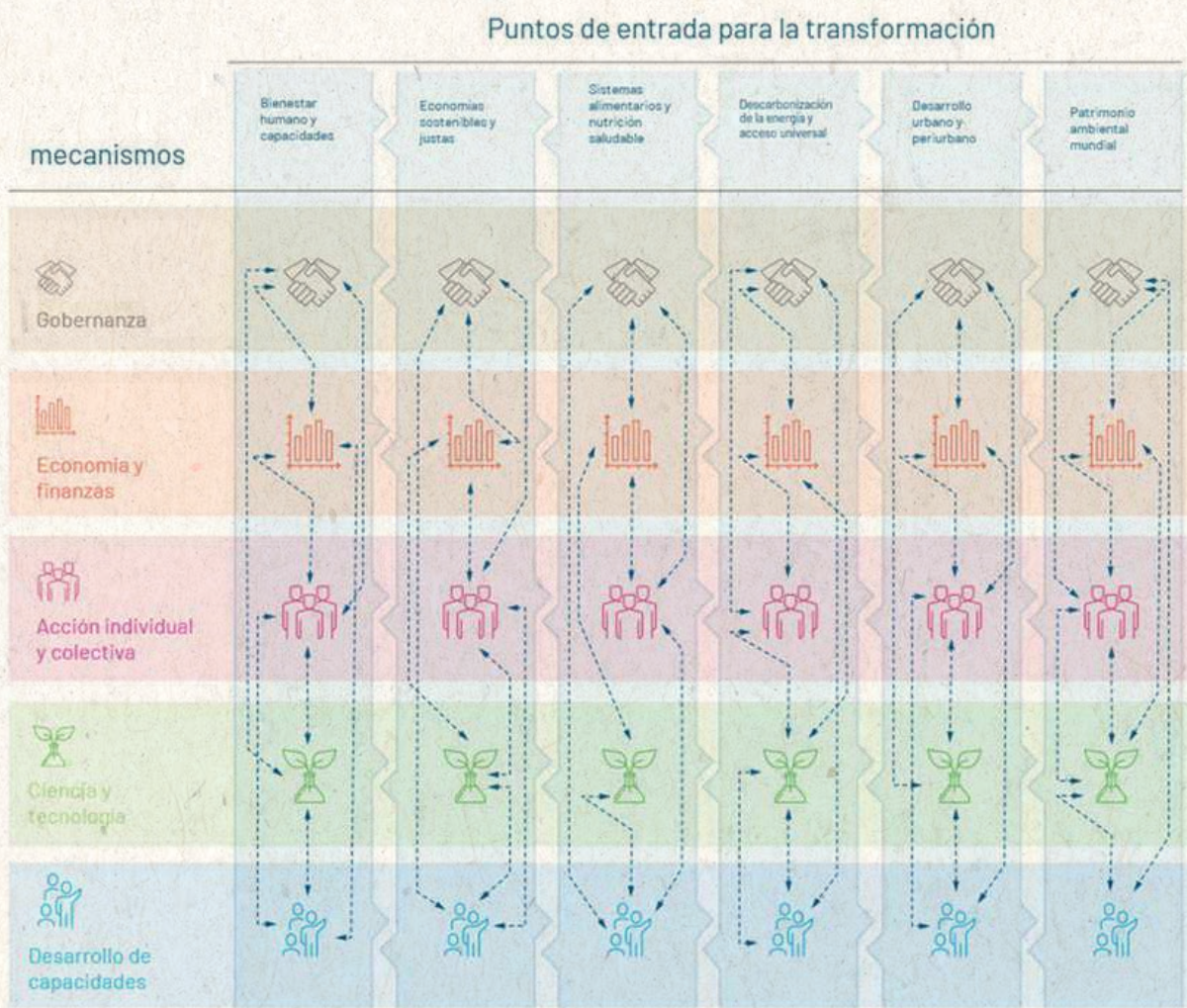
GSDR 2023 LLAMADO A LA ACCIÓN

Con el fin de acelerar y aumentar el progreso de los ODS, donde se requiere mayor ambición e intervenciones para acelerar el progreso y logro de los ODS. Tenido en cuenta la diversidad de los objetivos y sus metas se hace necesario contar con un enfoque integrado y coherente. Es por esto por lo que el GSDR 2023 motiva a los países a promover las transformaciones a través de 6 puntos de entrada [2]. Para impulsar estos puntos de entrada se sugieren 5 mecanismos de transformación como se muestra en la gráfica 2.

1. Excepto Haití y Guadalupe

2. Teniendo en cuenta el GSDR 2019

Grafica 2: América Latina y el Caribe: metas de los ODS según la posibilidad de cumplimiento a 2030 y porcentaje de metas analizadas por ODS



Source: Based on United Nations, Independent group of scientists, 2019.

Fuente adaptada GSDR 2023

CUADRO 2 PUNTOS DE ENTRADA Y MECANISMOS

Puntos de entrada para la transformación

1. Bienestar humano y capacidades – El bienestar material, los medios de vida, la salud, la seguridad, la educación, la voz y el empoderamiento, y el acceso a un ambiente sano hacen parte del bienestar humano. Cuando las necesidades básicas de las personas están satisfechas, estas desarrollan las capacidades para impulsar el progreso y la transformación mundial a nivel social, económico y medio ambiental.

2. Economías sostenibles y justas – El Desarrollo y las actividades económicas son valiosas debido a que pueden contribuir al bienestar humano, no como fines en sí mismos. El actual status quo está definido por una amplia desigualdad y la destrucción del medio ambiente. Para avanzar hacia un sistema económico que sea sostenible y justo, se hacen necesarios cambios relevantes en la forma de vida de las personas, su trabajo, así como la producción y el consumo.

3. **Sistemas alimentarios y nutrición saludable**– Actualmente el sistema alimentario es una compleja combinación de sistemas insostenibles incluyendo los sistemas agrícolas, de transformación, comercio, transporte y venta a nivel local, nacional, regional y global, donde se evidencian vínculos con problemas en la salud y equidad a nivel mundial. Para contar con sistemas alimentarios sostenibles se requiere cambios profundos en la producción, distribución, consumo, dietas, tratamiento de pérdidas y desperdicios, incluyendo la reutilización.

4. **Descarbonización de la energía y acceso universal**– La agenda 2030 tiene un compromiso universal con el acceso a la energía y la descarbonización de las fuentes de energía a nivel mundial. Abordar la crisis climática significa eliminar los combustibles fósiles. Así como poner fin al uso de combustibles contaminantes para la cocción.

5. **Desarrollo urbano y periurbano** –La mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades y se tiene una proyección de que la urbanización aumente. La equidad, salud, bienestar y la cohesión social se deberán priorizar en las áreas urbanas y periurbanas. Así mismo es importante revitalizar las áreas rurales.

6. **Patrimonio ambiental mundial** – Alcanzar la totalidad de la Agenda 2030 dependerá de la protección de los recursos: atmósfera, hidrosfera, océanos, criosfera, regiones polares, bosques, tierra, agua dulce y biodiversidad.

Mecanismos /palancas

Gobernanza proporciona a las instituciones y espacios para establecer una dirección general del desarrollo, fijar objetivos, coordinar acciones, establecer normatividades, rendición de cuentas, crear organizaciones especializadas y permitir el flujo de financiación a nivel nacional y subnacional.

Economía y finanzas las transformaciones requieren importantes de inversiones públicas y privadas, nuevas formas de apoyo internacional, incluyendo el alivio a la deuda y la intermediación financiera.

Ciencia y tecnología para lograr los ODS se requiere innovación social y tecnológica confiable, costo efectiva y escalable. Los países menos desarrollados necesitan un mejor acceso a tecnologías, así como cooperación en investigación y desarrollo de tecnología que respondan a sus necesidades.

Acción individual y colectiva el cambio social a gran escala suele lograrse desde el sentir y accionar de las personas, por medio de la organización social y la movilización desde la base. Transformaciones a nivel colectivo permiten unir a más personas a tomar acción y generar cambios de comportamiento.

Desarrollo de capacidades El GSDR 2023 adiciona como quinto mecanismo el “desarrollo de capacidades”, debido a que el desarrollo y la movilización de capacidades es esencial para la transformación. Las transformaciones estratégicas para los ODS dependen de una amplia gama de capacidades y habilidades a nivel individual, institucional y redes. Es por esto, que los países deben invertir en el desarrollo de estrategias, innovar, gestionar conflictos, identificar y superar barreras y enfrentar la crisis y posibles riesgos. Para este propósito, los gobiernos deben reorganizar la formulación de políticas y la administración pública para mejorar la coordinación en todos los niveles de gobierno, así como la integración de políticas de múltiples ámbitos y objetivos que estén interrelacionados con los ODS. El GSDR 2023 identifica un número de áreas para el desarrollo de capacidades las cuales puede apoyar el proceso de transformación, estas son: i) dirección estratégica y prospectiva, ii) innovación y generación de nuevas alternativas, iii) dirección, compromiso y negociación, iv) identificación y superación de obstáculos, v) aprendizaje y resiliencia.

El GSDR 2023 recomienda a los estados miembros de Naciones Unidas establecer el marco de transformación para acelerar la acción en el 2024, este marco lo constituyen seis elementos y debe combinar la acción local con la cooperación internacional donde se reflejen los contextos, necesidades, aspiraciones y capacidades. (ver cuadro 3)

CUADRO 3 MARCO PARA LA TRANSFORMACIÓN ACCELERADA

Este marco contempla 6 elementos:

1. Planes nacionales de acción transformadora acelerada deberán basarse en la ciencia y en procesos inclusivos sobre el contexto local.
2. Planificación local y específica de los sectores como insumo para los planes nacionales.
3. Iniciativas a través de la Agenda de Acción de Addis Abeba o de otro modo aumentar el espacio fiscal, incluidas las reformas fiscales, la reestructuración y el alivio de la deuda y un mayor compromiso de las instituciones financieras internacionales para la implementación de los ODS.
4. Invertir en datos relacionados con los ODS, herramientas de base científica y aprendizaje político, prestando atención a llenar vacíos de información sobre los ODS.
5. Establecer asociaciones para fortalecer la interfaz ciencia-política-sociedad.
6. Invertir en medidas para mejorar la rendición de cuentas de los gobiernos y otras partes interesadas.

El GSDR 2023 anima a los países a desarrollar los Planes Nacionales de Acción Transformadora Acelerada para coordinar los esfuerzos en materia de ODS con los gobiernos locales, los sectores y las entidades. Los planes nacionales deben perseguir acciones en las que los indicadores de los ODS inviertan las tendencias negativas y se basen en los esfuerzos sinérgicos. Los planes deben identificar claramente los obstáculos en cada punto de entrada y en cada fase de transformación. La acción debe basarse en enfoques inclusivos y de múltiples partes interesadas y tener en cuenta los compromisos globales de otros compromisos, como el Acuerdo Climático de París, el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, así como el Marco de Sendai.

VNR 2024 COLOMBIA

En Colombia, la Agenda 2030 ha influido en la política pública del país de dos maneras: por un lado, en hacer visible algunos temas que, antes de su promulgación, no recibían suficiente atención de los tomadores de decisiones, ni de otros actores como el sector privado, la academia o la sociedad civil. Por otro lado, dada la importancia de los ODS y el protagonismo de Colombia en la definición e impulso de la Agenda 2030, el país ha diseñado una institucionalidad en torno a la implementación de los ODS vinculando las acciones del Estado, materializadas en políticas públicas para el cumplimiento de estas metas.

Colombia, al igual que muchos otros países del mundo, se enfrenta a varios retos que se encuentran interconectados. La implementación de los ODS es prioritaria pero también lo es el abordaje de la crisis del clima, de la biodiversidad y, los impactos de estas. En consecuencia, es necesario un enfoque coherente que supere las barreras comunicativas y de implementación.

Bajo este marco, Colombia considera relevante el llamado a la acción y la identificación de posibles transformaciones que permitan el cumplimiento de los ODS. En este sentido, teniendo en cuenta el enfoque ODS 2 del VNR de Colombia, se ve una relación directa con el eje para la transformación “sistemas alimentarios y nutrición saludable” definido en el GSDR, es por esto por lo que en la siguiente tabla se evidenciar de manera resumida los hallazgos, conclusiones y recomendaciones para los mecanismos de gobernanza, economía y finanzas, acción individual y colectiva del VNR 2024 en Colombia [3].

Tabla de hallazgos, conclusiones y recomendaciones para el eje de transformación de sistemas alimentarios y nutrición saludable del GSDR		
Hallazgos	Conclusiones	Recomendaciones
Gobernanza		
Fragmentación en la Gobernanza: en el caso colombiano, se identifica que la gobernanza de los sistemas agroalimentarios se encuentra fragmentada, sin una concepción sistémica en su abordaje. Cada componente opera bajo instituciones y resultados sectoriales sin un propósito común hacia sistemas sostenibles, lo que lleva a poca correlación entre la formulación de políticas en sectores como agua, tierra y alimentos	Enfoque multisectorial: la gobernanza de los sistemas agroalimentarios implica un enfoque multisectorial y participativa, involucrando a diversos actores desde el nivel local hasta la sociedad civil, para desarrollar estrategias integrales que aborden los desafíos de manera holística.	Desarrollar un Marco de Gobernanza Integral: es fundamental establecer un marco de gobernanza integral que permita coordinar las acciones de los diferentes actores involucrados en los sistemas agroalimentarios. Este marco debe promover la colaboración intersectorial y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones
Necesidad de Coordinación Armónica: se destaca la importancia de avanzar hacia una gobernanza más adaptada a las condiciones y funcionalidad de los sistemas agroalimentarios sostenibles, abordándola desde un enfoque sistémico que permita una coordinación armónica de funciones, posibilidades y actores de cada componente. Esto implica abordar integralmente los componentes alrededor de la alimentación desde una perspectiva de resultados esperados	Coordinación y participación: se necesitan espacios técnicos fortalecidos a nivel departamental y municipal, con mayor articulación y participación de la sociedad civil en la discusión sobre la gobernanza territorial de los sistemas agroalimentarios, avanzando hacia una mayor coordinación y participación en la toma de decisiones.	Fomentar la Investigación y Educación Alimentaria: se recomienda fomentar la investigación y la educación alimentaria para mejorar la producción, distribución y consumo de alimentos de manera sostenible. Esto incluye promover la formación en prácticas agrícolas sostenibles y en nutrición para garantizar una alimentación saludable para todos.

3. No incluyen las palancas/ mecanismos de ciencia y tecnología y desarrollo de capacidades debido a la falta de hallazgos, conclusiones y recomendaciones

Desafíos en la Producción y Distribución: se identifican desafíos en la producción agrícola concentrada en algunas regiones del mundo, el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria, la distribución desigual de alimentos que acentúa la desigualdad en el derecho a la alimentación adecuada, la desigual distribución de cantidad y calidad de alimentos, y las limitaciones de los sistemas agroalimentarios para evitar y enfrentar crisis	Transformación como pacto nacional: la transformación de los sistemas agroalimentarios debe ser un pacto de país que comprometa acciones multiactor y multinivel hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con especial atención a las necesidades de sistemas más sostenibles, diversificados, descentralizados e inclusivos.	
Economía y finanzas		
Recursos para Alcanzar las Metas: se destaca la importancia del financiamiento para alcanzar las metas relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, Hambre Cero. Se menciona que el Gobierno de Colombia ha destinado recursos para programas relacionados con la reducción del hambre, equivalente a aproximadamente el 1.25% del presupuesto total, lo que representa alrededor de 4 billones de COP anuales.	Importancia de la Inversión Prioritaria: es fundamental que el Gobierno de Colombia priorice la inversión en programas y acciones destinados a reducir el hambre y la malnutrición en el país. Asegurar un financiamiento adecuado y sostenible para iniciativas relacionadas con la seguridad alimentaria es esencial para lograr avances significativos en este ámbito.	Necesidad de Estrategias de Financiamiento Innovadoras: ante los desafíos económicos y financieros que enfrenta Colombia en relación con la seguridad alimentaria, es crucial explorar y desarrollar estrategias de financiamiento innovadoras. Estas estrategias pueden incluir mecanismos de financiamiento público-privado, incentivos económicos para prácticas agrícolas sostenibles y programas de apoyo financiero dirigidos a pequeños productores.
Marco Integrado de Financiamiento para los ODS (INFF): se menciona la iniciativa del Marco Integrado de Financiamiento para los ODS, apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como un mecanismo para mapear los recursos dirigidos al desarrollo sostenible en Colombia y generar recomendaciones para la priorización del gasto y la movilización de recursos adicionales. A través de este marco, se han identificado los recursos destinados por el Gobierno nacional para financiar el avance del ODS 2.	Impacto de la Pandemia y Regresión Económica: la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en los avances socioeconómicos de Colombia, equiparando las condiciones actuales a las de una década atrás. Ante esta regresión, es crucial implementar políticas de recuperación económica integrales que no solo enfoquen en la reactivación del crecimiento, sino también en el fortalecimiento de los sistemas de protección social para mitigar el aumento de la inseguridad alimentaria y el hambre, especialmente entre los grupos más vulnerables.	Gestión Eficiente de los Recursos: es crucial que se gestione de manera eficiente y transparente los recursos financieros destinados a la seguridad alimentaria en Colombia. Esto implica establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar que los fondos se utilicen de manera efectiva y que contribuyan a la mejora de la situación alimentaria en el país.

Priorización del Gasto: se resalta la importancia de priorizar el gasto en programas y acciones que contribuyan a la reducción del hambre y la malnutrición en el país. Se menciona que las metas 2.1 (Poner fin al hambre) y 2.2 (Eliminar la malnutrición) son las que reciben más recursos, mientras que otras metas relacionadas con la productividad agrícola y el acceso a mercados de alimentos reciben menos financiación.		Invertir en Infraestructura Agrícola Sostenible: se recomienda realizar una inversión significativa en infraestructura agrícola sostenible para mejorar las condiciones de producción, almacenamiento y distribución de alimentos en las zonas rurales de Colombia. Esto incluye el desarrollo de vías terciarias, sistemas de riego y drenaje, centros de acopio, almacenamiento y electrificación rural, priorizando aquellas regiones con alto potencial agrícola y altos índices de pobreza rural.
Acción individual y colectiva		
Impacto Positivo en la Salud y Nutrición: la participación social y comunitaria ha tenido un impacto significativo en la salud de las comunidades, promoviendo la participación, la articulación institucional y la conciencia sobre la importancia de la salud y la nutrición. Esto ha contribuido a mejorar el acceso a servicios de salud y nutrición, especialmente para los grupos más vulnerables como los niños.	Fortalecimiento del Capital Social: la participación activa de la comunidad en programas de seguridad alimentaria fortalece el capital social a través de la cooperación, la reciprocidad y la creación de redes de apoyo. La colaboración entre los miembros de la comunidad en iniciativas de seguridad alimentaria promueve la integración social, la confianza en las instituciones y el bienestar comunitario.	Impacto en la Salud y Nutrición: fortalecer la participación social y comunitaria para continuar concienciando sobre la importancia de una alimentación adecuada y mejorar el acceso a servicios de salud y nutrición. Esto contribuye significativamente a mejorar la salud y la nutrición de los miembros de la comunidad, especialmente de los grupos más vulnerables.
Inclusión Económica y Social: La participación social y comunitaria también se asocia con iniciativas dirigidas a lograr la inclusión económica y social, fortaleciendo la autonomía de las comunidades y el tejido social. Proyectos como el fortalecimiento de capacidades productivas en comunidades vulnerables demuestran cómo la participación activa puede generar cambios positivos y duraderos en la realidad familiar y personal de los beneficiarios.	Empoderamiento Comunitario: La participación social y comunitaria es fundamental para empoderar a las comunidades, especialmente a través de programas y políticas que promueven la participación activa en la planificación e implementación de iniciativas de seguridad alimentaria. Este empoderamiento fortalece la capacidad local para abordar de manera sostenible los desafíos de la inseguridad alimentaria y promueve el desarrollo propio de las comunidades.	

Referencias

- Acemoglu, D., García-Jimeno, C., & Robinson, J. A. (2015). State capacity and economic development: A network approach. *American Economic Review*, 105(8), 2364-2409. doi: 10.1257/aer.20140044
- Acosta, O. (2022). *¿Por qué Colombia persiste en invertir tan poco en investigación y desarrollo?* Observatorio de la Universidad Colombiana. <https://www.universidad.edu.co/por-que-colombia-persiste-en-invertir-tan-poco-en-investigacion-y-desarrollo-orlando-acosta-nov-22/>
- Adane, A. A., Mishra, G. D., & Tooth, L. R. (2018). Maternal preconception weight trajectories, pregnancy complications and offspring's childhood physical and cognitive development. *Journal of Developmental Origins of Health and Disease*, 9(6), 653-660. doi: 10.1017/S2040174418000570
- Akena, K. F. (2023). Covid-19: Morals over empathy in the misuse of public funds. A case of Uganda in comparison with selected east African states. *Journal of Anti-Corruption Law*, 6. <https://doi.org/10.14426/jacl.v6i.1272>
- Almond, D., & Currie, J. (2011). Killing me softly: The fetal origins hypothesis. *Journal of Economic Perspectives*, 25(3), 153-172. doi: 10.1257/jep.25.3.153
- Álvarez, M. D. (2020). Forests in the time of violence: conservation implications of the Colombian war. *Journal of Sustainable Forestry*, 16, 47-68. doi: 10.1300/j091v16n03_03
- Anik, A., Manjunatha, A., & Bauer, S. (2013). Impact of farm level corruption on the food security of households in Bangladesh. *Food Security*, 5, 565-574. doi: 10.1007/s12571-013-0282-8
- Ayala-García, J. y Ospino-Ramos, K. (2023). Desastres naturales en Colombia: un análisis regional. *Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana*, 317, 1-24. *Repositorio Banco de la República*. <https://doi.org/10.32468/dtseru.317>
- Barker, D. J. (1990). The fetal and infant origins of adult disease. *BMJ*, 301(6761), 1111. doi: 10.1136/bmj.301.6761.1111
- Barrett, C. B. (2010). Measuring food insecurity. *Science*, 327(5967), 825-828.
- Becerra, B. (2023). La participación de las mujeres en cargos directivos y decisorios solo ha llegado a 39%. *La República*. <https://www.larepublica.co/especiales/dia-de-la-mujer-2023/la-participacion-de-las-mujeres-en-los-cargos-directivos-y-decisorios-es-de-solo-39-3562905>
- Black, R. E., Allen, L. H., Bhutta, Z. A., Caulfield, L. E., de Onis, M., Ezzati, M., Mathers, C., & Rivera, J. (2013). Maternal and child undernutrition: Global and regional exposures and health consequences. *The Lancet*, 371(9608), 243-260. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61690-0
- Bonet-Morón, J. y Hahn-De-Castro, L. (2017). La mortalidad y desnutrición infantil en La Guajira. *Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana*, 255. *Repositorio Banco de la República*.
- Buriticá, A., Nasner, H., Rivera, T. y Andrade, R. (2023). *Sistemas alimentarios en Colombia: ¿Coherencia en las políticas de agua, tierra y alimentos?* CGIAR, CIAT y Alliance Biodiversity.
- Caicedo, E. (2022). ¿Dónde están y qué hay en las nuevas áreas marinas protegidas de Colombia? *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/vida-medio-ambiente/areas-marinas-protegidas-de-colombia-donde-esta-y-que-hay-alli-684049>

- Candel, J. (2014). Food security governance: a systematic literature review. *Food Security*, 6, 585-601. <https://doi.org/10.1007/s12571-014-0364-2>
- Casanova, H. (2019). *Las patentes como indicadores de innovación tecnológica*. CAF. <https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2019/08/las-patentes-como-indicadores-de-innovacion-tecnologica/>
- Case, A., & Deaton, A. (2017). Mortality and morbidity in the 21st century. *Brookings Papers on Economic Activity*, 397-476. <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/08/case-textsp17bpea.pdf>
- Chadid, M. A., Dávalos, L. M., Molina, J., & Armenteras, D. (2015). A Bayesian spatial model highlights distinct dynamics in deforestation from coca and pastures in an Andean biodiversity hotspot. *Forests*, 6(11), 3828-3846. <https://doi.org/10.3390/f6113828>
- Chilton, M., Rabinowich, J., Council, C., & Breaux, J. (2009). Witnesses to hunger: participation through photovoice to ensure the right to food. *Health and human rights*, 11(1), 73-85. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20845852/>
- Chodzko-Zajko, W. J., Proctor, D. N., Fiatarone Singh, M. A., Minson, C. T., Nigg, C. R., Salem, G. J., & Skinner, J. S. (2009). American College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41(7), 1510-1530. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181a0c95c
- CODS. (2023). *Índice ODS 2022 para América Latina y el Caribe*. Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. <https://cods.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2023/11/Indice-ODS-2022-para-America-Latina-y-el-Caribe-3.pdf>
- Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. *Oxford Economic Papers*, 56(4), 563-595. <http://www.jstor.org/stable/3488799>
- Congreso de Colombia. (2020). Ley 2069. Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. *Diario Oficial* 51.544, diciembre 31 de 2020. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966>
- Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia - Departamento Nacional de Planeación [Conpes]. (2021). *Política Nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques*. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4021.pdf>
- Contreras, D., Voets, A., Junghardt, J., Bhamidipati, S., & Contreras, S. (2020). The Drivers of Child Mortality During the 2012-2016 Drought in La Guajira, Colombia. *International Journal of Disaster Risk Science*, 11, 87-104. <https://doi.org/10.1007/s13753-020-00255-0>
- DANE. (2016). *Ficha técnica Sistema de Información del Medio Ambiente*. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/Sima/68-Saneamiento-mejorado/Poblacion-con-acceso-a-metodos-de-saneamiento.pdf>
- DANE. (2023). *Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES) 2023*. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/escala-de-experiencia-de-inseguridad-alimentaria-fies-2022>
- DANE. (2024). *Base de datos indicadores ODS nacionales*. <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiYzdjMjA1YTctMGM4Ny00NGE4LThiMzMtNjQzOTljMjkzZGFliiwidCI6IjBkMWRIMzRkLWFMNDktNGJmNS1iOGVILTJmM2M0NGNIN-zk0MlslmMiOjR9>
- DANE - DNP. (2018). *Ficha técnica de indicadores Objetivos de Desarrollo Sostenible Conpes 3918*. <https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/11/ODS11-Indicadores-nacionales/1151P-Mortalidad-nacional-causada-por-eventos-recurrentes.pdf>

- Daniels, J. (2017). Colombia fails to tackle malnutrition in Indigenous children. *The Lancet*, 389(10064), 23-24. doi: 10.1016/S0140-6736(16)32599-5
- Datosmacro.com. (2023). *Desciende las exportaciones en Colombia*. <https://datosmacro.expansion.com/comercio/exportaciones/colombia>
- De Zubiría, J. (2022). Una misión para mejorar la calidad de la educación en Colombia. *El Espectador*. https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/julian-de-zubiria-samper/una-mision-para-mejorar-la-calidad-de-la-educacion-en-colombia/#google_vignette
- DNP y G-exponencial. (2015). *Informe de Resultados de la Evaluación Institucional y de Resultados de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PNSAN-. Producto 4*. DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/138_InformeFinal.pdf
- Duque-Escobar, G. (2024). Ganadería y agricultura regenerativa. *Godues*. <https://godues.wordpress.com/2024/01/15/ganaderia-y-agricultura-regenerativas/>
- Dwyer, J. (2006). Good evidence exists that early nutrition affects key risk factors for chronic degenerative diseases of middle and later life, such as osteoporosis and cardiovascular disease. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 83(2).
- Echeverri-Gent, J. (1992). Public participation and poverty alleviation: The experience of reform communists in India's West Bengal. *World Development*, 20(10), 1401-1422. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(92\)90063-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90063-2)
- Edward, H. G., & Evers, S. (2001). Benefits and barriers associated with participation in food programs in three low-income Ontario communities. *Canadian Journal of Dietetic Practice and Research*, 62(2), 76-81. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11524050/>
- Erbaugh, J. T., Pradhan, N., Adams, J., Oldekop, J. A., Agrawal, A., Brockington, D., Pritchard, R., & Chhatre, A. (2020). Global forest restoration and the importance of prioritizing local communities. *Nature Ecology & Evolution*, 4(11), 1472-1476. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-01282-2>
- Fondo Nacional de Turismo [Fontur]. (2022). *Recuperación de la economía, optimismo para el sector turismo*. <https://fontur.com.co/es/comunicados/recuperacion-de-la-economia-optimismo-para-el-sector-turismo?q=es/comunicados/recuperacion-de-la-economia-optimismo-para-el-sector-turismo>
- Food and Agriculture Organization [FAO]. (2017). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2017. Building resilience for peace and food security*. FAO.
- Food and Agriculture Organization [FAO]. (2018). *Sustainable food systems. Concept and framework*. FAO.
- Georgieff, M. K. (2007). Nutrition and the developing brain: Nutrient priorities and measurement. *American Journal of Clinical Nutrition*, 85(2), 614S-620S. doi: 10.1093/ajcn/85.2.614S
- Grantham-McGregor, S., Cheung, Y. B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., & Strupp, B. (2007). Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *The Lancet*, 369(9555), 60-70. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60032-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60032-4)
- Grupo de Investigación Xué Semillero de Investigación Barión. (2020). *Estado de la cobertura eléctrica y las Zonas No Interconectadas en la Región Central*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. <https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/ESTADO-DE-LA-COBERTURA-ELECTRICA-Y-LAS-ZONAS-NO-INTERCONECTADAS-EN-LA-REGIO%CC%81N-CENTRAL-3-1.pdf>

- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (1998). Does corruption affect income inequality and poverty? *Economics of Governance*, 3, 23-45. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9876.pdf>
- Hales, C. N., & Barker, D. J. (2001). The thrifty phenotype hypothesis. *British Medical Bulletin*, 60, 5-20. doi: 10.1093/bmb/60.1.5
- Headey, D. (2023). The economic impacts of child malnutrition in Rwanda. *Applied Economics*, 13(1), 7-17.
- Heo, J., Krishna, A., Perkins, J. M., Lee, H. Y., Lee, J. K., Subramanian, S. V., & Oh, J. (2020). Association of childhood physical and cognitive development with cluster of risk factors for non-communicable diseases in Indian children. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1), 182.
- Husted, B. (1999). Wealth, Culture, and Corruption. *Journal of International Business Studies*, 30, 339-359. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490073>
- Infobae. (2023). Anato explica el porqué aún existen dificultades en el turismo de Colombia. *Infobae*. <https://www.infobae.com/colombia/2023/07/07/anato-explica-el-porque-aun-existen-dificultades-en-el-turismo-de-colombia/>
- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [Icfes]. (2024). *Pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9° Generalidades del examen frente al ODS4*. Icfes. https://www.icfes.gov.co/saber_3579
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [Ideam]. (2023). *Ecosistemas*. <http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/inventario-forestal-nacional>
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis [Invemar]. (2024). *Presupuesto General*. <https://www.invemar.org.co/presupuesto-general>
- Khotimah, H., Rahmawati, W., Dewi, M., Puspitasari, D. A., & Samichah, S. (2023). The impact of stunting on physical health and productivity in adulthood. *Caring Journal of Public Health and Management*, 3(1), 1-10.
- Kim, A. Y., Lee, J. K., Kim, S., Choi, J., Song, J., & Chae, S. (2020). Relationship between sarcopenia and postural dysfunction in adults of a wide age range. *PLoS ONE*, 15(5).
- La Nota Económica. (2024). Pobreza monetaria en Colombia: ¿seguimos a la baja o repuntamos? *La Nota Económica*. <https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/pobreza-monetaria-en-colombia-seguimos-a-la-baja-o-repuntamos/>
- Liu, J., Raine, A., Venables, P. H., & Mednick, S. A. (2016). Malnutrition at age 3 years and externalizing behavior problems at ages 8, 11, and 17 years. *American Journal of Psychiatry*, 161(11), 2005-13. doi: 10.1176/appi.ajp.161.11.2005
- Mabli, J., & Ohls, J. (2015). Supplemental Nutrition Assistance Program participation is associated with an increase in household food security in a national evaluation. *The Journal of Nutrition*, 145(2), 344-51. doi: 10.3945/jn.114.198697
- Mensah, F. K., & Kiernan, K. E. (2011). Maternal general health and children's cognitive development and behaviour in the early years: Findings from the Millennium Cohort Study. *Child, Care, Health and Development*, 37(1), 44-54. doi: 10.1111/j.1365-2214.2010.01150.x
- Mollier, L., Seyler, F., Chotte, J.-L., & Ringler, C. (2017). *SDG 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*. Consejo Internacional para la Ciencia. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-10/010070608.pdf
- Moreno, M. A. (2021). Producción y consumo responsables. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/especiales/produccion-y-consumo-responsables/>

- Núñez, J. (Coord.). (2022). *Diagnóstico multidimensional sobre las desigualdades en Colombia*. Fedesarrollo. <https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/4338>
- Ocampo, J., Penagos-Concha, A., & Quesada-Jiménez, M. (2022). *New Institutional Arrangements to Address the Distributional Implications of a Transition to Healthy, Inclusive and Sustainable Food Systems*. Food System Economics Commission.
- Park, D. C., & Bischof, G. N. (2013). The aging mind: Neuroplasticity in response to cognitive training. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 15(1), 109-119. doi: 10.31887/DCNS.2013.15.1/dpark
- Penagos, A. y Quesada, C. (2024). *Gobernanza de los sistemas agroalimentarios con enfoque en Colombia. Una aproximación*. Cepal.
- Pico, R., Matamoros, S., & Bernal, J. (2021). Food and Nutrition Insecurity in Venezuelan Migrant Families in Bogotá, Colombia. *Front. Sustain. Food Syst. Sec. Agro-Food Safety*, 5. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.634817>
- Prem, M., Saavedra, S. & Vargas, J. F. (2020). End-of-conflict deforestation: Evidence from Colombia's peace agreement. *World Development*, 129, 104852. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104852>
- Programa Mundial de Alimentos [WFP]. (2023). *Evaluación de seguridad alimentaria a migrantes y comunidades de acogida en Colombia*. <https://es.wfp.org/publicaciones/evaluacion-de-seguridad-alimentaria-migrantes-y-comunidades-de-acogida-en-colombia>
- Ramirez, D., & Haas, S. A. (2022). Windows of vulnerability and pathways of resilience to early-life malnutrition: Long-term effects of early-life malnutrition on physical health, human capital, and socioeconomic outcomes in adulthood. *Population and Development Review*, 48(1), 5-34.
- Redacción Especiales. (2023). Mayor presencia e indemnizaciones históricas: hitos para honrar a las víctimas. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/contenido-patrocinado/mayor-presencia-e-indemnizaciones-historicas-hitos-para-honrar-a-las-victimas/>
- RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (2023). *Superar el hambre desde los territorios. Recomendaciones para incluir el derecho a la alimentación en los planes de desarrollo en Colombia*. RIMISP.
- Sen, A. (2000). *Social exclusion: Concept, application, and security*. Office of Environment and Social Development Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29778/social-exclusion.pdf>
- Serra, M. E. (2022). Nutritional deficit in early childhood and its impact on cognitive development. *Archivos Argentinos de Pediatría*, 120(6), 365-373.
- Shrestha, M., Perry, K. E., Thapa, B., Adhikari, R., & Weissman, A. (2022). Impact of stunting, wasting, and underweight on early childhood development: Evidence from a cross-sectional study in Nepal. *Maternal & Child Nutrition*, 18(1).
- Shrimpton, R., & Rokx, C. (2012). *The double burden of malnutrition: A review of global evidence. Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper*. World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/905651468339879888/The-double-burden-of-malnutrition-a-review-of-global-evidence>
- Silva, Á. (2023). *Colombia se sumó a la Red de Inventarios Forestales Nacionales de América Latina y el Caribe*. FAO. <https://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/es/c/1666078/>
- Smith, A. D., Smith, S. M., de Jager, C. A., Whitbread, P., Johnston, C., Agacinski, G., Oulhaj, A., Bradley, K. M., Jacoby, R., & Refsum, H. (2018). Homocysteine-lowering by B vitamins slows the rate of accelerated brain atrophy in mild cogni-



tive impairment: A randomized controlled trial. *PLoS ONE*, 5(9), e12244. doi: 10.1371/journal.pone.0012244

Solano-P., A. (2023). *Programa ciudades biodiversas y resilientes (CBR) (propuesta)*. Minambiente. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/SisPT/Documento%20Programa%20Ciudades%20Biodiversas%20y%20Resilientes.pdf>

Trujillo, J. (2023). Colombia se ubicó en el último lugar de países de la OCDE en cobertura de internet. *La República*. <https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-se-ubico-en-el-ultimo-lugar-de-paises-de-la-ocde-en-cobertura-de-internet-3620379#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20Organizaci%C3%B3n%20para%20la,tiene%20acceso%20a%20este%20servicio>

Unidad para las Víctimas. (2024). Contrate de resultados de la cuarta encuesta nacional de verificación.

Walker, S. P., Wachs, T. D., Gardner, J. M., Lozoff, B., Wasserman, G. A., Pollitt, E., & Carter, J. A. (2007). Child development: Risk factors for adverse outcomes in developing countries. *The Lancet*, 369(9556), 145-157.

Wallenborn, J. T., Levine, G. A., Carreira dos Santos, A., Grisi, S., Brentani, A., & Fink, G. (2021). Breastfeeding and complementary feeding practices are associated with child growth and development outcomes in the Brazilian Amazon. *Pediatrics*, 147(5). doi: 10.1542/peds.2020-008029

World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. World Bank. doi: 10.1596/978-1-4648-0950-7

Zapata, A. (2019). *Deforestation during the implementation of peace accord in Colombia: a panel data analysis (2005-2018)*. International Institute of Social Studies. <http://hdl.handle.net/2105/51291>

COLOMBIA REPORTE NACIONAL VOLUNTARIO 2024



Gobierno del
Cambio



**Naciones
Unidas**



**Programa
Mundial de
Alimentos**



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



CEPAL



Fondo de Población
de las Naciones Unidas



**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA**



Implementado por:

giz

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Fomentado por:



Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza,
Seguridad Nuclear y Protección de los Consumidores

IKI
INTERNATIONAL
CLIMATE INITIATIVE



DANE
CORPORATIVO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA

70 AÑOS



cods



ISA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
SISTEMAS DE AGROALIMENTARIOS



Fundación Alpina